

DESDE EL CORAZÓN DE LA MONTAÑA

Luis Hernández Navarro
Abel Jesús Barrera Hernández

© Luis Hernández Navarro
Abel Jesús Barrera Hernández

Marzo 2020

Descarga gratis éste y otros libros en formato digital en:
www.brigadaparaleerenlibertad.com/librosgratis

Cuidado de la edición: Alicia Rodríguez.

Diagramación: Daniela Campero.

Portada cortesía de Patricia Gasca Mendoza.

DEDICATORIA

Brillan en el mar de mis ilusiones
mis padres, Hugolina y Abel,
y navegan sobre aguas turbulentas,
en este viaje sin retorno
mis hermanos Pilar, Sergio y José.
Sin su comprensión y apoyo
el naufragio hubiera sido inminente.
Junto con Charo,
son mi fiel compañía,
que en todo momento me reconfortan.
Cuando mi corazón perdía su ritmo,
me reavivaron y me devolvieron a las trincheras
de mi gran pasión.

A todas las familias,
que, a pesar de perder a sus hijos,
nos han enseñado
a nunca perder la esperanza.
A saber amar, en medio de la aflicción.
Y pelear contra viento y marea
a costa de la propia vida.
En esta siembra de dolor,
nuestro país ya no es el mismo.
En el horizonte resplandece la justicia

AGRADECIMIENTOS

Este libro no tendría el encanto y la fuerza que adquieren las palabras, sin la entrega, el compromiso y el cariño de todos los amigos y amigas que colaboraron en Tlachinolán. Ellas y ellos le apostaron a un proyecto que busca tejer los sueños de justicia entre los pueblos indígenas de la Montaña y afromexicanos de la Costa Chica, para que se acabe esta terrible noche de la violencia y la impunidad.

Fueron jornadas muy arduas y muy difíciles. En el fragor de las luchas del pueblo fuimos forjando nuestro temple como defensoras y defensores. Con esa creatividad inagotable y ese corazón generoso logramos conformar un gran equipo, para hacer efectiva la defensa de los derechos humanos en un contexto sumamente adverso y de alto riesgo.

Lo más grato fue cultivar entre todos y todas, una relación de amigos y amigas, podemos decir que de hermanos y hermanas, porque pusimos todo el empeño y nuestro corazón para que los pueblos de la Montaña, irruman como sujetos libres que rompan las cadenas de un sistema que los discrimina y los excluye.

Hemos podido escalar con muchas dificultades esta Montaña majestuosa, hermosa, pesada y muy escabrosa. En muchos momentos sentimos que las fuerzas nos vencían, sin embargo, los hombres y las mujeres de esta tierra rebelde, siempre nos extendieron su mano para no desfallecer. Ellas y ellos nos han guiado. No sólo por la sabiduría milenaria que cultivan, sino porque siempre están dispuestos a salir al frente para vencer los peligros. Tenemos el feliz recuerdo que en todo momento nos ofrecieron

lo mejor cuando tuvimos la dicha de visitarlos. Nos brindaron todo lo que tenían y nunca nos dejaron solos, por el contrario, siempre nos cuidaron y nos mostraron su gran estima.

A ustedes y a todos los pueblos de la Montaña y la Costa va mi reconocimiento y mi profundo aprecio, porque me enseñaron a pelear con ahínco y a trabajar siempre al ras de la tierra, como fiel servidor de la comunidad.

Mi especial agradecimiento a Jorge Anaya por su plena disposición para revisar y corregir el texto. A Jovita Crispín por su paciencia y sapiencia, para realizar con gran maestría y eficiencia la transcripción de los textos. A Patricia Gasca que siempre se ha empeñado en imprimirle un sello especial a los trabajos de Tlachinollan. A Patrick y Maureen Doherty por demostrarnos que la fe mueve montañas. A Kerry Kennedy y George Vradenburg, por adentrarse al mundo de la montaña y dejar su corazón.

ÍNDICE

Introducción.....	9
I. Un rayo en la Montaña.....	19
II. De aulas y comunidades	51
III. Tortura	65
IV. La militarización	77
V. Ayutla de los Libres	95
VI. Las mujeres como botín de guerra	109
VII. La muerte tiene permiso	133
VIII. La CRAC-PC	147
IX. El maíz bola	163
X. El sello de la casa	187
XI. Ayotzinapa: la marcha de las tortugas	209
XII. Despojo y resistencia	235
XIII. Tlachi	265
XIV. El horizonte	295

INTRODUCCIÓN

La Cruz de Trouyet

Una enorme cruz de 42 metros de alto, construida con acero y concreto sobre la parte más alta del cerro del Guitarrón, domina la bahía de Acapulco. Majestuosa, se le puede ver casi desde cualquier punto del puerto. Desde la noche del 24 de diciembre de 1970 se ilumina cada noche con reflectores de vapor de mercurio. La gente la conoce como la Cruz de Trouyet.

El apelativo popular no es casual. El moderno mausoleo fue edificado por el magnate Carlos Trouyet, uno de los empresarios consentidos del alemanismo, desarrollador inmobiliario de Acapulco. Dominando la bahía, en el sepulcro del nivel inferior de la Capilla de la Paz, se encuentran sus restos, los de su esposa Milly Hauss de Trouyet y los de sus hijos Carlos y Jorge.

Sin embargo, la muerte en Acapulco o en el resto de Guerrero no es igual para todos. En esa misma ciudad, el pasado 5 de febrero se encontraron 60 cadáveres casi momificados, anónimos, apilados, a la espera de una incineración que nunca llegó. Las macabras imágenes de los cuerpos embalsamados en las instalaciones de la empresa Cremaciones del Pacífico

son dignas de un grabado de la serie *Los horrores de la guerra*, de Francisco de Goya.

Porque una guerra es lo que hoy se vive en Guerrero. En ella combaten una moderna Hidra contra campesinos, maestros, indígenas, estudiantes y sus policías comunitarios. Los saldos de este enfrentamiento están a la vista. Durante 2014 se encontraron fosas clandestinas en Acapulco a unos cuantos metros de los enclaves de Las Brisas y Punta Diamante. También en Iguala, Eduardo Neri, Teloloapan, Juan R. Escudero y Zitlala. De su interior se extrajeron 189 osamentas.

Los camposantos ilegales son, sin embargo, apenas una de las cabezas de la Hidra de la inseguridad guerrerense. Sus otros rostros son las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, los desplazamientos violentos de poblaciones, torturas, las extorsiones y los secuestros. No en balde, Acapulco fue nombrada la tercera ciudad más violenta del mundo.

Las agresiones de esa Hidra son para comunidades, maestros y pequeños empresarios guerrerenses, el pan nuestro de cada día. Si en la mitología griega el monstruo es hija de Tifón y Equidna, en Guerrero es producto de la unión de políticos, *cárteles* del narcotráfico y fuerzas del orden en el sagrado matrimonio de la *narcopolítica*.

Aunque la tragedia de Iguala y la lucha de los padres de los 43 normalistas desaparecidos han dibujado un retrato de cuerpo entero del monstruo, la clase política no se da por enterada de lo que sucede en la entidad. Fingiendo que todo está bien.

Hace unos años, una lona de 50 por 30 metros fue colocada por los maestros democráticos del estado en la parte alta de la entrada principal del ayuntamiento de Chilpancingo. En ella aparece el rostro del senador Sofío Ramírez Hernández, acompañada de un mensaje: “*Narcosenador* 100 por ciento guerrerense”. Durante muchos meses la manta siguió colgada.

Ante una clase política así, que se empeña en mantener a como dé lugar el pacto de impunidad que la protege, no puede extrañar que muchos guerrerenses luchen cada día porque la justicia llegue a su entidad. Desgraciadamente, ese atrevimiento les ha costado a muchos la vida.

La lista de líderes sociales *ejecutados* en los años recientes en Guerrero es escandalosa. Se trata de una política de exterminio hacia los líderes campesinos que inicia desde la década de 1960 y se mantiene hasta hoy. Comienza desde la masacre del 30 de diciembre de 1960 en Chilpancingo; se sigue con la matanza de Atoyac del 18 de mayo de 1967; con la de los copreros en Acapulco; con el asesinato de militantes perredistas entre 1988-89; con Aguas Blancas y el Charco, y con el homicidio de muchos otros luchadores.

Esta visión de un ciclo represivo que se abre a partir de la caída del gobernador Caballero Aburto, es compartida por diversos intelectuales y activistas. “Toda la vida, desde que nosotros nacimos, hemos visto correr sangre”, dice Vicente Estrada, ex preso político guerrerense, compañero de Lucio Cabañas. “Toda la vida hemos visto al Ejército ser como ha sido

y como es ahora. Sabemos cómo actúa el Ejército. He vivido la represión. A veces se recrudece. Recuerdo cómo bajaban a los indígenas de la Sierra de Chilapa, de Tlapa, amarrados los brazos con palos, jalándolos como si fueran animales. Los colgaban y los fusilaban colgados. Cuando hay motivos políticos es cuando más se ensañan. Pero el Ejército siempre actúa de esa manera.”

Es, en los hechos, continuidad de la *guerra sucia* (la represión militar y política implementada por las corporaciones encargadas de la seguridad del Estado mexicano, destinadas a dismantelar a los movimientos de oposición política y armada al régimen) que se echó a caminar en la entidad desde finales de la década de los 60 hasta finales de los 70.

Según el informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad), la *guerra sucia* (1969-1979) se intensificó en la entidad cuando en marzo de 1971 el secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, instruyó a sus órganos internos, con riguroso carácter secreto, sobre el *Plan Telaraña*, que tenía como misión la erradicación de la guerrilla, a cuyos integrantes, una vez asesinados se les daba el nombre de maleantes o gavilleros, con el propósito de no deteriorar la imagen de México.

En síntesis, la *guerra sucia* consiste en la represión militar y política implementada por las corporaciones encargadas de la seguridad del Estado mexicano, destinadas a dismantelar los movimientos de

oposición política y armada al régimen. Fue obra del Ejército. Las policías fueron meros auxiliares en las tareas de represión. Quienes implementaron las medidas para tratar de exterminar la insurgencia fueron, esencialmente, las Fuerzas Armadas.

La violencia y las violaciones a los derechos humanos contra la población guerrerense no cesaron en 1979. Siguieron su marcha después de la llamada *guerra sucia*. Las políticas antsubversivas del Estado tampoco terminaron en 1979, sino que continuaron su curso. Los primeros 19 años del siglo XXI no han sido una excepción en el uso de la violencia estatal en contra del movimiento popular. La represión del pasado y los crímenes de activistas sociales a manos de grupos delincuenciales a lo largo de la última década “es lo mismo”, asegura Vicente Estrada. “La situación no ha cambiado. El gobierno sigue siendo el mismo. Su naturaleza sigue siendo igual. Ellos de por sí, así son. Hay una continuidad en los políticos, en los jefes de policía, en los mandos militares.”

En Guerrero hay una profunda crisis de representación política. El sistema de partidos existente y la clase política local hegemónica están agotados. Su captura por el narcotráfico y los poderes fácticos han cavado una fosa infranqueable entre ellos y amplios sectores de la sociedad. El sistema político realmente existente es incapaz de procesar los numerosos conflictos sociales y crear condiciones mínimas gobernabilidad.

La Montaña

Corría la década de 1970. En Tlapa, Guerrero, la policía judicial y el Ejército bajaban de la Montaña a indígenas amarrados como si fueran animales. Los traían caminando, salvajemente golpeados, con la ropa raída y los pies desnudos y ensangrentados.

Los policías, que se ostentaban como la ley y el orden, con pistola al cinto, los acusaban de haber matado, robado o violado. Los llevaban hasta la comandancia, en pleno Zócalo, y después de torturarlos, los dejaban atados en la calle para el escarnio público.

No era un hecho casual. Sucedió una y otra vez. Algunos de los detenidos ni siquiera llegaban hasta la ciudad. Simple y sencillamente los colgaban en el camino.

Los mestizos de la ciudad aplaudían el espectáculo, que alimentaba su fantasía del indígena bárbaro. Ya bajaron a los indios. ¿Qué harían esos salvajes? –decía en voz alta la gente de razón para justificar sus prejuicios–, y se contestaba: es que arriba en la Montaña de por sí matan, de por sí violan, de por sí roban.

Para quienes conocían las comunidades indígenas de la región, esa violencia era el rostro de la barbarie. ¿Cómo es que tratan a los indígenas como si fueran lo peor? –se decían a sí mismos. En sus pueblos, los indígenas recibían a los sacerdotes y les ponían en la mesa todo cuanto tenían. Sin embargo, al llegar a Tlapa, las autoridades les daban el trato más cruento, más vil.

No era la única cara de la discriminación. Los indígenas bajaban de sus comunidades, cargando sus productos, después de caminar 10 horas, sólo para que en el Jale (la entrada de Tlapa), los mestizos les arrebataran las gallinas, los guajolotes, y les mal pagaran por ello. Y si alguno exigía un trato justo, la policía municipal se encargaba de echarlos a la cárcel acusándolos de robar a los comerciantes.

Tlachinollan fue fundado en 1994, hace ya dos décadas y media, para enfrentar este mar de agravios y discriminaciones. Estaban aún frescas las vigorosas movilizaciones en Guerrero por los 500 años de resistencia indígena y el alzamiento zapatista.

En sus primeros años “nada teníamos que ofrecer, sólo nuestra presencia y solidaridad. Nos martilleaba en la mente la frase imborrable de la cárcel de Tlapa: ‘En este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza’.”

Se trataba de hacer algo que fuera más allá de la denuncia pública; que ayudara a documentar las arbitrariedades policiales y meterlas a los canales de la lucha jurídica. Inspirados por experiencias como las del Centro Miguel Agustín Pro o la del Fray Bartolomé de las Casas, decidieron trabajar en el terreno de los derechos humanos e impulsar procesos organizativos desde las comunidades. Buscaban ayudar a superar el círculo vicioso de las movilizaciones populares guerrerenses que enfrentan represión y desapariciones con levantamientos armados y

tumbando gobernadores, pero que padecen una sociedad civil endeble.

Originalmente, su terreno de intervención se concentró en la Montaña de Guerrero, región en la que cerca de 85 por ciento de la población es indígena, y en la que se ubican 10 de los 100 municipios con el *ranking* más bajo de desarrollo humano en México. Pero también, una zona con muy importantes experiencias de resistencia campesina e indígena en el terreno de la comercialización del café, el abasto de productos básicos, la lucha por la democracia municipal y la gestión de caminos y servicios.

El nombre de Tlachinollan apela a sus raíces. Significa lugar de los campos quemados. Su logotipo está formado por dos imágenes: una representación de una montaña y una figura antropomorfa. Ambas representaciones están inspiradas en partes del *Códice Azoyú 1*, que narra la historia del reino de Tlachinollan entre los años 1300 y 1565 de nuestra era, parte del grupo de documentos conocidos como *Códices Tlapanecas*. En la segunda figura, de forma humana, aparece un Teuhtli (gobernante) que sostiene con la mano derecha el bastón de mando, símbolo de la justicia indígena, que representa el poder jurídico. Con la mano izquierda sujeta un recipiente de cuero lleno de copal, que simboliza el poder religioso.

Muy pronto quedó claro para los promotores del proyecto que tendrían que ir más allá de la simple documentación sobre derechos humanos. Fue así

como se involucraron activamente en la asistencia jurídica y en la educación en derechos humanos.

“Cuando empezamos a enfrentar la realidad de violencia infligida por agentes del Estado –narran–, empezamos a entender lo difícil que es vivir indefensos, con la pobreza y la discriminación. En ese momento entendemos la resistencia histórica de los pueblos indígenas, su perseverancia, su coraje y generosidad. Por eso ahora sabemos que con ellos somos defensores y sin ellos nuestro trabajo sería débil y sin sentido.”

Tlachinollan ofrece asesoramiento y ayuda a las víctimas de la violencia a la hora de interponer denuncias. Pero no sólo lleva demandas ante los jueces. Apoya la agricultura alternativa y sostenible, ejerce de mediador en temas políticos y religiosos, y forma parte de una red más amplia de ONGs que trata de mejorar las condiciones de vida de la población. Su radio de acción se extiende hoy por todo Guerrero.

Guerrero es el laboratorio de la contrainsurgencia. Desde hace 25 años, Tlachinollan ha escrito la bitácora del dolor, la discriminación y la impunidad que ésta ha dejado a su paso, y también de la digna resistencia que la enfrenta. Desde su fundación (e incluso, desde años antes) no ha dejado de luchar un solo día por la reconstitución de los pueblos originarios. En un balance sobre su labor, realizado hace cinco años, decían sobre estos pueblos: “Nos dieron la tortilla, el café, el petate y el sombrero y nos enseñaron a sembrar la justicia comunitaria. Por eso, no tienen sentido todos

estos años sin ustedes. Porque ustedes son los padres, las madres, fundadores y fundadoras de Tlachinollan”.

Desde el corazón de la Montaña narra, a un tiempo, la historia de la fundación de Tlachinollan, de la lucha por los derechos humanos en la Montaña y de movimientos populares claves en Guerrero a lo largo de los últimos 25 años, a los que el Centro de Derechos Humanos ha acompañado.

Se trata de un ejercicio de memoria histórica. “La memoria de los procesos sociales y políticos –señala Pilar Calveiro (<https://bit.ly/2XFEaZu>)– revela la construcción en el recuerdo, de experiencias concretas recuperadas por sus protagonistas. Parte de las vivencias directas de los sujetos, pero siempre refiere a procesos o acontecimientos vividos y, sobre todo, significados colectivamente. El hecho de que su punto de arranque sea lo vivido es fundamental porque es aquello, justamente, lo que permite colocar y precisar la perspectiva –y en consecuencia, los alcances y limitaciones– desde la que se rememora.”

* * *

Los autores quieren agradecer la colaboración del equipo de las áreas de Fortalecimiento Comunitario, Administración y Comunicación de Tlachinollan en la realización de este libro.

I UN RAYO EN LA MONTAÑA

La formación de Tlachinollan

El nacimiento de Tlachinollan fue concebido desde dentro de la Montaña, no fuera de ella. Fue producto de una serie de situaciones que se dieron en la región en esos años. Estamos hablando básicamente de 1992. La Montaña me llamaba. Dentro de mí se cruzaban dos fuerzas: el movimiento indígena por los derechos colectivos y el pensamiento de la Teología de la Liberación.

De un lado, está el despertar de los pueblos indígenas. En 1992 se da una especie de insurrección. Así es como surge el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena. Yo veía que los pueblos empezaban a marchar a Chilpancingo, que bajaban a Tlapa, que iban hacia la Ciudad de México. Y procesaba todo eso.

A mí, como antropólogo, me movió mucho, me llenó de alegría, de gozo, saber que jóvenes indígenas empezaban a utilizar el discurso de los derechos de los pueblos. Que comisarios y gente de los pueblos bajaban con sus bandas para las marchas y

para presentar sus pliegos petitorios. Vi al actor comunitario, a los pueblos, bajar a Tlapa y hablar. Fue algo que me dio sentido. Me dije: “bueno, la antropología tiene que estar acompañando a estos actores”. Sin embargo, no tenía claro cómo.

Del otro lado estaba el ala religiosa. Yo me formé en el seminario. Me marcó la formación en el Seminario de Tehuacán. Allí estaban los obispos del sureste ensayando una nueva formación de los sacerdotes en la Teología de la Liberación. Me identifiqué mucho con ese proyecto y me dije: “voy a optar por una opción por los pobres”. Leía los documentos de Puebla, de Medellín. Estaba muy empapado en ellos. Pero, al mismo tiempo, me decía que mi caminar no era dentro de la Iglesia, sino como un laico que quiere asumir una causa.

En aquellos años había sacerdotes trabajando en la línea de la Teología de la Liberación en la Montaña. Eran pocos, apenas cinco o seis. Ellos optaron abiertamente por irse a las comunidades o a las parroquias más alejadas, como una forma de decir: “necesitamos estar con la gente allá arriba”. Eso me hizo optar por estar allá con los pueblos. Así es que me iba con los sacerdotes a las comunidades, los acompañaba.

Al mismo tiempo, en 1992, se creó la diócesis de Tlapa. Entiendo que fue parte de una coyuntura histórica de la Iglesia, que quiso mostrar el rostro indígena estableciendo una diócesis en la Montaña. Allí llegó Alejo Zavala, un obispo de pueblo, que no

estudió en Roma. Me identifiqué mucho con él, en términos del acompañamiento. Empezó a salir a la Montaña y fui con él. Para mí fue muy importante observar cómo la gente tenía mucha esperanza de que un obispo se acercara a sus problemas.

Esa experiencia provocó que comenzara a cuestionarme mi formación y mi trabajo de antropólogo, que era básicamente documentar las prácticas religiosas de los pueblos indígenas, sus rituales.

La defensa de los presos

En esa labor en la Montaña, fue determinante mi encuentro con Ofelia Medina en la Ciudad de México. Ella trabajaba el tema de los presos indígenas. En esos años se había logrado la libertad de Zósimo Hernández, un indígena nahua veracruzano injustamente preso, que no había contado con traductor cuando fue juzgado.

En el mundo de la antropología se abría paso una corriente importante para impulsar la lucha de los pueblos, como ha sido la antropología jurídica. Con ella se empezó a documentar la situación de los presos indígenas y la forma en que el derecho positivo discriminaba e impulsaba una práctica racista, genocida.

Me acerqué a Ofelia Medina en 1991 por medio de otra antropóloga, Yólotl González. Ofelia quería impulsar la defensa de presos indígenas en la Montaña. Ella tenía una organización llamada Comité de Solidaridad con los Grupos Étnicos Margina-

dos. Tenía un buen contacto con el Instituto Nacional Indigenista (INI), dirigido en aquel entonces por el maestro Guillermo Espinosa.

Yo ya me regresaba a la Montaña. Y a ella le interesó establecer una colaboración. Me dijo que por qué no hacíamos la documentación de casos, su seguimiento, y trabajábamos para que liberaran a los presos indígenas.

Regresé a Tlapa con la idea de hacer esa labor, de escribir sus historias de vida. Fui a ver a los presos en Malinaltepec, en Huamuxtitlán y en Tlapa. Me encontré con casos patéticos de indígenas que no sabían de qué estaban acusados y no hablaban español. Algunos ni siquiera tenían un proceso bien elaborado. No contaban con defensores.

Por mi formación me impresionaban los rituales agrícolas en la Montaña. Siempre tuve interés en la antropología religiosa, especialmente en los rituales; participaba mucho en congresos con el maestro Elio Masferrer. Y eso influyó mucho en cómo hacía yo esas investigaciones.

Desde antes de 1991 había incursionado en esa línea. Trabajé con el antropólogo Samuel Villela y la maestra Blanca Jiménez. A él le interesaban los rituales agrícolas. Organizamos en 1990 un evento sobre los 500 años de la fundación del pueblo de Chiepetlán. Hicimos una investigación de códices de la Montaña. Realizamos una exposición de códices en la Dirección de Etnología y Antropología Social

(DEAS) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Investigamos la mitología nahua. Hicimos un coloquio sobre la Mixteca Nahua-Tlapaneca en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Sin embargo, aunque todavía no lo tenía claro, yo ya había puesto un pie en el estribo de los derechos humanos.

Así es que me metí más a fondo en el asunto de los presos. Eso me ayudó a preguntarme qué onda con los derechos de los pueblos, qué onda con el derecho positivo, qué con el proceso penal. Desconocía por completo ese tema.

Hablé con unos abogados para que me ayudaran en la región. Me respondieron que si no sabía que era muy peligroso. Me ofrecieron: “Te podemos ayudar, pero no en llevar la defensa de algún caso. Hay que meterse con los judiciales, hay que denunciarlos y, la verdad, yo no quiero problemas”.

Como no encontraba algún abogado que me pudiera auxiliar, empecé a meterme en el tema. No fue fácil. Me di de topes contra la pared. Me cuestionaba qué podía hacer como antropólogo en el terreno jurídico.

Establecí contacto con Sergio Sarmiento, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, y con Joaquín Flores, que en ese entonces estaba como asistente. Ellos estaban interesados en el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena. Querían hacer un seguimiento de todas las expresiones de estas protestas. Me propusieron acompa-

ñarlos en su proyecto. Me integré con ellos, aunque más bien como externo. Hicimos un trabajo de seguimiento. Íbamos a sus reuniones y asambleas. Así pues, seguí yendo a las comunidades, tanto por la investigación de códices como por la del movimiento del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, y por la Iglesia.

Todavía no se fracturaba el Consejo Guerrerense. En ese entonces era un trabajo que apenas estaba tomando forma.

La lucha por la carretera

El cura Mario Campos empezaba a hacer trabajo con las comisarías, organizando a los pueblos para demandar que se abriera una carretera para unir la Montaña con la Costa Chica, la Tlapa-Marquelia. Era algo que en aquellos tiempos uno no imaginaba que fuera a ser posible. El padre Mario influyó mucho en otros sacerdotes para que hablaran con los pueblos, se organizaran y protestaran, para que la carretera se construyera.

Las comunidades empezaron a reflexionar en asambleas, sobre cuáles eran los problemas que enfrentaban. Las asambleas fueron promovidas por las parroquias con las que se coordinaba Mario, junto a organizaciones de aquella región, como la Unión de Ejidos Luz de la Montaña.

Yo fui compañero de Mario Campos en el seminario. Él estudió en Puebla y tuvo una formación muy conservadora. Sabía mixteco, pero allí dejó de

hablarlo. Sin embargo, después de que se ordenó y se fue a las comunidades de la Montaña, recuperó la lengua y asumió un papel de sacerdote por los derechos de los pueblos.

La gente comenzó a ver que el cura tenía mucha inquietud por los problemas sociales. Y él logró catalizar el proceso organizativo que se daba en la región. Empezamos entonces a platicar sobre la posibilidad de articular un movimiento amplio, en el que participaran el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, las organizaciones sociales, el magisterio organizado en Tlapa y la Iglesia. Todavía no sabíamos bien a bien qué queríamos, pero era evidente que había malestar y tratábamos de darle una salida.

Esta labor con la Iglesia coincide en el tiempo con mi encuentro con Ángela Gama, quien trabajaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La labor con los presos me hizo ver la necesidad de empezar a dar talleres sobre derechos humanos en las comunidades. Esto se podía hacer cuando teníamos reuniones y asambleas. Invitamos a la CNDH a impartir esos talleres en la región. Nosotros no los dábamos, eran los integrantes de la Comisión quienes lo hacían. Convocamos a comisarios y a maestros a los talleres. Asistían entre 150 y 200 personas. Fueron muy importantes.

En ellos se enseñaba el abecé de los derechos humanos. No se abordaban todavía los derechos colectivos. Se concentraban en los derechos individua-

les. Más que una reflexión o teoría, la preocupación por los derechos colectivos surgió en la práctica, en el movimiento. El Consejo Guerrerense fue la luz que abrió esos nuevos caminos.

Esos talleres ayudaron mucho a despertar. Surgieron organizaciones muy radicales, muy duras –como la Unión Obrera Campesina Emiliano Zapata (UOCEZ)– que se involucraron en el tema. Eso ayudó a seguir en este camino.

Trabajamos en esta dirección Sergio Sarmiento, Joaquín Flores, Mario Campos y otro compañero mè'pháá (tlapaneco), Abad Carrasco, un antropólogo que se dedicó a fondo a la recuperación de su lengua materna. Ahora es un especialista en lengua me'phaa. Comenzamos a platicar también con Mario Martínez, un antropólogo-sociólogo de Tlapa, muy inquieto por hacer algo por las comunidades.

Los consejos de desarrollo

Por esos años estuvieron en la región Julia Carabias y Carlos Toledo, del Programa de Aprovechamiento Integral de los Recursos Naturales (PAIR). Era un programa de la UNAM que tenía fondos para que universitarios hicieran sus tesis y al mismo tiempo realizaran trabajo de campo. Tuvimos contacto con ellos, pero no mucha relación.

Se suponía que ellos llevaban años ahí. Traían la agenda política del Movimiento de Acción Popular (MAP). Después se fueron a Alcozauca, donde

Othón Salazar había hecho labor política a lo largo de muchos años. Hicieron un buen trabajo. Lograron tener presencia, pero no estaban muy arraigados en las comunidades. Su enfoque era muy técnico. Estaban más interesados en lo académico, en la investigación. Sin embargo, ahí estaban.

Hasta la fecha Miguel Mijangos, quien participó en ese proyecto, sigue comprometido con la Montaña. Otros compañeros se quedaron en la región y ayudaron en el proceso de reflexión.

Hubo un momento en que Carlos Toledo y Carlos Rojas, de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), empezaron a proponer la formación de un Consejo Regional de Desarrollo. En ese tiempo Julia Carabias todavía no era secretaria de Ecología, sino titular del Instituto Nacional de Ecología o algo así. Plantearon la necesidad de construir un modelo de desarrollo regional en la Montaña. Carlos Rojas le dijo a Othón Salazar: “Oiga, maestro, en la Montaña necesita hacerse un trabajo más estratégico, más regional, pensar en obras de mayor impacto. Necesitamos que se involucren organizaciones, que se involucren pueblos, comisarios, las instituciones y los presidentes municipales”.

El Consejo Regional se creó con organizaciones sociales, pero los funcionarios propusieron que también lo integraran dependencias públicas y ayuntamientos. Al final aceptamos con la condición de que fuera autónomo. La intención era que el Consejo ayudara a impulsar obras de impacto regional para

romper con el aislamiento y el rezago. Había un re-
juego. Al final, los de Sedesol se lo llevaron al enton-
ces presidente, Ernesto Zedillo, quien aceptó que se
creara. Zedillo vino a la reunión en Olinalá en la que
se formó. Varios de nosotros no fuimos. Invitaron al
maestro Othón y tampoco fue. Lo querían nombrar
presidente del Consejo y él no aceptó. Allí designa-
ron al compañero Roberto Cabrera.

Nosotros empezamos a platicar sobre esta
idea, y a tener reuniones y talleres para analizarla.
Veíamos que estaba bien, siempre y cuando el Con-
sejo fuera autónomo. Ellos nos vendieron la idea de
que así iba a ser. Y medio le entramos, pues estaba el
maestro Othón de por medio. Él me invitó a partici-
par. Era él quien nos daba la confianza en este traba-
jo. Tratamos de articularnos con ellos. Sin embargo,
más adelante nos salimos. Era evidente que esa auto-
nomía no era autonomía.

A pesar de esta separación del proyecto,
nuestro trabajo con las comunidades siguió adelan-
te. Después de participar en los talleres de derechos
humanos que se impartieron durante un par de años,
la gente empezó a ir más conmigo o a verme en las
comunidades, y a plantearme sus problemas. “Oye
-me decían-, yo tengo este problema de tierras, de
presos, con el Ejército...” Fue entonces cuando empe-
zamos a reflexionar sobre qué hacer y cómo hacerlo
para atender esa problemática.

Tlachinollan

En 1992 me metí a fondo en el movimiento de los 500 Años. Durante ese año y el siguiente dimos los talleres sobre derechos humanos. Ahí comencé a platicar con Sergio y con Joaquín, con Mario Martínez y con Abad, sobre la posibilidad de constituirnos en asociación civil.

Nosotros caminamos aparte del movimiento de los 500 Años. Cuando ellos hacían sus reuniones o asambleas en Tlapa, participábamos. Su liderazgo era muy fuerte. Nosotros apenas estábamos queriendo iniciar un trabajo. Tlachinollan todavía no era Tlachinollan. No nos veían como competidores, sino como complementarios. Nos veían como investigadores que apoyaban y no como activistas. Pensaban que estábamos impulsando algún proyecto. Éramos sus aliados.

Entablamos una buena relación con las organizaciones productivas de pequeños productores de la región. Llegábamos con el padre Mario y él nos presentaba como amigos, como compañeros del seminario y de la diócesis, como parte de la Iglesia. Había mucha simpatía hacia Mario. Para ellos era el primer cura que mostraba una imagen cercana a la gente. Lo respetaban mucho; confiaban en lo que él decía y en la gente que llevaba.

En ese entonces presentábamos proyectos por medio del Comité de Solidaridad con los Grupos Étnicos Marginados, la figura asociativa de Ofelia

Medina. Empezamos a recibir apoyos del Instituto Nacional Indigenista (INI) en 1991, 92 y 93. Pero en el INI nos dijeron: "Oigan, es muy complicado. Ofe-
lia esta acá (en la Ciudad de México) y ustedes están
allá. ¿Por qué no formalizan una asociación?"

Eso reforzó la idea de formar la asociación. Y ahí fue cuando nos dijimos: "Vamos trabajándole al tema de los derechos humanos". Es que veíamos que la gente sí se interesaba y nos planteaba sus problemas.

Fue así como decidimos crear Tlachinollan. Pensamos en todo lo que había que hacer en la región: en los presos, en el acompañamiento a los pueblos, en sus problemas agrarios, en los maestros que empezaron a ser perseguidos por el Ejército, en las comunidades indígenas que demandaban la construcción de carreteras.

Traíamos la inquietud de formar comités parroquiales de derechos humanos. Había curas interesados. Y al obispo también le interesaba.

La fundación de Tlachinollan fue una iniciativa propia. No la consultamos con el obispo. Quienes se fueron integrando a Tlachinollan eran abogados, y venían de fuera de la Montaña, del trabajo social. Yo los fui reclutando.

Dimos a conocer la creación de Tlachinollan con estos religiosos, en honor a los pueblos indígenas que fundaron el reino de Tlachinollan. Comenzamos a trabajar con la diócesis. La idea era realizar talleres con las parroquias para formar comités y promotores de derechos humanos. Los proyectos en los que el

INI nos apoyó fueron enfocados a la formación de esos comités y promotores.

La diócesis de Tlapa

Con la creación de la diócesis se inició un proceso de consulta por medio de las asambleas diocesanas para la elaboración de un plan diocesano de pastoral. Ahí estuve muy presente. Ese plan tenía una línea marcadamente liberacionista. Había muchos curas y religiosos comprometidos. Al saber que el obispo era abierto y que había condiciones para trabajar en la Montaña, llegaron más de doce congregaciones. Todas se orientaban a trabajar en comunidades indígenas.

Se creó así un equilibrio muy interesante entre los religiosos que ya tenían un compromiso claro de acompañar a los pueblos indígenas, algunos curas de la Teología de la Liberación local –diocesanos en su mayoría– y un obispo abierto y dispuesto.

Yo era como si fuera cura, así que participé mucho en la elaboración de ese plan. De estas reuniones y reflexiones salió la orientación de trabajar en el terreno de los derechos humanos en la diócesis. Y se formó una comisión para ponerlo en práctica. El obispo me encargó que yo la coordinara. Simultáneamente me nombró representante legal de la diócesis, cargo que tengo hasta la fecha.

He tenido una cercanía muy grande con los tres obispos que han pasado por la diócesis: don Ale-

jo Zavala, don Roberto Domínguez y don Dagoberto Sosa. Con los tres he mantenido una relación cercana. Ellos han reconocido el trabajo de Tlachinollan. Más allá de que tengan otra manera de pensar, están claros en que Tlachinollan es un baluarte en la promoción y la defensa de los derechos humanos en la diócesis. Cuando hay problemas y conflictos en los que se demanda su intervención, los remiten al Centro o directamente conmigo. Caminamos por la vía de los derechos humanos, con la cobertura de la diócesis.

Al crear Tlachinollan nos encontramos con el problema de que Sergio Sarmiento y Joaquín Flores eran de la Ciudad de México. Abad Carrasco era de la región, pero ya tenía un proyecto más dibujado hacia el tema lingüístico. En ese tiempo le interesaba hacer un libro sobre la lengua me'phaa. Mario era solidario, pero estaba lejos; trabajaba en Chilpancingo. Al final, para cubrir el requisito de cinco socios en la formación de la asociación civil, incorporamos a un cuñado mío, Rito Betancourt.

A partir de la fundación de Tlachinollan nos concentramos básicamente en dar talleres de derechos humanos. El trabajo de sensibilización y de formar grupos, de algunos promotores, fue de bajo perfil.

En el Centro necesitábamos un consejo consultivo que nos acuerpara y arropara. Decidimos que lo integraran el obispo Alejo, Ofelia Medina y Yólotl González (la antropóloga que me contactó con Ofelia); Carlos Toledo, que era del PAIR y andaba todavía por

allá; Roberto Cabrera, un activista muy importante en su momento, que es de la CIOAC (Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos), y dos curas: Antolín Casarrubias y Bernardo Valle, que estaban al frente de la línea de la Teología de la Liberación.

El lenguaje de los derechos humanos

La mayoría de las organizaciones populares de la época luchaban contra la represión. Que comenzaran a trabajar en torno a los derechos humanos fue una novedad. Este cambio de terreno y la nueva orientación fueron, en parte, resultado de la Teología de la Liberación.

Yo pensaba que, como señalaba la Teología, los derechos humanos debían “encarnarse a la realidad”. Pero también decía, a partir de mi formación de antropólogo –que es, viéndolo muy rigurosamente, un discurso occidental–, que este discurso cabía en la ciudad, pero no en la Montaña.

Estuve como antropólogo en la Sierra Norte de Puebla, trabajando con totonacos. Allí llegó un grupo de religiosos progresistas que empezaron a hablar de la Teología de la Liberación. Me tocó ver su afán de ayudar a la gente, de crear conciencia y de difundir la Biblia. Hablaban de un Dios liberador y de los explotadores y explotados. Pero no sabían el totonaco y los traductores no querían traducirlos, porque lo que decían iba contra el riquillo del pueblo. Concluí que ese discurso no funcionaba. La gen-

te no veía bien a los religiosos. Percibían que no eran religiosos, sino políticos.

Yo compartía la visión de la antropología de los Andes, de Manuel Marsal. Él hablaba de la iglesia cultural. Sostenía que hay categorías de los pueblos religiosos que son más culturales. Me daba cuenta de que existía un choque entre la iglesia liberadora y la iglesia cultural. Y me parecía que el discurso de la iglesia liberadora no debía aplicarse como se estaba haciendo en la Sierra Norte de Puebla. Teníamos que entrar a las categorías culturales de lo que significaba la liberación para los pueblos, desde su propia cosmovisión. Este choque me provocó una crisis, pero me ayudó mucho a entender la naturaleza del reto que tenía por delante.

Lo mismo me sucedió con los derechos humanos. ¿Cómo hablar de derechos humanos en un contexto donde la gente tiene distintas referencias políticas y culturales? En la región había un discurso político proveniente del Partido Comunista y del trabajo de Othón Salazar. Había un movimiento en contra de la represión. Estaba el movimiento magisterial contra los caciques y la represión de Figueroa. Se realizaban tomas de carreteras. Confluía una amplia gama de actores y de propuestas políticas.

Pero no sólo eso. Al mismo tiempo se criticaba al Partido Comunista y al activismo de los líderes que no estaban en las comunidades. Estaban los compañeros de la Teología de la Liberación, muy comprometidos, pero no contemplaban en su queha-

cer lo agrario ni los derechos colectivos. Había como un vacío. Y, simultáneamente, había desgaste. Se luchaba con mucha fuerza, golpeando duro a los enemigos, pero al final terminaba siendo una lucha sorda.

A nivel nacional estaban el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). Los dos con sus análisis, sus reflexiones, sus críticas. Al conocer su labor concluí que por ahí era donde había que caminar.

Empecé a caracterizar la forma de gobernar que había en el país, a revisar lo que sucedía en México. Encontré cómo el Estado era el causante de la crisis de gobernabilidad que se vivía, cómo era un Estado represor, responsable de las violaciones a los derechos humanos. Sentí que podíamos aportar en documentar y desentrañar esa realidad de la Montaña.

Al principio nos acusaban de ser rojos y de pertenecer al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Es más, en un documento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que enviaron en ese entonces a la Sedesol de México, afirmaban que en la diócesis de Tlapa había muchos curas radicales. Que promovían la lucha armada. Llegaron a señalar a varios sacerdotes. De mí dijeron que era cura, jesuita, que había trabajado en el INI de Chiapas y que era de la línea dura de la Teología de la Liberación. El obispo Alejo reclamó a Carlos Rojas por qué había solicitado esta información que resultaba

falsa. Al final supimos que el delegado de la Sedesol en Tlapa, Sergio Maldonado, le había pagado a gente que trabajaba en el Cisen para hacer este documento confidencial.

El discurso de los derechos humanos nos permitió evitar que nos encasillaran. Rehuimos usar la presión y el discurso radical. Nos dedicamos a registrar los casos en los que se violaban los derechos humanos, a atender a las víctimas, a escucharlas, a dialogar y a analizar la situación que vivíamos.

No era muy claro qué papel debíamos desempeñar porque no hablábamos de tortura ni de desapariciones forzadas, como hacemos ahora. Más bien señalábamos la represión que ejercía el cacicazgo. Todavía no construíamos o no retomábamos las categorías que después fueron las claves de nuestra labor.

Fuimos encontrando un espacio para intervenir en las comunidades al margen de los partidos, las agencias gubernamentales de desarrollo, las organizaciones políticas e incluso del mundo eclesial.

Fue entonces cuando empezamos a descubrir que había un vacío en la región, en términos de cómo atender los conflictos. No es que nosotros supiéramos cómo hacerlo. Pero nos ayudó mucho visitar las comunidades. Fue clave llegar y que la gente te platicara sus problemas. Los escuchabas y te preguntaban: “¿cómo me vas a ayudar?” Esa interpelación permanente nutrió nuestro pensamiento. Había que hacer algo. No le podíamos proponer a la gente que

marchara o se rebelara. Intuimos que los derechos humanos podían ser una herramienta eficaz para enfrentar su problemática.

Pero no era fácil. La realidad es que en esas comunidades y en esa región no hay derechos humanos. Hay que pelear por ellos. Fue en esta interacción como empezamos a discutir la necesidad de crear un centro que los promoviera y ayudara a defenderlos.

Pero ¿quién o quiénes lo podían formar? De todos lados me decían que no podíamos hacerlo. Me sentía sin armas, sin herramientas para salir al frente. Me advertían: “Cuidado con los judiciales. Cuidado con los militares. No te metas en esas broncas. Te van a matar”. Incluso alertaban a mi familia: “¿Qué está haciendo? ¿Está loco? ¿Cómo va a trabajar en contra del gobierno?”

Había mucha incomprensión de lo que queríamos hacer. No había claridad. Pensaban que se trataba de ir en contra del gobierno, de pelear contra la autoridad. Con los únicos que encontraba cobertura era con los curas, con los religiosos, con algunos académicos, con las comunidades. Y hasta ahí.

Pero entonces los religiosos me dieron buenas noticias. “¿Sabes que nosotros tenemos contacto con la Universidad Iberoamericana de León? Allá hay amigos a los que podemos decirles que envíen jóvenes a hacer su servicio social”, me dijeron. Y por conducto de Mario Martínez, que trabaja en la Universidad Autónoma de Guerrero, comenzamos a recibir

chavos para que también hicieran su servicio social. ¡Formamos Tlachinollan con jóvenes estudiantes de servicio social de la Ibero León y de la Universidad Autónoma de Guerrero!

El despegue

La formación de Tlachinollan fue anunciada en reuniones y talleres con la iglesia, los curas, las organizaciones, las comunidades. Se les avisó que se iba a formar un centro de derechos humanos, con una oficina y abogados, en el que se atenderían los problemas de las comunidades y sus habitantes. “Los abogados los van a apoyar para ir al Ministerio Público, para ir a ver al juez, para ver al presidente municipal, para ayudarles a hacer oficios, para ayudarles hacer gestiones, para acompañarlos”, les dijimos.

En los hechos, más que defender los derechos humanos, lo que hicimos al principio fue una cuestión práctica, un servicio social. Irónicamente eso fue lo que atrajo a las comunidades.

El equipo original estuvo integrado por mí y por cuatro jóvenes de León. Joaquín Flores me acompañó un rato en este proceso de construcción del Centro. Sobre todo se ocupó de establecer relaciones con otras ONGs, como el Prodh. Ya había nacido la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos; vimos necesario incorporarnos a ella y Joaquín participaba en las reuniones y entablaba las relaciones. Yo estaba más en Tlapa, en el terreno.

Presentamos el Centro en un acto público en el Zócalo de Tlapa. Estuvieron el obispo, Yólotl, Ofelia y varias comunidades. Lo hicimos en grande. Allí anunciamos: “Vamos a crear una oficina para atender los problemas de la gente de la Montaña. Para defender sus derechos”.

Desde entonces empezamos a hablar sobre una palabra que no existía en los pueblos. Sobre una palabra cuyo significado no era tan claro, a la que íbamos a llenar de contenido.

Como no teníamos un espacio donde trabajar, utilizamos dos cuartos que mi papá me había dado en su hotel Dulce María. Tenía una sala y un lugar para dormir, que había arreglado para vivir. Los adaptamos para hacer la oficina. Colaboraban cuatro estudiantes: dos de derecho, uno de diseño gráfico y otro de comunicación.

Ellos estuvieron dos meses –junio y julio–, pero en ese tiempo llegaron al relevo tres estudiantes de derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG). Su servicio social era de seis meses. Cuando terminó su plazo, en diciembre, me avisaron que iban a seguir. Les interesó nuestra labor. Ya habían terminado la carrera. Y, como teníamos esos proyectos del INI, los apoyábamos para su sostenimiento. Negocié con mi papá que pudieran dormir en el hotel. Se compró una estufa y se instaló en otro cuarto para que prepararan sus alimentos. Allí comían, dormían y trabajaban, con una ayuda de mil pesos mensuales.

Al día siguiente del acto en el Zócalo de Tlapa -un lunes- llegó gente de la comunidad de Tenango Tepexi. Iban con el padre Antolín, que era como del consejo consultivo. Yo tenía mucho contacto con ellos. En esos días iba mucho a las comunidades. Cuando supieron que creamos la oficina y que iba a tener abogados que no cobraban un centavo, se lanzaron a vernos. Más que el asunto de los derechos humanos, el atractivo para ellos era la oficina donde había abogados a los que no necesitaban pagarles.

Ese lunes llegó Natalio Peña. Yo lo había entrevistado como parte del proyecto de los presos. Él ya no estaba detenido, pero el padre Antolín me sugirió: "Habla con Natalio. Él te va a decir todo lo que sufrió. Porque él sufrió tortura".

Natalio iba acompañado de Ramón y otros integrantes del comisariado de bienes comunales. Dijeron: "¿Dónde están tus abogados? Venimos por el problema agrario que nosotros tenemos allá con Ahuatepec pueblo. Estamos peleando varias hectáreas. También tenemos problemas con Coachimalco. Queremos ver cómo nos van a ayudar, porque ya hemos ido con la Reforma Agraria y no nos están haciendo caso. Queremos que nos orienten, qué tenemos que hacer porque los problemas continúan. Se siguen metiendo los animales. Nosotros los detenemos y luego ellos nos demandan. El Ministerio Público nos manda a traer. Ya detuvieron al comisariado y no sabemos qué hacer".

Los primeros temas que tratamos fueron cuestiones agrarias. Las organizaciones campesinas tradicionales no se ocupaban de esos asuntos. Como eran cuestiones un tanto técnicas, que iban desde poner demandas en los tribunales hasta la negociación, no se hacían cargo de ellas.

Los jóvenes que estaban haciendo su servicio social no habían cursado derecho agrario en su universidad. En León ese tema les pasó de noche. A Natalio y a sus compañeros les propuse:

-Si quieren, vamos a hablar con el delegado de Gobernación para saber qué está pasando, por qué no los están atendiendo. Vamos a ir con los de la Reforma Agraria para que nos expliquen.

-Eso es lo que queremos, porque no nos hacen caso -me respondieron.

Un abogado y yo, además de Natalio y sus compañeros, fuimos con el delegado de la Secretaría de Gobernación. En ese tiempo, su función en la Montaña era informar. Eran informantes del Estado.

El hecho de que fuéramos a Gobernación con abogados los hacía sentirse acompañados. Era curioso que hasta las organizaciones radicales querían que Gobernación estuviera presente en sus pláticas para resolver sus problemas. La veían como la mediadora o como la instancia a través de la cual podía establecerse contacto con las autoridades de arriba. En aquel entonces tenía mucho peso.

Llegamos allá y hablamos con Jorge Rodríguez, quien hasta la fecha sigue siendo el jefe de Go-

bernación en la región. Nos conocíamos. Ahí mismo estaba la oficina de la Reforma Agraria. Le señalé: “Venimos con los señores de Tenango. Son representantes de las autoridades agrarias de allá. Me dicen que ya hablaron contigo, que su caso no está avanzando. Queremos tener una reunión. Viene aquí el abogado. Yo vengo como representante de Tlachinollan. Queremos que se atienda, porque no se está atendiendo”.

Ese primer caso tuvo seguimiento. La autoridad mandó a traer a la otra parte de Coachimalco. Nos sentamos a una mesa. Se llegó a un acuerdo, es decir, se firmaron minutas, pactos, porque esos conflictos son muy profundos. Fue un ejercicio de conciliación.

Después de esa experiencia la gente de Tenango presumía: “Ahora sí tenemos nuestros abogados”. El que estuviéramos con ellos los hacía dejar de lado ese sentimiento de indefensión que tenían frente a la autoridad. Les permitía no frenar sus ganas de tener justicia ante un aparato burocrático que los hacía sentir sin poder.

Empezamos a ayudar en la conciliación. Tanto así que hoy en día, a veces, el secretario de Gobierno del estado llama y me dice: “Oye, Abel, por favor, ayúdanos a hablar con la gente que está bloqueando. Diles que los recibimos, pero que ya, por favor”. O sea, nos piden intervenir a ese nivel. Apenas tuve que buscar al gobernador para decirle: “Ya van tres noches que la gente está bloqueando, tres días. Ellos me pidieron que por favor usted los pueda recibir”.

Una bisagra

Las autoridades nos recibían porque me conocían. En esos años siempre viví en Tlapa. También porque tenían la idea de mi formación de cura. Cuando era seminarista, me decían cura. Para ellos era una especie de cura, de antropólogo que estaba en la Iglesia. Pero, además, por ser el hijo de Abel Barrera. Mi papá es una persona con dinero. Los desconcertaba que alguien que no tenía necesidad, que socialmente tenía otra posición, estuviera apoyando a gente de comunidades indígenas. Eso me empezó a dar autoridad moral. Y, cuando había necesidad de cobijo, yo aprovechaba y les decía: “Vengo de parte del obispo”.

Nos convertimos en un puente entre autoridades y comunidades. Las autoridades no saben resolver problemas, no están en sintonía con los conflictos que tienen que resolver, no son capaces de atender situaciones para prevenir conflictos mayores. Así es que, ante ese vacío, maestros, comisariados, dirigentes de organizaciones sociales, comenzaron a ir a Tlachinollan para que les ayudara a conseguir una cita o para que se hablara con los funcionarios.

El nivel de interlocución que tenemos ha escalado. Ahora podemos entablar comunicación con el gobernador y que acepte nuestra intermediación. Somos garantes de un diálogo que no va a generar rispidez, sino respeto. Eso ha crecido.

Fue muy importante esa primera lección que tuvimos con la gente, al acercarla con la autoridad. Fue un éxito lograr que les hicieran caso, que supieran

que no estaban solos, que se llamara a la otra parte con la que no se podían sentar a dialogar y se firmara un compromiso. Fue muy relevante hablarles en un lenguaje en el que se comprendiera que es más fácil resolver un conflicto entre nosotros a que otros abogados, a quienes les tendrían que pagar, los pusieran a pelear, y que ellos mismos fueran quienes quisieran solucionar los problemas de las comunidades.

Llenamos un vacío sin darnos cuenta. Yo no lo tenía claro. Teníamos la intuición del trabajo que hacíamos. Estaba el trabajo de la Iglesia, la conflictividad agraria, el movimiento magisterial, las organizaciones sociales, las productivas, todas haciendo su chamba. Pero, a final de cuentas, había una grieta. No había canales para atender los problemas.

El gobierno estaba cerrado. Era duro, represivo. En la sociedad también había grupos duros, movilizados, dispuestos a pelear. Había sectores involucrados en la lucha político-partidista que decían: “Vamos a tirar al PRI, vamos a formar un partido, vamos a hacer oposición”. Estaba la Montaña roja en movimiento, opositora.

A final de cuentas, todo estaba politizado. Todo. La conflictividad agraria, las demandas sociales, la problemática relacionada con el acceso a la justicia, la situación de la mujer. O los derechos indígenas, su cultura, sus necesidades básicas. Todo estaba politizado. Todo descansaba en un discurso de oposición, de resistencia, de lucha organizada.

Con esa realidad se toparon las corrientes religiosas, los promotores de la Teología de la Liberación, de antropología, de derechos humanos que se acercaron con las comunidades. Tuvieron que aprender cómo viven, cómo hacían sus asambleas. Para nosotros fue como encontrarnos un manantial de saberes y experiencias de los que nos fuimos nutriendo.

Eso dio pie a que el discurso de los derechos humanos empezara a abrir brecha. Las comunidades encontraron en nuestro Centro algo suyo: un espacio de apoyo a los pueblos indígenas, con abogados en Tlapa que los atendían sin cobrar.

Lo indígena en el centro

A mí me impactó la lucha del Consejo Guerrerense 500 Años. Pero cuando surgió, no estaba aún muy clara su reivindicación a favor de los derechos indígenas. Eso sucedió hasta el levantamiento zapatista de enero de 1994.

Fue curioso. Años después, cuando el zapatismo ya había emergido, las comunidades y las organizaciones nos llamaron para que ellos vinieran a las regiones e hicieran la consulta. Nosotros la coordinamos. Recibimos a la delegación de zapatistas en la Montaña. Hasta Marcos vino. Nuestros enemigos nos cuestionaban. Nos decían que éramos “como zapatistas”. Ahí empezamos a asimilar el discurso sobre los derechos de los pueblos originarios.

Del Consejo Guerrerense aprendimos sobre la cuestión indígena. Pero lo hicimos desde su movi-

lización y sus demandas. Fue muy interesante cómo el Consejo logró aglutinar a los comisarios alrededor de demandas concretas, como la construcción de comisarías y escuelas. Pero no como parte de los derechos a la libre determinación, a la autonomía, al autogobierno.

Participamos con la Policía Comunitaria, que se comenzó a crear en 1995, en la construcción de un sistema de justicia. Fue en ese momento cuando empezamos a hablar de los derechos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de cómo construir un sistema de justicia a través de las asambleas.

Nosotros aparecimos formalmente en 1994, pero desde antes habíamos trabajado con las comunidades. Y, cuando en 1995 se creó la Policía Comunitaria y se realizaron las reuniones para gestionar la construcción de carreteras, ya llevábamos dos o tres años laborando en la región. No nos metimos mucho en la gestión de proyectos. Más bien trabajábamos con gente del INI para que el Instituto apoyara a las comunidades.

Primeros pasos

El INI nos ayudó financieramente durante nuestros primeros cuatro años de vida. Nos daba 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos al año por proyecto.

Por medio de Sarmiento tuvimos contacto con una organización de Canadá, llamada Derechos

Humanos y Democracia, que nos apoyó con algunos recursos. Y luego establecimos relación con la fundación alemana Misereor, ligada a los obispos de ese país. Le presentamos un proyecto a su representante, Juan Josi. Él estaba muy emocionado por la creación de la diócesis de Tlapa. Conoció al obispo y éste le dijo: “Ya tenemos trabajo en derechos humanos en la diócesis. Tienes que apoyarlo”. Comenzamos entonces a tener proyectos pequeños con Misereor. Eso ayudaba a que pudiéramos pagarles a los jóvenes.

Cada uno de nosotros ganaba mil pesos al mes. No pagábamos renta porque mi papá siempre me ayudó. Tampoco luz, porque la pagaba el hotel. Teníamos una máquina de escribir Olympia, de esas mecánicas. Teníamos un librero con hojas, un escritorio, seis u ocho sillas.

La oficina estaba en pleno centro de Tlapa, frente al mercado, en el tercer piso del hotel. En ese piso había un espacio grande entre los cuartos, que aprovechábamos como si fuera una sala. Ahí platicábamos con la gente cuando llegaban comisiones grandes, o lo usábamos como sala de espera.

Se comenzó a correr la información de que Tlachinollan tenía abogados y estaba frente al mercado. No había pierde, porque la gente iba allí a comer, a comprar o a vender, y podía llegar fácilmente al hotel. Estaba a la mano. Era muy práctico.

Yo nunca tuve formación en derechos humanos. Nunca tomé un curso sobre ellos ni me dediqué

a estudiarlos. Aprendí en la práctica, en la brega del trabajo, con la gente, acompañándola. Siempre estaba con la gente.

Documentamos todo lo que nos llegaba. Desde los casos graves, en los que no nos daba la vida para hacer un buen informe, como el de Magencio Abad, hasta la miscelánea de problemas tan variados como conflictos entre familiares, de deudas, entre vecinos sobre parcelas, o religiosos.

Esos problemas eran el pan de cada día. Los abogados y abogadas quedaban absorbidos por la enorme cantidad de casos domésticos que no atendía el Ministerio Público, ni el síndico, ni el juez de paz; o si los atendía, era a cambio de dinero. Fue muy importante que nuestros servicios fueran gratuitos. Nos iban a ver por todo, desde hacer un oficio hasta escribir una solicitud. Hacíamos todo sin jerarquizarlo. No distinguíamos cómo darles tratamiento diferenciado. Comenzamos a entender que era necesaria una estrategia de defensa integral después del caso de Inés Fernández, en 2002.

Cuando Tlachinollan arrancó, se acababa de crear la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chilpancingo. Era (lo sigue siendo) muy burocrática. Desde que José Francisco Ruiz Massieu (1987-1993) fue gobernador, se anunció que la defensa de los derechos humanos sería parte de la política gubernamental.

El presidente municipal de Tlapa se molestaba porque yo acompañaba a las comunidades a resolver sus problemas. Tanto así que en una ocasión me

cuestionó: “¿Sabes que a ti no tengo por qué recibirte?” Había llegado a verlo a su oficina con varios comisarios porque no les habían entregado fertilizante. No se los querían dar porque no eran del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

-¿Cómo es posible que por ser de otro partido ustedes estén manejando así lo del fertilizante? -lo cuestioné.

-Te recibo porque eres paisano -me contestó-, porque te conozco, porque tu papá conoce a mi papá. Pero no te recibo como de Derechos Humanos. Así yo no te puedo atender, porque Derechos Humanos solamente es la del gobierno. ¿A ti quién te dio nombramiento de Derechos Humanos? ¿Quién te respalda? Yo te recibo nada más por respeto, pero no debería recibirte.

Y siguió:

-Si tú quieres un papel, un papel no lo vas a tener. Ni un nombramiento.

-Quiero que sepas -le contesté- que a este Centro de Derechos Humanos lo respalda el obispo, lo respaldan las comunidades y lo respalda gente académica. Somos un organismo no gubernamental. No espero que me vaya a dar el nombramiento el gobierno. Eso no lo queremos. Nuestro trabajo consiste en vigilar sus actuaciones de ustedes, defender a la población y proteger a la gente más vulnerable. Para defender los derechos humanos yo no necesito un papel. Si tú no me vas a recibir, no me recibas. Pero,

por ley, tienes la obligación de atender a la gente. A mí me preocupa que no los recibas. La gente pide que nosotros intervengamos. Pero me estás diciendo que no me vas a atender. No me recibas, pero escucha a la gente. No tendría sentido que yo estuviera aquí, si ustedes respetaran los derechos humanos.

El presidente municipal estaba enojado y me respondió:

-Tampoco te pongas pesado.

-No -le dije-, no me pongo pesado. El tema es que ahora tenemos que dialogar como ciudadanos. Tú eres ciudadano, yo soy ciudadano y conozco mis derechos. Tú debes saber que ellos tienen derechos. Tú no se los vas a dar, ni a mí me vas a decir que si no me dan un papel no puedo defenderlos. No.

Él quería deslegitimarme frente a las comunidades. Pero la gente se sentía protegida, porque estábamos allí con ella. Él nos había recibido y nosotros íbamos con ellos. Era una especie de juego para las autoridades. Era como un nudo que les apretaba el cuello. Se quejaban: "¡Derechos Humanos se está metiendo mucho con nosotros! ¡Hay que pararlos!"

Pero es curioso que, desde entonces a la fecha, en la Montaña, quien defiende los derechos humanos es Tlachinollan, no la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es interesante. Hablar sobre derechos humanos en la región nos remite automáticamente a una historia concreta del trabajo: la de Tlachinollan.

II DE AULAS Y COMUNIDADES

Magisterio y Tlachinollan

Al regresar a la Montaña con la intención de integrarme a la región como antropólogo y ayudar a la gente, me encontré a sacerdotes y religiosos que estaban metidos en las comunidades. Desde sus parroquias acompañaban los procesos organizativos que se estaban formando. No eran los únicos. Me topé también con otro actor importante: los maestros.

A mí me atraía el movimiento que había iniciado el maestro Othón Salazar. Lo que estaba construyendo en la Montaña. Lo acompañaban muchos maestros activistas cercanos políticamente a él. Profesores como Arturo Flores, de Malinaltepec, a quien yo veía muy joven, pero muy puesto.

Estaban, además, maestros que se encontraban en la prisión en el centro de Tlapa. Conocí a algunos por mi papá. Cada 15 días, él iba a la cárcel, a llevar comida a los presos. Empecé a ir con él. Allí dentro encontré maestros bien organizados. Los acusaban de pertenecer a la guerrilla.

Siempre me conmovió el letrado que estaba en la entrada de la cárcel: “En este lugar maldito, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga a la pobreza”. Era un letrado bien hecho. Era como la entrada al inframundo.

Vi el letrado antes de venirme a México. Yo estaba muy chico. Era más o menos en 1976. Cuando, años después, regresé a Tlapa, el letrado seguía allí. Hubo muchas ocasiones en que los policías y las autoridades lo borraron. Pero a la mañana siguiente volvía a aparecer. Me impresionó esa perseverancia.

En el penal estaban detenidos indígenas que no sabían leer y escribir. Y había maestros, que se encargaban de concientizar a los demás reclusos. Me impresionó la sabiduría popular para pulsar la realidad. El mensaje de que en esa cárcel se castigaba la pobreza. Me atraía mucho esa sabiduría y ese pensamiento tan a flor de tierra.

En la casa donde yo vivía cuando era pequeño, era muy común que llegaran niños a trabajar. Tenían que hacer las labores domésticas y luego iban a la escuela. Se les daba oportunidad de ir a la escuela, regresar y comer. Y en la tarde a barrer, a limpiar, a hacer el aseo del baño. Toda la tarde a trabajar, y ya en la noche a hacer la tarea. Todo sin ningún pago. Así lograron estudiar la primaria. Así se formaron la mayoría de maestros indígenas.

Cuando regresé a Tlapa, en la década de los 90, me incorporé a la Universidad Pedagógica Nacio-

nal (UPN) como maestro de la licenciatura en educación indígena. En esos tiempos llegaban a la universidad 600 maestros a cursar esa licenciatura. De esa manera se nivelaba el magisterio que no había tenido oportunidad de estudiar la preparatoria, o incluso la secundaria.

Conocí en el salón de clases maestros que tenían 40 o 50 años de edad. Venían de toda la Montaña. Esas relaciones fueron una cascada de experiencias. Había docentes de la vieja guardia y profesores que estaban en la trinchera. Algunos se fueron a la lucha armada. Fue un laboratorio muy amplio de saberes.

Ese encuentro con ellos en un salón de clases se transformó después en un encuentro comunitario. La presencia del maestro Othón fue algo muy importante. Fueron ellos los que abanderaban el movimiento, tanto el magisterial como el democrático. Me nutrí de su fortaleza y de su convicción de lucha, de su disposición a enfrentar al cacicazgo.

Recuerdo mucho cuando los maestros decidieron tomar las instalaciones regionales de la Secretaría de Educación Pública en el centro de Tlapa, a un lado del hotel Jiménez, a media cuadra de la presidencia municipal. Fue el 7 de noviembre de 1979. Yo estaba por allí.

Era un movimiento magisterial muy amplio y muy desde abajo. Muy representativo. Nunca se había visto una manifestación de ese calibre en Tlapa. Cerraron la calle. Los maestros estaban duros, fuertes. El

governador Rubén Figueroa ordenó la represión policiaca. En la noche llegó la policía montada con los caballos. Entraron con todo por tres frentes. También iba la motorizada y el resto de policías, que en ese tiempo eran torturadores. Llegaron golpeando lo mismo a las mujeres que a los profesores de mayor edad. Sonaron las campanas. Fue todo un escándalo en la ciudad. Causó mucho miedo. Detuvieron y golpearon a muchos profesores. Al final se quedaron los policías.

El maestro Othón, que en ese entonces era diputado federal, llegó a Tlapa para acompañar a los maestros y hacer frente al estado de sitio que se implantó por varios días en esta ciudad. Habló varias veces con el gobernador. No se atemorizó ante las reiteradas amenazas de reprimir y, si era necesario, hasta matar a los “revoltosos”. Los policías tomaron las calles con caballos y perros. Los docentes se refugiaron en la preparatoria número 11. Se reagruparon y volvieron a salir. Ya no tenían la misma fuerza.

Fue muy impactante. Ver a los maestros golpeados me generó indignación, miedo, impotencia. Me dije a un mismo tiempo: “Ésta es la lucha del magisterio. Éste es el golpe del gobierno. Ésta es su pata de elefante que aplasta”.

Allí alcancé a ver el manotazo de la represión caciquil. También la fortaleza de un movimiento que, desde abajo, construye un proceso de resistencia. Vi tanto la ráfaga de la violencia estatal como la resistencia de un magisterio que se estaba fogueando.

Fue toda una enseñanza que impartió el magisterio. Anunciaba lo que vendría en la Montaña.

Los maestros empezaron a ir a las comunidades, a hablar con los comisarios y a pactar con ellos para luchar por sus demandas. Ese vínculo fue otra enseñanza. La educación pasa necesariamente por el involucramiento del magisterio con lo que pasa en la comunidad. Ese enganchamiento me marcó mucho y me acercó a los derechos humanos.

Años después de esa represión, nuestro trabajo empezó a caminar por dos rieles: la iglesia progresista y el magisterio democrático. Con ellos como actores claves, como actores del cambio, empezamos a trazar nuestra ruta dentro de la Montaña. Ambos actores asimilaron como esponjas lo que implica defender los derechos humanos, la educación como un derecho. A través de estos conductos empezó a propagarse este tema. Eso nos nutrió a todos.

El discurso de los derechos humanos se incorporó a la narrativa de la lucha magisterial. Ya no se trataba solamente de enfrentar al cacique con un discurso duro sino, más bien, de mostrar al Estado represor. Se trataba de desenmascarar la imagen monstruosa del cacicazgo. Si la resistencia dura y el golpeteo del magisterio le permitía al Estado justificar su represión, el discurso de los derechos humanos le permitió al movimiento crear otro terreno para la acción. Ya no el terreno arisco de la confrontación, sino el espacio civilizado de los derechos humanos.

Ese nuevo discurso permitió encarar al cacique, presentándolo como represor, pero también, al mismo tiempo, como violador de derechos humanos. Este discurso comenzó a echar raíces.

Allí fue donde maestros y sacerdotes se engarzaron con los talleres de derechos humanos que empezamos a dar con los comisarios. Ésa fue la punta de lanza para comenzar a cambiar el terreno de lucha. Y ayudó mucho.

El proceso de democratización que se dio con los maestros al frente fue clave. Tlachinollan incorporó a algunos de ellos a su consejo de socios. Ayudaron a afianzar nuestro trabajo. Cuando nacimos, nos sentíamos desprotegidos. Nuestro manto protector fue el obispo, el sacerdote, la diócesis. Pero también lo fue el magisterio, que, como base del pueblo, construía democracia. En su salón de clases, en las comunidades, en el dolor de la represión, se preparaba para una lucha más estratégica.

Participé en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG), como parte de la planta docente de la UPN. Desde su nacimiento, la UPN en la Montaña ha sido parte de la CETEG. Es la expresión democrática del magisterio de educación superior del nivel superior. En su momento formé parte de la delegación sindical de la UPN. Desde 1995 hasta la fecha he asistido a sus movilizaciones. Participé en la oleada previa a la que se dio contra la reforma educativa de Enrique

Peña Nieto. Me integré y fui parte de los contingentes en las marchas, en los plantones en la Ciudad de México. No con la misma intensidad del magisterio, pero igual participé.

La Montaña es el bastión más importante, más firme, de las luchas magisteriales. Los montañeros han dado la pauta. Sus acuerdos jalan a las otras regiones. Ésa es la marca de agua de su lucha histórica. Es muy importante su participación en las gestas por la democracia y por la educación. Están fogueados para enfrentar la represión. Su resistencia es un ejemplo nacional. Con su lucha, ese magisterio de la Montaña ha puesto las letras para escribir la palabra "Justicia".

Othón Salazar

Tuve un trato cercano con el profesor Othón Salazar. Era gente. Le decían *el tata*. Era amigo del montañero. Él mismo se decía el amigo del indio.

Su discurso era muy de pueblo. A pesar de su formalismo en la manera de hablar, su retórica era muy cercana al pueblo. Su palabra estaba dirigida a la gente. Tenía esa casta del maestro que tiene la voz firme, clara y dura.

La gente se identificaba con él. Sobre todo, cuando se transformaba en los mítines, en los momentos de prueba, en las movilizaciones. Allí era, a un tiempo, el maestro, el gran orador, el gran personaje que rompía esquemas. Con sus palabras duras y directas cimbraba a las masas.

A mí me marcó su forma de actuar, de ser, de pensar. Me impactó cómo en sus últimos años sobrellevó su enfermedad y su situación de pobreza. Me platicó que el presidente Ernesto Zedillo le había prometido reintegrarle tanto la plaza como los salarios caídos desde su cese. Lo engañaron. No era una persona ingenua, pero siempre confió en que le daban la mano de amigo. Su difícil situación lo llevó a esperar que le cumplieran esa promesa. Se murió esperando.

Con él formamos el Consejo Regional de la Montaña. Él había formado antes, en la década de los setenta, el Concejo de los Pueblos de la Montaña, que era un movimiento de pueblos. A su regreso a la región, después de varios años en la Ciudad de México, convocó a formar el Consejo Regional de la Montaña. Como hemos visto, Carlos Rojas y Carlos Toledo retomaron la propuesta.

Poco después de integrado, el gobierno le dio al Consejo dos millones de pesos para que empezara a funcionar. Nos desmarcamos. Allí entendí que las convicciones del maestro Othón eran a profundidad, de raíz. Él se salió primero. Nosotros seguimos todavía un tiempo peleando dentro. Pero vimos que ya no se podía más. Se vinieron las elecciones para gobernador. El PRI propuso como su candidato a René Juárez. Y René apoyó al Consejo. Para ese momento era claro que el Consejo había perdido toda su identidad. El maestro Othón ya se había alejado.

Pude recuperar, tanto grabadas como escritas, algunas pláticas muy largas que dio en el magisterio. El maestro Othón Salazar escuchó a los principales de Xonacatlán. Recorrió lugares memorables de nuestra historia para convocar a los pueblos a rebelarse contra el yugo explotador de los caciques regionales. Como maestro de Civismo y de Historia, asimiló las grandes enseñanzas que dejó en la región el general Vicente Guerrero, pero, sobre todo, aprendió del valor y la reciedumbre de los mixtecos rebeldes que dieron su vida por la Independencia.

Al igual que los niños de la Montaña, Othón aprendió a cortar leña y a trabajar en el tlacolol. Fue el único de los cinco hermanos que logró continuar sus estudios fuera del estado. En la escuela primaria Amado Nervo tuvo como maestro a Benito Cruz Delgado, originario del estado de Jalisco, de quien aprendió las primeras ideas socialistas. De los cinco alumnos que egresaron del sexto grado de primaria, sólo Othón pudo continuar con sus estudios, gracias al apoyo de su tío Celestino Salazar y al respaldo de sus padres.

El seminario fue una de sus opciones académicas por el peso que ejercía el obispo Leopoldo Díaz Escudero, originario de este lugar. Con gran orgullo, el maestro Othón conservó sus boletas de calificaciones, que venían selladas con la figura de una estrella, la hoz y el martillo, en lugar del águila que trae el escudo nacional, porque, orondo, decía: “Es que nosotros estudiamos en una escuela socialista”.

En esa época varios campesinos y una maestra hicieron famosos los domingos rojos. Se reunían a leer y analizar la revista de la URSS. De allí surgió el grupo precursor de lo que con el tiempo conoceríamos como la Montaña Roja.

Después de su consagración como líder magisterial que logró superar las peores pruebas de la represión política y policiaca en el sexenio de López Mateos, el maestro Othón emprendió un trabajo clandestino en la ciudad de Tlapa, a imagen y semejanza de los domingos rojos. Allí formó el primer círculo de comunistas, que se reunía de manera provisional en una casa de la calle Guerrero.

Ante el temor de que el gobierno se diera cuenta de que en ese domicilio realizaban reuniones clandestinas, una mujer valiente de Alcozauca, la maestra Gudelia Villavicencio Bazán, ofreció su casa. Con el tiempo, ese domicilio se transformó en el cuartel general de los comunistas de la Montaña. En ese lugar histórico de la calle Añorve, el maestro Othón contó con el apoyo y el espacio necesarios para emprender la gran osadía de enfrentar el cacicazgo de Rubén Figueroa y luchar por el poder político enarbolando la bandera del Partido Comunista Mexicano (PCM).

Con su gran oratoria y su vida ejemplar como hombre de ideales socialistas, Othón convocó a maestros indígenas para luchar por la transformación social y política de la Montaña y disputar palmo a

palmo el poder comunitario y municipal. En los círculos de análisis que tenía con los nuevos militantes del Partido Comunista, analizaba los planteamientos de Marx y de Lenin. Cuando se plantaba en las principales plazas de la Montaña, conmovía a indígenas y mestizos con sus piezas magistrales contra la explotación del indio y la lucha emancipadora de los pueblos. Con gran aplomo supo salir de la clandestinidad para subirse a los kioscos y encarar al gobierno, descargando toda su furia contra los explotadores y los políticos simuladores, que lucran con la pobreza del pueblo trabajador.

Lo que más admiraron los discípulos del maestro Othón fue su valentía al denunciar en público todas las atrocidades y tropelías de las autoridades y las fuerzas represivas del Estado. Gracias a él la gente aprendió a perder el miedo, a expresar en público su inconformidad y a organizarse para defender sus derechos. Es histórica la fecha en que el maestro Othón convocó al Primer Congreso del PCM, realizado en el cine Elba, de Tlapa. Allí participó el profesor Lucio Cabañas. Después de ese magno evento, los comunistas salieron al Zócalo para escuchar uno de los discursos memorables de Lucio en el kiosco de Tlapa.

Cuando triunfó el Partido Comunista en Alcozauca, los nuevos militantes de las comunidades indígenas empezaron a sufrir la represión de los caciques locales, que se negaban a compartir el poder en

las comisarías y delegaciones municipales. El 25 de abril de 1981, en la comunidad mixteca de Xochapa, las autoridades municipales que se disponían a inaugurar una nueva delegación fueron recibidas a balazos. El indígena Elías Plácido Olivera fue asesinado y varios más resultaron heridos. En la comunidad mixteca de Potoichan, municipio de Copanatoyac, Bertoldo Altamirano Dávila y Roberto Vega estuvieron a punto de perder la vida por atreverse a invitar a los habitantes a formar parte del Partido.

Las campañas contra el comunismo de la Montaña llegaron por medio de las avionetas que daban servicio en la región. Fueron contratadas por el gobierno para que tiraran volantes a la población, exhortando a que no aceptara las ideas comunistas porque venían a “provocar la guerra y la destrucción de costumbres y creencias”. La llegada de jóvenes de los Colegios de Ciencias y Humanidades de la Ciudad de México era interpretada como una conspiración promovida por el imperio del mal y por el partido del diablo.

El maestro Othón emergió en la región como una figura señera que supo nutrirse de las venas históricas de la resistencia, donde los pueblos indígenas son los principales protagonistas del cambio. Su legado es muy importante. El maestro fue una figura que dio luz a la Montaña.

En los últimos años de su vida, siguió convocando a las comunidades para que se organizaran.

En ese trabajo cultivamos una amistad muy grande. Él me platicaba toda su experiencia. Quería reunificar a los pueblos. Se sintió defraudado por el PRD y se salió del partido. Félix Salgado habló mal del maestro. Othón se sintió muy lastimado, relegado.

Formó entonces un círculo de amigos para reflexionar sobre el contexto y ver qué trabajo político se podía hacer. Eran amigos de la vieja guardia y algunos nuevos que estábamos por allí. Se daba cuenta de que el trabajo que había hecho era usado por los mismos gobernantes.

Nosotros formamos un grupo pequeño y tratamos de apoyarlo. No tenía ningún ingreso económico. Ni el gobierno ni muchos de sus amigos velaron por él. Cayó enfermo. No hubo posibilidad de que se le atendiera como merecía.

III TORTURA

Magencio Abad Zeferino, bautizo de fuego

El caso del maestro Magencio Abad Zeferino nos marcó profundamente en nuestro trabajo en la Montaña y en el acompañamiento a las familias y a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Yo no vislumbraba un escenario que se fuera a complicar tanto y que implicara un desafío tan grande como el suyo. Lo torturaron. Y, la verdad, nunca habíamos documentado un caso de tortura; nunca habíamos tenido claro cuál era el protocolo y la investigación que teníamos que hacer.

Magencio es un maestro indígena nahua de la región de Olinalá. Lo conocía porque le di clases en la UPN. Formaba parte de la CETEG, la expresión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) en el estado.

Ése fue el primer caso que nos puso contra la pared. Fue un caso que se complicó. De repente, en los últimos días de diciembre de 1996, llegó su esposa a buscarme a la oficina que teníamos en Tlapa, para de-

cirme que personas encapuchadas se habían llevado a su esposo. De inmediato hablé con los abogados.

Su esposa nos contó: “Llegaron a Olinalá y tocaron en nuestra puerta. Eran como las 12 de la noche. Magencio preguntó desde su cama que quién era. Le respondieron: ‘Queremos un viaje a un pueblo, nos urge mucho’. Era muy raro, porque Magencio tenía una camioneta vieja que no daba servicio público. Les dijo: ‘Yo no doy ese servicio; además, ya es muy noche, hasta mañana’. Ellos insistieron: ‘Es que nos urge, es una cosa muy grave’. Magencio volvió a negarse. ‘No. Hasta mañana’, les contestó. Todo desde su cama a la calle”.

Se fueron, pero volvieron más tarde, insistiendo en que querían hablar con él. Y él les volvió a responder que hasta el otro día.

“Es entonces –siguió platicándonos la esposa– cuando se oye que disparan un balazo a la puerta, que era de fierro. Empujaron. Pero, como no le dieron exactamente al pasador, no pudieron abrir.”

De allí se fueron hacia la tranca y cruzaron el patio de la casa de adobe. No tuvieron ningún impedimento para pasar. Se metieron al corredor y, una vez dentro –pues no había puertas cerradas donde dormía Magencio–, entraron con lámparas y enfocaron al maestro. Él estaba acostado con su esposa. En la otra recámara estaba su hijo. Fueron sobre él y se lo llevaron. Dejaron a su mujer, pero se llevaron a su hijo.

Era como la una de la mañana. Les taparon la cara, los arrastraron, los jalieron y los subieron a una

camioneta. La señora nos contó que era una Suburban. Lo acostaron en el asiento de atrás y se sentaron sobre él. Lo mismo le hicieron a su hijo.

Todo el camino lo tuvieron vendado. Como él maneja, ubicó que se lo llevaron a Tlapa. Lo identificó por los topes. Sintió, por el movimiento y el lugar, que estuvo en una instalación militar en la colonia Tepeyac. Allí lo empezaron a interrogar. Le preguntaban que dónde estaban las armas, que cuántos viajes con armas había llevado a la región. Quiénes eran los que las estaban comprando. A quiénes se las estaba entregando. Él les respondió que no sabía nada. Lo amenazaron: “Más vale que nos digas, porque igual te vamos a obligar a que sueltes la sopa”.

Le preocupaba su hijo.

-Aquí está tu hijo y con él nos vamos a desquitar -le dijeron.

-Lo que me están preguntando no lo sé -contestó-. Si me preguntan otras cosas, probablemente pueda responderles. Pero de eso no sé nada. Yo no transporto armas. Ni mi camioneta está para eso. Es una camioneta viejita, que ya quisiera que caminara en la región. Casi no la uso. No sé de quién es este negocio. No conozco, soy maestro.

Estuvo ese día ahí y en la noche se lo llevaron a Chilpancingo. Allí lo interrogaron nuevamente. Le preguntaban quiénes eran los que estaban armados. Querían que les diera los nombres de los maestros y de los campesinos que se preparaban militarmente. Les respondió:

-Yo no sé, yo no sé nada.

Comenzaron a golpearlo nuevamente.

-Te vas a acordar -le dijeron-. Esto mismo le vamos a dar a tu hijo, porque tú tienes que cooperar.

Así lo tuvieron, entre golpes e interrogatorios.

Después le quitaron la ropa y lo amarraron a una tabla. Desnudo, le echaron agua y comenzaron a darle toques eléctricos. Insistían en saber quiénes eran y cómo se llamaban los armados; quiénes traficaban las armas, dónde estaban entrenando. Todas las preguntas que le hacían giraban sobre el tema de los grupos armados. Y su respuesta era la misma: él no sabía nada del asunto.

Lo dejaron un rato en paz después de esa sesión de tortura. Sin embargo, al otro día, con unas agujas empezaron a picarle los dedos de los pies. Le advirtieron:

-Esto le estamos haciendo a tu hijo, de una vez dinos.

Fue demasiado. Les contestó:

-Acepto que yo soy de los armados. Acepto también que llevé armas, pero la verdad, de lo demás no sé nada.

En esos días (probablemente al día siguiente) se habían llevado a otro campesino. Se llamaba Luis Gonzaga y tenía unos 65 años. Coincidió que estaba en Chilpancingo. Lo tenían vendado. Tenía un bigote como el del líder campesino Ranferi Hernández.

A Magencio le quitaron la venda de los ojos y le preguntaron:

-¿Conoces a esa persona?

-Así con la venda no lo conozco -contestó.

-¿Quién es él? ¿Es de la región? ¿Es de los que andan armados? ¿Es Ranferi?

-No puedo decirles, no conozco a Ranferi.

Magencio perdió la noción del tiempo. Se desmayaba con la tortura. Pero, en una de esas, al regresar, escuchó que dijeron entre ellos: "Ya salió en el periódico. ¿Ahora cómo le hacemos? ¡Ya nos chin-gamos!"

En la madrugada lo volvieron a golpear y a darle toques. Y lo amenazaron: "Si de plano no cooperas, te vamos a llevar al mar y te vamos a tirar". Les respondió que ya les había dicho lo que querían escuchar.

-Necesitamos más información porque tú nos estas engañando.

Él se allanó:

-Díganme qué más quieren. Yo les firmo lo que quieran, pero ya déjenme de torturar.

En la madrugada, muy golpeados, los subieron a una camioneta a él y a su hijo. Iban vendados y amarrados. Sus torturadores les anunciaron:

-Los vamos a tirar al mar de una vez, para que nadie sepa dónde están. Y para que se les quite no haber hablado.

Alrededor de una hora después, los bajaron de la camioneta. Los tiraron por allí y les ordenaron:

-Aquí se van a quedar. Ya vendrá otra persona que los va a llevar adonde les dijimos. Espérenlo.

Estaba oscuro y Magencio sintió que su hijo estaba allí. Empezó a hablarle.

-Estoy amarrado, tengo la venda -respondió.

-Yo también. Vamos a esperar a ver quién llega.

Se pusieron a platicar. Pasó una hora y nada.

El día se aclaró. Magencio se desató y le quitó la venda a su hijo.

-Creo que ya nos dejaron acá -le dijo.

Estaban en un crucero. Unas personas que medio vio que pasaban le informaron que estaban en El Peral, cerca de Chilapa. No era lejos, pero estaban muy golpeados. Buscaron quién les pudiera dar *raite*. Finalmente consiguieron un aventón a Chilpancingo. Ya de allí hablaron por teléfono.

Cuando la esposa llegó a la oficina y nos dijo que se habían llevado a su esposo, que no sabía nada de él, y nos pidió ayuda, no había datos sobre su paradero. Hablamos a Chilpancingo con el secretario de Gobierno. Nos dijeron que no sabían nada.

Hicimos una acción urgente. Era de las primeras acciones urgentes que hacíamos. Alertamos que personas desconocidas se habían llevado a Magencio. No podíamos señalar mucho más. No imaginábamos que fuera el Ejército. Hicimos esa acción urgente por medio del Centro Prodh y de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas. Dimos a conocer el caso. Organizamos una entrevista con la prensa, denunciando que se habían llevado a Magencio, que estaba desaparecido, que temíamos por su vida, que

era maestro. La CETEG lo reivindicó. Se empezó a generar presión. Gracias a eso lo soltaron.

Pasaron tres días entre que se lo llevaron y lo soltaron. Después supimos que estaba en Chilpancingo. Lo entrevistamos y nos platicó todo lo que había vivido. Nos pidió que se investigara.

La cuestión era quiénes se lo habían llevado y torturado. Empezamos a atar cabos por las preguntas que le hicieron. ¿A quiénes les interesaban esas cosas? Querían saber quiénes eran los de la guerrilla, quién era el jefe. Le dieron nombres para ver si los ubicaba. De algunos decía que sí, pero aclaraba que eran maestros. Por las preguntas, era obvio que el responsable era el Ejército.

Fue como un balde de agua fría. Nos dimos cuenta de que no sabíamos qué era defender los derechos humanos. No estábamos capacitados. No preveíamos un caso de esa envergadura. No sabíamos qué hacer con la familia. Sin embargo, se nos ocurrió hacer una acción urgente y una denuncia. Y fueron recursos efectivos para dar a conocer lo que estaba pasando. Eso nos ayudó a vislumbrar que la lucha por los derechos humanos iba en serio.

El Ejército

El caso de Magencio fue el indicador de un nuevo ambiente en la Montaña: el de la polarización provocada por el Ejército al perseguir y detener a la población. Antes de eso no había ese clima, pero a partir de

entonces ocurrieron más casos de maestros secuestrados y torturados por soldados.

Así sucedió en Chilapa. Cuatro maestros estaban bebiendo en un restaurante. En una de las mesas, una persona sola grababa lo que decían. Eran tiempos en los que el zapatismo tenía inquietos a los militares. Uno de los profesores se llamaba Marcos. Por su nombre, los organismos de inteligencia de la región dedujeron que ése era el Marcos de Chilapa, el líder de los subversivos.

Cuando los cuatro profesores salieron del restaurante, una camioneta los interceptó. Los subieron y se los llevaron al cerro. Allá empezaron a torturarlos y a interrogarlos sobre sus vínculos con los grupos armados. Querían saber quién era Marcos y por qué se llamaba así. Con los golpes, uno de ellos se desmayó. Finalmente los soltaron.

Documentamos algunos de esos casos de tortura. Otros nos llegaron de boca de los campesinos que habían sido detenidos.

Así sucedió con Luis Gonzaga. Resulta que en su casa alguien había hecho una pinta que decía “El PRI se desmorona”, o algo así, y “El PRD construye el nuevo amanecer”. El Ejército llegó a su domicilio a preguntar quién era el dueño de esa casa. Le respondieron que don Luis. Querían saber quién había escrito esa leyenda. El dueño les respondió que no sabía, que no sabía escribir. Los militares le reclamaron por qué había autorizado que se escribiera eso en su muro. Finalmente, se lo llevaron.

No sé si fue exactamente por eso o porque lo confundieron con Ranferi Hernández. Porque Luis Gonzaga tenía el bigote al estilo de Ranferi. Nada más que el suyo era más grande. Los soldados se lo llevaron hasta Chilpancingo.

Había mucho nerviosismo en el Ejército. Veía guerrilla en el movimiento magisterial y campesino. Tenían información de que algo sucedía y estaban sobre quienes eran más visibles.

En verdad, no teníamos una lectura de lo que estaba pasando. Había mucha movilización de las organizaciones sociales. En este tiempo estaban actuando la Unión de Obreros y Campesinos Emiliano Zapata (UOCEZ) y la Unión de Comunidades Indígenas de la Montaña (UCIM). Eran organizaciones radicales, que tomaban los ayuntamientos y se enfrentaban con la policía. Para el Ejército eran la punta de lanza de la expresión armada.

Veían a Tlachinollan como aliado de esos movimientos. Como el grupo que los defendía. Y más después del caso de Magencio. “Está claro –se decían– que estos compas defienden a los guerrilleros”.

Pusimos la denuncia del caso de Magencio, pero no prosperó. Pretextaban que no había pruebas, que no había datos. Era como decir que nada de lo que Magencio narraba tenía valor. Como decir que no había testigos. No pudimos documentar como se debía el tema de la tortura. Pero juntamos varios casos, al grado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo que intervenir.

La misma CNDH hizo su propia investigación sobre Guerrero y sacó una recomendación, la 100/97, donde vienen casos de desaparición, tortura y detenciones arbitrarias por parte del Ejército. Nosotros documentamos varios de esos casos. Pero no logramos documentarlo con la rigurosidad que se requiere. Estábamos aprendiendo.

En aquellos años hubo muchas detenciones de campesinos e indígenas. La verdad, nos faltaron herramientas para documentar cómo el Ejército se movió para desactivar una irrupción armada.

El caso de Magencio fue la punta del *iceberg* de una situación generalizada que fuimos documentando y comprendiendo sobre la marcha. Nos abrió los ojos. Era un problema que veíamos, pero no en toda su profundidad. Como el caso de la tortura, que hasta la fecha sigue siendo una práctica. Nos la topamos en los primeros casos y eso nos rebotó. Torturaban a personas que no tenían un activismo muy visible. Fue un golpe muy fuerte que nos hizo decirnos: "Aquí hay algo grave, aquí hay un conflicto muy profundo".

La CIDH

En un momento dado, el CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), con sede en Washington, nos preguntó si habíamos documentado casos de tortura. Le respondimos que sí y nos propuso trabajar conjuntamente para presentar alguno de ellos ante

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Le enviamos como cinco o seis casos. Entre ellos, escogió el de Magencio Abad.

Fue la primera vez que Tlachinollan llevaba un caso a la Comisión Interamericana, aunque no directamente, sino por medio del CEJIL. Nos apoyaron en la documentación y en la solicitud de admisibilidad ante la CIDH. Llegamos hasta allá, pero faltó retroalimentación sobre cómo litigar esos casos. Ellos, con la información que les dimos, armaron la demanda. Y la demanda caminó hasta el punto en que llegó un momento en que la CIDH propuso que se platicara con el Ejército para entrar a un proceso de amigable composición.

Pero el caso se atoró. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) nos convocó al Ejército y a nosotros. Éramos inexpertos y le pedimos a gente del Prodh que nos acompañara, sin que conocieran el asunto. Digna Ochoa fue con nosotros para ayudarnos.

En la reunión, un funcionario de la SRE explicó que el motivo del encuentro era ver si había disposición de las partes para llegar a un acuerdo, una conciliación o una amigable composición. Digna fue la que habló. Yo estuve en la reunión, pero, la verdad, no me sentí con las tablas para intervenir. Magencio dio su testimonio. Contó cómo lo torturaron y todo lo que le habían hecho. Los militares argumentaron que no tenían nada que ver en el asunto. No negaron que hubiera sucedido, pero aseguraron no tener idea de quién lo había hecho.

En la reunión, Relaciones Exteriores siempre protegió al Ejército. Arguyó que no había pruebas ni elementos para responsabilizarlo. Los militares insistieron en que no tenían que ver y que no les interesaba entrar a un proceso de amigable composición. Digna Ochoa tomó la palabra. Señaló que no necesariamente se tendrían que presentar pruebas con el testimonio, porque se dejaba a las víctimas totalmente indefensas. Los de la SRE quisieron descalificarla, diciendo que no era la representante directa de la víctima. Les respondió que Magencio y Tlachinollan le habían pedido que fuera. Nosotros la apoyamos y, ante ellos, la autorizamos a ayudarnos. Se generó una fricción.

Al final, la postura del Ejército fue desconocer cualquier responsabilidad en el asunto. Sostuvieron que no tenían nada que hacer allí, que no iban a regresar, que no había prueba alguna de su participación y que todo era invento de una persona.

No logramos acreditar con todas las técnicas que Magencio había sido torturado. Nos quedamos trancos. Hasta ahí llegó el caso. No pudimos empujarlo. No teníamos la experiencia para hacerlo. Si la hubiéramos tenido, posiblemente este caso se habría litigado en la Comisión y hasta la Corte Interamericana.

IV LA MILITARIZACIÓN

Una historia que viene de lejos

En Guerrero, el Ejército ha sido utilizado para socavar la organización comunitaria y destruir todo indicio de subversión. Los militares tuvieron licencia para matar, desaparecer y reprimir a la población civil. Los generales han sido aliados de los caciques, que han gobernado con grupos de pistoleros graduados por sus atrocidades como policías y comandantes. Lo suyo es la ley del revólver y el uso letal de la fuerza.

En Guerrero, las órdenes emitidas al Ejército en la década de los 70s por el ex presidente Luis Echeverría para capturar vivo o muerto al profesor Lucio Cabañas Barrientos fueron la causa de muchas de las atrocidades ejecutadas. De facto, se suspendieron garantías en la entidad y el Ejército se erigió en fuerza incontrolable para arremeter contra la población civil.

Los militares en Guerrero tienen en la entidad una larga historia como perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos. Desde Mario Arturo Acosta Chaparro, un general que fungió como el

estratega de la guerra de contrainsurgencia y que fue acusado de narcotráfico, las fuerzas armadas han tenido el control de las corporaciones policiales. Varios militares han ocupado importantes cargos en el gobierno para hacerse responsables de la seguridad pública y los resultados de su gestión son alarmantes.

Hay una línea de continuidad en las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército. Los ejemplos abundan. El 13 de junio de 1994, en la comunidad de El Escorpión, municipio de Atoyac, alrededor de 200 soldados catearon las casas de los pobladores, a quienes señalaban como miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Tres campesinos fueron detenidos durante varias horas e interrogados sobre los nombres de personas que poseían cuernos de chivo. No encontraron nada más que un rifle de diábolos. La gente se atemorizó al ver que los soldados detenían a los hombres que corrían para esconderse, mientras dos helicópteros militares sobrevolaban alrededor del poblado.

Para Hilario Mesino, líder de la OCSS, “el operativo del Ejército no fue para aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sino que las acciones fueron más por motivos políticos, porque estamos organizados y luchamos abiertamente para defender nuestros derechos”. La masacre de Aguas Blancas contra integrantes de la OCSS, un año después, mostraría lo que había detrás de ese operativo.

Un cuartel en Tlapa

La militarización de la Montaña también tenía historia una historia detrás. En esos años construyeron un batallón del Ejército en Tlapa. Me acuerdo bien porque conozco al presidente municipal. Le fueron a decir que el Ejército pensaba poner un batallón militar allí, unos 500 o 600 elementos. Le ofrecieron lo típico: “Va a estar muy bien porque van a tener más seguridad. Son 600 personas que van a consumir en Tlapa. Van a gastar en renta y comida. Va a haber ingresos. Va a haber trabajo para la gente, porque se le va a contratar”, le dijeron.

En los cerros de la salida a Tlapa hay un ejido. El presidente municipal fue a hablar con los ejidatarios y con el presidente del comisariado, que era de la CNC (Confederación Nacional Campesina). Les pidió que donaran 65 hectáreas para construir el cuartel. A cambio de las tierras les regaló un tractor. Llegó la empresa militar constructora a los terrenos y levantó rapidísimo el cuartel. Es la construcción más grande que hay en la Montaña.

El cuartel era parte del rompecabezas del reposicionamiento del Ejército en el estado. El Ejército tiene instalaciones en Cruz Grande, Costa Chica, en Atoyac, en Iguala, en Chilpancingo, en Acapulco. Pero no tenía cuarteles en la Montaña. Había un pelotón, quince soldados, que rentaban el lugar donde se quedaban. En cambio, con el cuartel se asentaron y se volvieron una institución.

Los problemas entre militares y la gente se exacerbaron. Se dio un caso en que los soldados llegaron a una comunidad sin pedir permiso. Los soldados acarreaban leña y preparaban con ella sus alimentos. Pero en una ocasión, después de hacer la comida, no apagaron bien la lumbre y se quemó parte del bosque. La gente vino a Tlachinollan a denunciarlo. Nosotros presentamos la queja. Fuimos con el Ejército. Respondieron que no era cierto. Sacamos fotos y les enseñamos las cosas que habían dejado. Al interponer la queja, el Ejército optó por pagar los daños. Desde esa fecha llevan sus utensilios y tanque de gas para preparar sus alimentos.

Instalado el Ejército en la Montaña, comenzaron a patrullar y a accionar contra las comunidades. Podían desplazarse a Metlatónoc, a Cochoapa. Se filtró que se habían descubierto campamentos de la guerrilla en Zitlaltepec y en Temalacatzingo. Con eso acreditaban los patrullajes del Ejército. Como había presencia de gente armada, la violencia militar se ensañó contra los pueblos.

La gente nos platicó que en esa parte de la Montaña empezaron a darse emboscadas contra policías y militares. Fueron pocas, pero de mucho impacto. Se alebrestó totalmente al sistema represivo. Trasladaron a muchos militares. No trascendieron mucho los enfrentamientos, pero nosotros los difundimos. Nos acusaron de ser voceros de los grupos armados. Dieron a entender que sabíamos de su exis-

tencia. No dimensionamos lo que había pasado. Nos faltaba más análisis del contexto.

Desde los primeros años el Ejército nos asoció con organizaciones político-militares. Es curioso. Me dijo una persona de la Secretaría de Gobernación: “Yo sé que habla contigo gente que está vinculada a grupos armados, pero sé que tú no lo sabes”. Me daba a entender que los militares sabían que yo tenía contacto con gente ligada a esos grupos. Sin embargo, luego comenzaron a decir en sus informes que nosotros éramos parte de ellos. Esto lo han manifestado en todo momento cuando interponemos alguna denuncia o queja contra el Ejército; sin embargo, no han podido probarlo.

Las emboscadas

En la Montaña tendieron varias emboscadas al Ejército. Esto dio pie a que el despliegue militar fuera más violento. Empezó a haber muchas detenciones. La agresión se focalizó contra los maestros, es decir, contra los de la CETEG. Para el gobierno, ellos eran el foco central de la resistencia, el brazo civil de los grupos armados.

Primero se dio una emboscada del Ejército Popular Revolucionario (EPR) contra el Ejército en El Ahuejote, municipio de Chilapa. Ese día yo había ido a Chilpancingo y regresaba a la Montaña con dos compañeras en una camioneta de Tlachinollan. Pasamos a cargar gasolina en Tixtla. Nos dirigíamos a

Chilapa cuando, al salir de una recta, antes del cruce-ro de El Ahuejote, de repente veo un camión militar con las puertas abiertas a media carretera.

Quedamos sorprendidos. Al mismo tiempo que vemos al camión militar, vemos que miembros del Ejército, tirados sobre la carretera, estaban parapetados del lado derecho y pegados al cerro. Nuestra camioneta era el único vehículo que pasaba por allí en ese momento. Bajé la velocidad. Ya que íbamos más cerca, vi que un militar se paró, más bien se arrodilló, y me pidió a señas que me detuviera.

Al parar me di cuenta de que había varios militares tirados en el suelo. Uno de ellos, entiendo que era el que iba al frente, me pidió: "Hable por teléfono a Chilpancingo al 47... Dígales que vengan porque nos han emboscado, por favor".

Seguimos nuestro camino y nos encontramos con más camiones militares. Más adelante, en sentido contrario, estaba un camión grande clavado en la tierra. También había varios taxistas. Nos preguntaron qué pasaba. Les expliqué: "Acabamos de pasar. Me pidió un militar que hable por teléfono porque los acaban de emboscar". Los taxistas nos contaron que ellos habían escuchado la balacera.

El nuestro fue el primer carro que pasó después de la emboscada. En el siguiente pueblo preguntamos si había caseta telefónica. Nos respondieron que sí, pero que no tenía servicio. Seguimos hasta Chilapa. Allí nos dijeron que ya habían avisado de la emboscada.

Ésa fue la primera de varias emboscadas. Después se dio otra en lo que llamamos El Ocotál, en Chilapa, yendo para Tlapa. Fue en un lugar al que se conoce como Las Antenas. De esa sí se conoció tiempo después. La hizo el EPR. Entiendo que murieron varios militares. Creo que también hubo muertos de la guerrilla. Fue un enfrentamiento muy cruento. Parece que el Ejército detectó que en el ataque participó gente de la región de Temalacatzingo. Eso dio pie para que se instalara allí un campamento militar y se iniciara una persecución encarnizada contra la población civil. Documentamos varios casos de tortura que presentamos en su momento al relator especial contra la tortura de la ONU, señor Nigel Rodley, cuando hizo su visita a Chilpancingo, Guerrero, en 1997.

EPR y ERPI

Desde antes de lo sucedido en El Charco en 1998 conocíamos lo que ya se sabía un poco en la Montaña: que había acercamientos de gente de la guerrilla con organizaciones sociales y civiles. Que buscaban platicar. Que estaban interesados en vincularse al movimiento social, a la organización comunitaria. Eso era un runrún entre las organizaciones de la región. Pero todo era confuso y nada más se decía que había otro grupo armado, sin precisar la información.

Pero no se sabía a ciencia cierta lo que sucedía. Había desconcierto. Estaban las campañas del EPR. Sus combatientes aparecieron en algunas

comunidades. Hasta que se supo que en El Charco hubo una reunión en la que participó un grupo político-militar distinto.

Tlachinollan nunca tuvo más información que la que compartían las organizaciones sociales. Acompañábamos a las organizaciones de Ayutla, pero también a la UOCEZ y a la UCIM en la Montaña. A ellos siempre los ligaron con grupos armados. Nuestra lógica era cómo denunciar, cómo defender, cómo documentar casos. En eso consistía el acompañamiento que hacíamos. Sin embargo, hasta la fecha, el Ejército piensa que tenemos una agenda oculta. Siempre lo maneja así. Siempre ha sostenido eso.

Hay un expediente que llevamos hace tiempo. Un helicóptero del Ejército fumigó un predio, se equivocó en la coordenada y le dio a una huerta de aguacates. Aunque había droga en la región, no destruyó donde tenía que destruir. La huerta era de una señora. Presentamos la denuncia por los daños causados. Vinieron peritos de la PGR y verificaron que sí se habían afectado los aguacates, y que la amapola estaba sembrada en otro lugar. La señora demandó que la indemnizaran. Se llegó a un acuerdo y la compensaron. En ese expediente el Ejército nos señala sin pruebas de que somos del EPR.

Hace año y medio sucedió otro caso muy parecido. Tlachinollan intervino, pero no había pruebas muy claras. No teníamos un perito que fuera a corroborar la existencia de los daños. La denuncia siguió su curso. El Ejército se negó a indemnizar. Su defensa

nos acusó de que ya habíamos hallado el modo de que pagaran. Argumentó que Tlachinollan siempre apoyaba a los grupos armados y que estaba interesado en desprestigiar la imagen de las fuerzas armadas.

Para el sector duro del Ejército somos aliados de la guerrilla, los defendemos. Como hubo muchas denuncias de los organismos de los derechos humanos por la matanza de El Charco, el general Aguirre Rivero llegó a decir que los organismos civiles de derechos humanos éramos “los brazos civiles de la guerrilla”.

Siempre nos catalogan como si fuéramos del EPR. Obviamente, son acusaciones falsas. No hay nada contra nosotros. Y lo saben. Tienen intervenidos nuestros teléfonos. Escuchan todo. Nos damos cuenta. En una ocasión lo constatamos con toda claridad. Nos acabábamos de cambiar de las oficinas que teníamos en el hotel a unas nuevas. Sonó el teléfono una vez. De inmediato lo levanté y se cruzó una llamada. Oí una voz que decía: “Ya cambiaron de teléfono. Están en otra oficina. El teléfono es 4761200”. Así de directo.

Los expedientes de los casos que llevamos están allí. Por respeto a las víctimas, no son públicos. Si no fuera por ellos, no tendríamos nada que esconder. Pueden revisar nuestros expedientes: no hay nada. No tenemos relación con organizaciones guerrilleras.

Tenemos una postura ética. Y eso al gobierno le pesa. Tratan de hacer mayor presión contra nosotros cuando consideran que estamos defendiendo a

gente del EPR. Para ellos, lo que en su imaginario es lo más grave es que nosotros nos aboquemos a defender al EPR, o sea, a grupos de insurgencia armada. Eso es para ellos lo más grave, no que se violen los derechos humanos.

Cacería de brujas

A raíz de las emboscadas se dieron detenciones arbitrarias y tortura. Documentamos algunas. Es el caso de un enfermero que en 1997 fue a vacunar a una comunidad en la región de Temalacatzingo. Estaba programada la aplicación de vacunas. Al regresar a la comunidad con su caja de vacunas, encontró un retén. Los soldados lo interceptaron e interrogaron. Le preguntaron que adónde había ido. Respondió que venía de una comunidad, que fue a vacunar. Le dijeron que no era cierto, que había ido a curar heridos en el cerro, que andaba haciendo otras cosas. Les insistió en que era enfermero y estaba de comisión. No les importó. Se lo llevaron a la barranca y lo torturaron para que confesara dónde había estado y quiénes andaban con los grupos armados.

Ese caso lo documentamos. El enfermero tenía mucho miedo. Pedía a los médicos y a sus superiores que ya no lo mandaran fuera, porque si salía con vacunas lo acusaban de apoyar a la gente armada.

Catalogaban a cualquiera como miembro del EPR. Fue el caso de Juan, un señor que vendía pollos y que no hablaba español. Andaba ranchando. Los

militares pasaron por allí y lo detuvieron. Le dijeron que había llevado comida a los que andaban en el cerro. Él hablaba náhuatl. No comprendía lo que le preguntaban. Pensaron que su nula respuesta al interrogatorio era para hacerles creer que no entendía.

Lo torturaron horrible. Me habló gente del pueblo para avisarme: “Ve por él. Se va a morir, está gravísimo, está golpeadísimo. Nadie lo quiere sacar”. Yo estaba como a cuatro horas de allí. Les pedí el teléfono del sacerdote para solicitarle que él lo sacara. Le hablé y le expliqué: “Mira, desde acá va a estar más complicado”. Le pedí que hiciera el esfuerzo por sacarlo, simplemente estaba herido. Finalmente lo llevaron al hospital.

Allí lo visité. Estaba muy maltratado. Sólo porque no les dio información. Pero no podía dar información de lo que no sabía. Me describió cómo lo golpearon, sobre todo cuando estaba tirado. Lo vendaron y amarraron, le pegaron en el estómago, le dieron tablazos. Juan me impresionó. Pensé que se iba a morir. Estaba maltrecho y todo tembloroso, con mucho miedo. Afortunadamente, se logró reponer.

Otro caso fue el de un maestro. El Ejército tenía información de que uno de sus hijos andaba portando armas. Lo señalaban como responsable de un homicidio. Detuvieron al maestro en su pueblo, por San Martín Jolalpan, en el municipio de Cualac. Se lo llevaron, lo interrogaron y después lo subieron a un camión del Ejército. Nos contó que lo bajaron en una barranca.

Allí lo vendaron, le quitaron la ropa y le pusieron otra. Entiende que era un uniforme militar. Así lo trasladaron a Chilpancingo, donde lo estuvieron interrogando. No fue una tortura como la que sufrió Magencio, pero sí lo golpearon. Querían saber quién tenía armas y quiénes estaban metidos con la guerrilla. Después lo regresaron y llegó a su pueblo. Hasta la fecha el maestro quedó con secuelas de la tortura.

Documentamos y pusimos las denuncias de esos casos y de otros. Eso fue lo que le presentamos al relator especial contra la tortura en 1997, cuando hizo su visita a Guerrero. Estaba ya David Fernández en el Centro Prodh. Nos coordinamos con él y presentamos estos casos en el contexto de la guerra de contrainsurgencia contra el EPR.

El cerro de Chupamirto

Muchas agresiones del Ejército no tuvieron que ver con grupos guerrilleros, pero el que se cometieran da cuenta de los peligros de la militarización. Una de ellas fue la del cerro de Chupamirto.

El Ejército había desplegado una gran movilización para dar con el paradero de los grupos del EPR. Estaba en varios municipios, sobre todo en Metlatónoc. Había municipios considerados focos rojos.

El presidente municipal de Metlatónoc adquirió camionetas nuevas para los de seguridad pública. Mandó a una comisión de doce policías, el tesorero y el secretario del municipio a recogerlas a Chilpancingo.

go. Ya de regreso, pararon en Tlapa. Allí se pusieron a beber, celebrando el estreno de los vehículos. En la tarde tomaron camino a Metlatónoc. En el trayecto pasaron a varias comunidades a comprar más cervezas. Y, ya tomados, pasando por El Gitano, cerca de la cabecera municipal, empezaron a tirar balazos al aire.

En el cerro había asentamientos del Ejército; al escuchar los disparos, los militares desplegaron un operativo. Un grupo de ellos que estaba antes de El Gitano detectó el paso de los vehículos y de los hombres armados, pero se quedó allí. Llamó a otro grupo que estaba cerca de Metlatónoc, avisándole que en el camino iba un grupo armado, sin cerciorarse de quién se trataba. Supusieron que era del EPR. Los militares se atrincheraron en la curva del cerro del Chupamirto.

Los policías de Metlatónoc venían gritando, platicando y accionando sus armas. Los soldados los estaban esperando. Eran como las 8 de la noche. Ya no se veía. En la mera curva, los militares dispararon. Al escuchar los balazos, los policías saltaron de las camionetas. Los soldados mataron a uno y otro quedó herido en el suelo sin poderse mover. Otros dos heridos lograron correr. Los demás escaparon.

La camioneta quedó en el camino. El tesorero llevaba mucho dinero para el pago de los trabajadores, pero dejó el maletín y huyó. El Ejército controló el lugar. El policía que quedó herido fingió estar muerto. Los soldados que inspeccionaron el lugar lo

patearon y concluyeron: “Ya está muerto. Hay dos muertos. Mañana que vengan a recogerlos”.

Según el policía herido (que fue quien nos dio el testimonio) se veían nerviosos, temían que el resto de los policías regresaran. Así que tomaron sus lugares para estar alerta. Pero no pasó nada. Simplemente eran policías municipales que venían tomados, accionaron sus armas y corrieron. Ya no hubo reacción.

En la mañana, los soldados volvieron hacer el recorrido para ver cuántos muertos más estaban tirados. Nada más era uno, él. Lo volvieron a patear y no le quedó de otra que medio moverse. “¡Está vivo!”, gritaron. Temió que le dieran de balazos. Pero en lugar de eso lo agarraron, lo amarraron y le preguntaron:

–¿Tú que haces acá?

–Aquí me quedé desde el balazo que me dieron.

Los militares detuvieron al policía y lo interrogaron. Querían saber quién era. Les respondió que era policía y les explicó toda la historia desde el principio. Llegó un helicóptero y se lo llevaron a Tlapa. Allí lo interrogaron de nuevo. Le preguntaron qué hacía. No creían en su explicación. Querían saber cuál era su vínculo con los grupos armados.

Su familia fue a vernos. Nos contaron que sabían que su Gabriel estaba herido y lo tenía el Ejército. Querían que lo curaran y lo liberaran “porque él no hizo nada”. Fuimos a ver a los soldados. No quisieron darnos información. Regularmente así lo hacen.

Lo trasladaron al hospital. Su familia nos avisó y fuimos a verlo allí. Nos explicó lo sucedido. Nos

contó el interrogatorio que le hicieron. Querían saber los nombres de todos los policías, de dónde venían, a qué habían ido, qué vínculos tenían, de qué comunidades eran. Verificaron nombres y apellidos. Para los militares se trataba de una provocación. Exigían saber por qué iban armados, por qué iban tirando balazos, cuál era el motivo para disparar, cuál era el plan que traían. Veían una conspiración.

Pusimos la queja. De inmediato lo liberaron. Se pidió que se indemnizara a los familiares del policía muerto. El Ejército respondió que había actuado en defensa propia porque ellos venían disparando. Dijeron que ellos tuvieron que reaccionar.

A final de cuentas, a Metlatónoc llegó un operativo grandísimo del Ejército. Se quedaron como un mes haciendo un recorrido de todo el municipio, investigando. Cuestionaron al mismo presidente municipal. Querían saber si era del PRD. Insistían en que había un vínculo con otro tipo de grupos.

Pedimos que la CNDH fuera a Metlatónoc a verificar estas acciones. Que revisara los operativos del Ejército. La queja no prosperó. La familia ya no quiso seguir con el caso. Finalmente, lo sucedido en el cerro del Chupamirto quedó sin investigación. No hubo ningún avance. Al contrario, el Ejército se posicionó más en el municipio.

Los hechos del cerro del Chupamirto no son una excepción. La militarización de la Montaña, que hemos documentado durante estos 25 años, ha sido sistemática, permanente. Ya sea entrando direc-

tamente a las comunidades, como pasó en Ayutla, donde iban a las comisarías, entraban e investigaban, veían si había armas e interrogaban al comisario, o en estos operativos, en los que establecen campamentos en diferentes regiones y de repente ponen los retenes. O para hacer investigaciones.

El Vaquero

El hecho tuvo secuelas. La gente no olvidó. Resulta que el 29 de septiembre hay una fiesta importante de San Miguel Arcángel en Metlatónoc. Y, como sucede en muchas fiestas, se bailan danzas tradicionales. Allí se baila la danza de El Vaquero en la cancha. Consiste en un diálogo entre el vaquero, los peones y otros personajes. En la trama andan buscando un toro para matarlo y repartírselo entre los caporales.

Ese día de fiesta, llegó al municipio un grupo del Ejército. Fueron a la cocina económica, comieron y tomaron unas cervezas. Un soldado colocó la radio y empezó a comunicarse a través de ella. No le importó que el pueblo estuviera celebrando. A los habitantes les disgustó el comportamiento del militar. Les pareció que estaba estorbando y no lo veían muy bien, pero lo toleraron. Así que siguieron bailando.

La danza siguió su trama. El vaquero decía versos medio chistosos y la gente reía. Pero en eso el vaquero aventó la reata al militar que estaba sentado llamando por teléfono. La reata no lo lazó, pero alcanzó a pegarle. Molesto, el soldado se levantó y

puso su arma enfrente. Algunas personas se espantaron. Pero otras, que estaba tomando, se enojaron. Se fueron contra el militar y lo sometieron.

En ese momento salieron los otros uniformados que estaban en la cocina económica, armados, y apuntándole a la gente. Unos se espantaron y corrieron. Otros se enfrentaron con los militares. “Vamos agarrándolos”, dijeron. Para complicar más la cosa, la policía municipal salió armada y encañonó a los soldados.

En medio de la fiesta, con la música y la tomadera, el asunto estaba muy caliente. Empezaron entonces a hablar por micrófono en mixteco y a decir: “Vengan, porque el Ejército nos está apuntando y nos quiere matar”. Se armó el escándalo. La gente rodeó a los soldados y los desarmó. Ya no les quedó de otra que quedarse allí, sometidos.

Los metieron a la cárcel desarmados. Toda la noche la gente les aventaba cubetazos de agua. Estaban indignados. Les reclamaban: “¿Qué hacen acá? ¿Por qué vienen si estamos haciendo nuestra fiesta?”

Ese día estábamos con un agente del Ministerio Público Militar, viendo otros casos. Le hablaron por teléfono para avisarle del problema en Metlatónoc. Nos dijo que se tenía que ir porque estaban detenidos varios militares. Esa misma noche, a las 8, se fue para allá.

Más tarde nos informó que la gente no quería soltar a los soldados. Para ello exigían que se mar-

charan del municipio y pagaran lo que habían hecho en el cerro del Chupamirto. Decían que esas muertes y ese herido no iban a quedarse así. Sobre todo, la del policía y lo del herido. Tuvo que viajar un alto mando militar desde México hasta Metlatónoc para negociar y poder liberar a los soldados.

Al igual que sucedió con la danza, la militarización trastocó todos los espacios festivos, de ritualidad y de organización comunitaria en la Montaña.

V AYUTLA DE LOS LIBRES

El racismo

Ayutla ha sido, históricamente, un bastión de pueblos en resistencia. Pero su resistencia ha sido silenciosa. Se conoce más la experiencia de la Montaña que la de Ayutla. Cuando se piensa en la Costa Chica no se piensa en Ayutla, sino en la región del lado del mar. Pero Ayutla vive situaciones muy graves. Se le tiene en el olvido.

La Costa Chica, la Costa Montaña, Ayutla y San Luis Acatlán son comunidades donde la población mestiza es muy racista. Tiene prácticas aborrecibles. El racismo está más arraigado en San Luis y en Ayutla que en Tlapa.

En Ayutla y San Luis se nota muy fuerte el maltrato hacia los niños y las niñas indígenas. Sobre ellos hay una explotación muy grande. Últimamente en Tlapa eso ya no se da mucho, porque Tlapa es mayoritariamente indígena. Los mestizos pasaron a su mínima expresión. Y, además, está la fortaleza de la lucha.

A pesar de que los partidos políticos han querido aprovecharse de la organización, Ayutla es terreno fértil de la resistencia. No obstante que su geografía es parecida a la de la Montaña, sus comunidades están mucho más aisladas. Por ejemplo, para ir al Charco te haces como una hora y media, pero, como no hay medio de transporte o si lo hay la gente no tiene dinero, hay que caminar como tres horas. La región está muy incomunicada. Y eso hace que florezcan los abusos, los excesos de la policía, los políticos caciquiles. La gente resiste, pero su resistencia no está tan articulada como en otras regiones.

Empezamos a documentar casos en la región de Ayutla después de nuestro bautizo de fuego con el caso de Magencio. Fue antes de que se produjera la masacre del Charco, en 1998.

Había un grupo de religiosos que estaban en la región, pero pertenecían a la diócesis de Tlapa, en la frontera entre la Montaña y la Costa. Nos pidieron que los acompañáramos. Allá fuimos.

Nos informaban sobre los movimientos del Ejército en la región. Nos avisaban: “ya entró en tal comisaría, ya se metió acá, está entrevistando en este lugar, tiene un campamento en este otro”. Nos pusieron sobre aviso de lo que estaba pasando. Como religiosos, estaban preocupados. Nos confiaban: “Vemos que las cosas se están complicando en las comunidades, no sabemos qué pasa”.

En ese tiempo comenzó a formarse la organización de los pueblos me'phaa y ñuu savi, la OPMT

(Organización de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos), que después fue la OPIM (Organización del Pueblo Indígena Me'phaa). Ellos denunciaron que el Ejército estaba patrullando las comunidades. Llegaban a las comisarías y se metían a revisar si había armas.

En una comisaría los militares encontraron un video del levantamiento zapatista. Llamaron al comisario para preguntarle por qué lo tenían. Investigaron a unos religiosos que estaban por allá. Querían saber qué hacían, cuál era su trabajo. Empezaron a identificar a los actores. Hicieron el mapeo de quienes estaban en la región.

Fuimos a Ayutla y establecimos contacto con el pueblo me'phaa. Sus quejas eran parecidas. Los soldados, nos dijeron: "Se están metiendo. Vienen y cortan las mangueras de donde la gente está sembrando su frijol, su caña. Llegan y las cortan".

Era claro que había una estrategia para ahogar a las comunidades y amedrentar a los comisarios. Si encontraban que un comisario no estaba con el PRI, sino con el PRD, lo investigaban. Eso nos llevó a que empezáramos a atender las denuncias.

Todas estas acciones eran parte de un patrón sistemático de contrainsurgencia. Pero no lo vislumbrábamos. Veíamos los hechos, pero no el panorama completo. Nos faltaban las herramientas para analizar. Estábamos aislados. Nos habíamos propuesto realizar un trabajo pequeño. No sabíamos que estábamos peleando contra un gigante. Trabajábamos en

un contexto de mucha violencia, de una militarización muy acendrada en las comunidades y de la reaparición de la guerrilla. Todo estaba caliente.

Esterilizaciones

El asunto de las esterilizaciones de hombres, y de las mujeres que fueron víctimas de la tortura sexual en Ayutla, se inscribe dentro del proceso de lucha contra los grupos armados en la región. Fue parte de una política de contrainsurgencia.

Se sabía que en Ayutla operaban grupos armados. El Ejército ubicaba a mandos de la guerrilla en esa región. Puso en práctica un despliegue de tropas amplio, con una estrategia bélica con diferentes componentes. En cambio, en la Montaña el proceso no era tan profundo. Lo que había eran más bien focos o células. Pero en Ayutla había un proceso organizativo, con un trabajo más ligado a las comunidades. La organización social no necesariamente tenía relación con la lucha armada. Era una organización comunitaria, que expresaba la necesidad de acuerparse, de organizarse. Y había gente vinculada a la guerrilla.

Esa organización era parte de un proceso más amplio, con el que las comunidades buscaban defender sus derechos y generar procesos autogestivos. Partía de las mismas comisarías. Y la estrategia gubernamental para enfrentarlo se desplegó también en ese terreno. La campaña de esterilización contra hombres en la región fue resultado de ello.

Era 1998. Comenzamos a tener información sobre las esterilizaciones forzadas en Ayutla, pero en un primer momento no las incluimos en una queja. No lográbamos construir un relato más acabado de lo que estaba pasando. Escribimos algo en nuestros informes, pero no pudimos dar una idea completa.

El caso no tuvo mucho impacto mediático, pero fue muy relevante. Mostró que la Secretaría de Salud se prestó a implementar una campaña de esterilización en la región de Ayutla, que era parte de una política de contrainsurgencia, en la que, desde diferentes ángulos, se involucraron distintas dependencias gubernamentales.

No fue una equivocación de la Secretaría de Salud. No fue una medida para control de la población. Fue una medida de castigo.

La instrumentaron en las comunidades donde había más presencia y organización del pueblo me'phaa, donde había más participación, más activismo, más denuncias, donde estaba muy fuerte el rechazo al Ejército. La Secretaría de Salud se prestó para hacer esa campaña de esterilización. La ejecutaron los médicos y enfermeras que estaban adscritos a la Secretaría y que participaban en las caravanas de la salud. Iban a las comunidades y, al mismo tiempo que daban consulta, buscaban convencer a los hombres de que se operaran. Perteneían a cinco comunidades mixtecas y tres tlapanecas. Les prometieron que iban a darles despensas, a curar a sus hijos, a

proporcionarles medicinas y a llevarles médicos para establecer una casa de salud, para proporcionar atención permanente. También ofrecieron programas de apoyo a las mamás y entregarles maíz.

Su meta fue usar la sexualidad para denigrar a los hombres, presentándolos como hombres capados. Dentro de la cultura indígena, los hombres que ya no pueden procrear son hombres que no sirven. Dentro de la cosmovisión indígena, era una forma de sobajarlos.

Así pasó también con las mujeres que violaron. Fue una manera de trastocar la vida comunitaria. Fue como decir: “Nos chingamos a sus mujeres, nos chingamos a los hombres”. Fue parte de una guerra psicológica. Se metieron a la intimidad de las personas, trastocaron su dignidad y buscaron golpear su moral. Se trató de una guerra contra el cuerpo, utilizando lo máspreciado de la sexualidad.

Fue curioso que primero se realizaran, en 1998 y 1999, estas esterilizaciones. Y después, en 2002, violaran a Inés y Valentina. Hay testimonios de que hubo otras violaciones sexuales a mujeres. Pero esas no trascendieron. Fue una guerra en la que el Ejército tomó a las mujeres como botín.

La denuncia más fuerte contra esas esterilizaciones fue en la comunidad mé'phaa de El Camalote. Allí fueron esterilizadas ocho personas. Dieron su testimonio. Hicieron la denuncia. Fue muy importante el trabajo de las organizaciones. Sin ellas el caso habría quedado suelto.

Los acompañamos en hacer su denuncia y presentar la queja. Primero lo hicimos a nivel estatal, pero no se avanzó. Luego se llevó a la CNDH, la cual hizo una recomendación. Se probó que sí hubo esterilización forzada. No porque hubiera coerción física, sino porque hubo un engaño. La gente la aceptó porque el médico ofrecía otros servicios.

Los claretianos

La masacre de El Charco en 1998 nos marcó y nos llevó a involucrarnos más en la Costa Chica. Desde antes que se produjera, ya estábamos acompañando a las organizaciones y a varios procesos en la región. Desde comienzos de los noventa, algunos religiosos claretianos estaban en misión entre Ayutla y Acatepec. La experiencia que impulsaron fue muy importante. Trabajaron mucho con la comunidad. Eran comunidades olvidadas a las que nadie llegaba. Ellos empezaron a apoyarlos con técnicos, que eran católicos que venían de otros países a dar solidaridad.

Lograron llevar allá una turbina que permitió que, con la fuerza del agua de una barranca, se pudiera generar electricidad en una comunidad en Plan de Gatica. O sea, en medio de la oscuridad, había una comunidad pequeña, como de 500 personas, que tenía luz eléctrica. En las comunidades provocó un impacto cómo lo hicieron. Y, sobre todo, saber que la energía no llegaba por medio de cables que venían de otro lado, sino a través de una turbina que estaba allí mismo. Los técnicos capacitaron a la gente en

cómo darle mantenimiento, en cómo hacer las instalaciones de las casas. Fue impresionante.

Eso ayudó a que la gente se uniera y trabajara con otros ingenieros en la construcción de un puente vehicular de una sola vía en el río Velero, que era imposible cruzar, porque es muy caudaloso. Muchas comunidades se organizaron en torno a las obras que se estaban realizando.

Sin embargo, no todo fue bien. Falló un puente de madera que se construyó. La gente estaba muy ilusionada con la obra, porque al fin se iban a poder comunicar comunidades enclavadas en lugares inhóspitos. El puente fue diseñado por Markus, un joven austriaco. La obra era su tesis de maestría. La gente intuía que el puente no estaba muy bien soportado, pero el técnico desestimó los temores. Él mismo estaba haciendo los últimos amarres cuando la obra se vino abajo. Murió en el río. Sobrevino entonces una gran desilusión.

En esos tiempos acompañábamos al obispo Alejo en sus visitas a las comunidades. Caminábamos, íbamos a esos lugares, que son parte de la misma diócesis. Eran los linderos de Ayutla. Eso ayudó a que la gente se organizara. Y a que nosotros empezáramos a tener contacto con las comunidades, en el ámbito del acompañamiento misionero. Todavía no se formaba Tlachinollan.

La gente empezaba a hablar de la militarización, de la presencia del Ejército en varias comuni-

dades. Los misioneros eran investigados, porque decían que eran miembros de la guerrilla. Circulaban videos de la lucha zapatista en Chiapas. Los militares decían “aquí hay otras cosas”.

Todo eso dio pie para que, poco a poco, viéramos que era importante tener una oficina en Ayutla. La oficina allá tiene 18 años. Realmente, en ese tiempo no dimensionamos qué tan importante era tener una oficina en Ayutla. La instalamos nada más por la coyuntura, pero nunca nos imaginamos todo lo que representa Ayutla en términos de movimientos de resistencia, de experiencias en defensa del territorio, de la Policía Comunitaria, de la misma UPOEG, del gobierno comunitario, de un amplio tinglado de experiencias en las que, bien o mal, hemos participado.

El Charco

En la madrugada del 7 de junio de 1998, mientras dormían en la escuela primaria Catarino Maldonado, 10 indígenas mixtecos y un estudiante de la UNAM fueron ejecutados –algunos sumariamente– por soldados. Los campesinos pertenecían a la OIPMT. El general Juan Alfredo Oropeza Garnica, jefe de la 27 zona militar, estuvo al mando del operativo. Ernesto Zedillo era presidente de la República. El gobierno quiso presentar la matanza como un enfrentamiento entre el Ejército y guerrilleros.

El Ejército llegó a El Charco a masacrar, en lugar de disuadir o de desplegar un operativo don-

de la fuerza no fuera lo que predominara. Podían haber detenido a los integrantes del grupo armado que estaban allí, junto con los comisarios. Pero no. Fueron las balas y las bombas. Los soldados gritaban: “¡Salgan, perros!” El ataque, ordenado por el general Alfredo Oropeza Garnica, fue una declaración de muerte. Llegaron con todo para matar, a masacrar.

La masacre de El Charco fue un momento muy doloroso para los pueblos. A raíz de ella y también de la matanza de Aguas Blancas por Rubén Figueroa, privó un sentimiento de impotencia. No hubo nada. Destituyeron al gobernador, pero más por el video que se difundió en la televisión que por lo que realmente se hizo contra los campesinos. No pensábamos que a escasos dos años se iba a producir otra masacre en el estado, también por parte del Ejército.

Allí vimos claramente cómo el poder caciquil, vinculado con el Ejército, con las fuerzas más oscuras del estado, con ministeriales, militares y caciques, es un poder sanguinario. Es un poder dispuesto a destruir vidas donde hay tejidos comunitarios que luchan por defender sus derechos. Es un poder que considera veneno el florecimiento organizativo de los pueblos. Lo ven como lo más peligroso.

Más aún donde hay expresiones de insurgencia armada. En esos casos no hay ninguna consideración. Donde hay vestigios de que existe presencia armada, arrasan, arrancan de tajo.

Aunque había comenzado desde antes, el hostigamiento militar se generalizó en la región

después de la matanza. Desde junio de 1998 a 2001 varias comunidades na savi y me'phaa fueron asediadas y agredidas por los militares. Instalaron sus campamentos dentro de sus tierras sin el permiso de la comunidad. Se metían a las huertas para robarse los pocos productos que cosechaban. Mataban chivos. Trozaban mangueras que los pobladores utilizaban para regar sus parcelas. Interrogaban a la gente y allanaban domicilios. Detenían a cualquier persona que veían sospechosa. Se la llevaban en sus camiones. Se metían a las comisarías y se atrevían a cambiar comisarios.

Después de la masacre se cometieron asesinatos selectivos contra líderes comunitarios que, bien o mal, tenían presencia organizativa. Los fueron eliminando. Fue parte de un proceso de limpieza política, a pesar del escándalo y de la denuncia internacional. Cuando detectan células subversivas en Guerrero, las órdenes que se dan son matar.

El hecho de que la matanza de El Charco haya sucedido en Ayutla, en una escuela, en una comunidad muy pobre, nos colocó a nosotros en el paredón. Siempre hemos sido pocas las organizaciones de derechos humanos en Guerrero que trabajamos de tiempo completo. Saber que las víctimas fueron masacradas, cómo a algunas les dieron el tiro de gracia, cómo fueron torturadas, conocer los testimonios de Erika Zamora, de Efrén Cortés y de los demás, fue un golpe muy duro. Fue terrible.

El Charco fue para nosotros una prueba de fuego. No sólo por lo que sucedió en ese momento, sino por lo que se vivió después. La lista de dirigentes indígenas regionales muertos violentamente desde entonces es larga. Forman parte de ella Galdino Sierra Francisco, tlapaneco de Barranca de Guadalupe, miembro de las Comunidades Eclesiales de Base, asesinado en abril de 2000; Donaciano González Lorenzo, ejecutado en enero de 2001, y Andrés Marcelino Petrona, dirigente mixteco de El Charco e integrante del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, baleado en agosto de ese mismo año.

Ecos

El Charco fue un hecho que suscitó el interés, la atención y la intervención de muchos actores. Por eso, en un primer momento, nosotros no logramos acompañar a las viudas y estar más cerca de ellas. Al comienzo convergieron en ese asunto muchas fuerzas políticas y muchas organizaciones, sobre todo vinculadas a las distintas expresiones del PRD. Ellos abanderaron esa lucha.

Eso dio pie a que, lamentablemente, cooptaran a las viudas de mala manera. Impidieron que pudieran tener un mejor acompañamiento desde una perspectiva de derechos humanos. En lugar de tratarlas como víctimas de graves violaciones, las vieron como clientela política, como un botín en disputa.

Fue lamentable. La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Asma Jahan-

gir, fue a Guerrero. Además de los diferentes casos de ejecuciones, el tema central de su visita fueron las ejecuciones de El Charco en lo particular. La relatora no tenía una contraparte que le pudiera llevar a las viudas para reunirse con ellas. Nos pidieron que habláramos con las viudas para que la vieran. Pero no queríamos meternos en problemas. Tratamos de conectarnos con ellas y nos dijeron: "Hablen con fulano de tal, hablen con tal persona". Todos nos respondieron que ellos estaban al frente del asunto. En los hechos, nos decían que nosotros no teníamos nada que ver. Y nos bloquearon.

Al final, hablamos con la Fundación Ovando y Gil, que las apoyaba por medio de becas. Por medio de ellos logramos avisarles que fueran con la relatora las que pudieran hacerlo. Llegaron seis viudas. Pero, en ese mismo momento, se presentó también un grupo del PRD, echando pestes contra nosotros. Nos reclamaron que no les habíamos pedido permiso para llevar a las mujeres. Les respondimos que lo importante era que ellas hablaran con la relatora.

Fue muy desagradable. En el evento se dio un jaloneo muy feo. Nos acusaron de que nos estábamos aprovechando de ellas. Además, faltó que las viudas se prepararan bien para la reunión. Habría sido necesario explicarles de qué se trataba, cuál era el sentido de que brindaran su testimonio. No pudimos hacerlo.

Allí vimos que era muy complicado dar el acompañamiento y preparar la documentación y la

denuncia. Decían que ya habían presentado la denuncia. Pero al final se diluyó el caso. Había muchos actores metidos en el asunto. Actualmente el caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; lo presentó la Red de Solidaridad Década Contra la Impunidad AC.

Nos frustra que no se haya logrado armar un caso lo suficientemente dramático y emblemático para mostrar el rostro guerrerista del gobierno, su carácter de violador de derechos humanos. No se logró cuajar un proceso de denuncia para que El Charco estuviera en el centro de la atención de la opinión pública internacional. Esperamos que las viudas de El Charco alcancen justicia.

VI LAS MUJERES COMO BOTÍN DE GUERRA

La mitad del cielo

Para el pueblo mé'phaa, las mujeres embajadoras son las gùju ètsu, las grandes mujeres sabias de la comunidad. Las que conservan la memoria intangible que han heredado de los ancestros, las de la palabra cristalina. Palabras que dan luz y que saben guiar a las nuevas generaciones. Las sabias son mujeres reconocidas por su vida recta, por su actuar en favor de la comunidad. Son luz y fuego, ternura y temple. Tienen el don de saber mediar en los conflictos y de mantener la calma en medio de las tormentas.

A lo largo de estos 25 años, el trabajo de Tlachinollan ha estado inspirado por ellas y por el resto de las mujeres de la Montaña. Por las mujeres na savi, mé'phaa, náhuatl y del pueblo mestizo y afro-mexicanas, porque también hemos trabajado en la Costa Chica.

Cuando empezamos la formación de promotores/as en derechos humanos, fue muy importante la participación de las mujeres en los talleres. Asis-

tían compañeras catequistas, integrantes de las comisiones de pastoral y algunas dirigentes.

Recuerdo muy bien a la compañera Felicitas Martínez. Desde muy joven empezó a reflexionar sobre los derechos de las mujeres en su comunidad. Después formó parte del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena. Llegó a ocupar un cargo como coordinadora regional de autoridades comunitarias de la CRAC en la policía. Ha sido un referente a nivel estatal y nacional.

Así como Felicitas, hemos tenido compañeras de diferentes regiones. Recuerdo mucho a Celsa Valdovinos, esposa de Felipe Arriaga, preso de conciencia declarado por Amnistía Internacional. Nosotros llevamos su caso. Ella y sus compañeros formaron la organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán AC. Su experiencia fue clave. Se convirtieron en un referente.

Recuerdo también a Eva Alarcón, otra compañera del Movimiento Ecologista de la Sierra de Petatlán. Dio una lucha muy importante para defender el bosque junto a Marcial Bautista, otro compañero de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán.

Las mujeres han sido un baluarte muy grande en los movimientos por la defensa del bosque, tanto para ayudar a los compañeros como para formar sus propias organizaciones. En la región de la Montaña, las mujeres han tenido el valor de denunciar la violen-

cia que sufren. Esto ha sido algo inédito. Sabemos las circunstancias en las que viven, la adversidad, el trato discriminatorio que padecen, tanto en la comunidad como en las instituciones. Las mujeres siempre están en primera línea en las organizaciones que apoyamos.

En el CECOP, las señoras fueron las encargadas de hacer los plantones para evitar que pasara la Comisión Federal de Electricidad a sus territorios. Estuvieron en las entradas para impedir que la CFE metiera sus vehículos o que los ingenieros se adentraran. Como campesinas, como mujeres que viven en comunidades hermosas, pero olvidadas, tienen mucha decisión, mucha fuerza, mucha determinación para lograr sus objetivos.

La participación de las mujeres en la lucha fue fundamental en Ayutla. Compañeras que forman parte de la OPIM, como las hermanas Obtilia y Andrea, han dado la batalla para denunciar los abusos del Ejército. También para exigir justicia por los casos de Inés y Valentina.

¿Qué ejemplo mayor podemos tener de mujeres que batallan, que el de Inés? Ella es una mujer me'phaa que no ha claudicado en su lucha por exigir justicia y castigar a los responsables de la agresión sexual que sufrió. Su lucha llegó a la Corte Interamericana. ¿O el ejemplo de la compañera Valentina Rosendo? Era una niña de 17 años, que ya tenía una hija, cuando los militares abusaron de ella. Y, a pesar de todas las adversidades, ha tenido la fuerza para seguir adelante.

Inés y Valentina nos han dado ejemplo de perseverancia, de valor, convicción, lucha, entrega, de mucho amor a la causa, de saber pelear en la adversidad. Son mujeres ejemplares que nos han nutrido como defensores. Ellas, sobrevivientes de la tortura, han asumido el rol de defensoras. Siguen adelante no solamente con su causa, sino formando grupos colectivos de mujeres para hacer valer sus derechos.

En todos los casos que hemos llevado con éxito, como el de San Miguel del Progreso, ha sido clave la participación de las mujeres, que han asumido cargos como autoridades, como parte del comisariado de bienes comunales o del consejo de vigilancia. Cuando las mujeres se transforman en autoridades o comisarias, la gente encuentra en ellas valores que no estaban presentes en los comisarios hombres. Por ejemplo, ser personas transparentes, rendir cuentas como debe ser, aplicar la ley sin distinguos, no dejarse corromper ni arredrarse ante las demás autoridades. Siempre trabajan en colectivo y consultan con los principales. Su papel en la defensa del territorio, en la lucha contra las mineras, ha sido muy importante. Cada vez más han asumido un papel determinante.

Los movimientos más importantes que hemos acompañado, como el CECOP, como San Miguel del Progreso o Carrizalillo en su momento, el Movimiento de Ecologistas, la lucha de Mininuma por el derecho a la salud, siempre estuvieron nutridos por mujeres. Han estado al frente para denunciar atrocidades y abusos de los ministerios públicos y militares.

Cuando los esposos han sido víctimas de tortura, de detenciones ilegales, de desapariciones, ellas han tenido la fuerza, el valor, la perseverancia y la determinación para documentar y llevar los casos. Su papel en estas situaciones ha sido fundamental.

Tlacinollan tiene rostro femenino no solamente por acompañar a las mujeres o por dejarse nutrir de su lucha, sino también porque poco a poco hemos ido aprendiendo a tener en nuestro interior la sensibilidad, respeto, tolerancia e inclusión que ellas tienen. Del equipo de 22 personas, la mitad son mujeres. Ellas han hecho una contribución muy importante en las áreas jurídicas, de incidencia, comunicación, de fortalecimiento.

Este nutrido equipo de compañeras ha afianzado dentro del colectivo una visión propia de las mujeres. Eso ha servido también para que, cuando se presentan casos de mujeres, sobre todo los casos de violencia, son las mismas compañeras las que se encargan de atenderlas. Hay en ellas mayor empatía, mayor comprensión, sensibilidad, mayor identificación con la problemática. Ellas han sido claves en el acompañamiento de los casos.

Así ha sucedido con la participación de las madres de los 43 desaparecidos. En México, el rostro de las madres es el rostro que da esperanza, que da fuerza. Es el rostro de la autoridad moral. Esa nueva forma de luchar de las madres como víctimas de la violencia y, también, de las graves violaciones a derechos huma-

nos, ha conmovido al país. Ha cimbrado las estructuras obsoletas de un machismo institucionalizado.

Ellas han removido las formas de ejercer el poder y de imponer una línea machista de lo que es el sentido de la justicia. Hemos aprendido mucho, tanto de las compañeras que luchan en primera línea como de las que sufren la violencia en las comunidades. Pero también hemos aprendido de las jóvenes estudiantes, de las nuevas generaciones que están dando la pelea, que están asumiendo nuevas responsabilidades y reivindican los derechos de las mujeres.

Tlachinollan se ha dejado seducir y llevar por estas corrientes que nos dan el rostro femenino de la justicia. Un rostro luminoso que nos proporciona una luz transparente y brillante. Que nos muestra que se puede caminar por el sendero de la justicia con la voz y con el corazón de mujeres, que saben luchar y pelear con la frente en alto.

La violación

En 2002, Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron víctimas de tortura sexual por elementos del Ejército. Las agresiones se dieron en un contexto de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó violencia institucional castrense. Esta violencia es consecuencia del respaldo que el Estado brinda al Ejército en el desempeño de labores de seguridad pública, en las que desencadena una serie de violaciones de derechos que coloca a la población en una

situación de gran vulnerabilidad. Afecta en especial a las mujeres.

Inés y Valentina fueron violadas por elementos del Ejército en un contexto de guerra de contrainsurgencia. A raíz de la masacre de El Charco, no cesó la persecución contra los miembros de la OPIT ni de la OFPM. Las mujeres se transformaron en blanco de ataque para causar terror y destruir la organización comunitaria.

Desde 2002, el camino de la verdad y la justicia se volvió un verdadero viacrucis para Inés y Valentina porque se toparon con un sistema de justicia que las discrimina y las revictimiza. Tuvieron que caminar varias horas en la intrincada montaña para acudir con el Ministerio Público.

El desprecio y la burla fueron las primeras dagas que les clavaron quienes debieron investigar los delitos. Pero, a pesar de la multiplicidad de peligros que enfrentaron, supieron resistir y mantenerse firmes. La misma comunidad que las apoyaba tuvo que replegarse por temor a una represión mayor del Ejército.

Deambularon solas y a contrapelo de los mismos perpetradores que en todo momento obstaculizaban los avances de la investigación. A pesar del estigma con el que cargaron, supieron dignificar su lucha. Después de 8 años lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara sendas sentencias contra el Estado mexicano. En ambas se concluyó que Inés y Valentina fueron víctimas de tortura sexual.

Inés Fernández y Valentina Rosendo demostraron cómo las víctimas de tortura sexual tienen la fuerza y la capacidad para cincelar con su dolor y sufrimiento nuevos senderos para alcanzar la verdad. La suya fue una lucha desde la adversidad, cobijada en un principio por la comunidad, cimentada con la sabiduría de las embajadoras del pueblo me'phaa. Mientras en nuestro país discriminaban a Inés y Valentina por ser indígenas, por no hablar español, ellas exigieron y expresaron su derecho a la verdad en los tribunales internacionales en su lengua materna. Su lucha por la verdad fue contra el poder impune del Ejército. La palabra cristalina y punzante de Inés y Valentina fue la que agrietó este muro infranqueable del poder militar.

Desde la Montaña Inés y Valentina nos dieron lecciones de cómo se lucha en despoblado para alcanzar la verdad.

Valentina

Valentina Rosendo Cantú nació en 1985, en un paraje conocido como Piedra de San Marcos, anexo de Caxitepec, municipio de Acatepec, en una choza de adobe con zacate. Nació sobre la tierra y junto al fogón. Su mamá no contó con el apoyo de una partera, mucho menos de un médico. Tuvo que aferrarse a la costumbre me'phaa. Para tener a sus hijos, las mujeres se arrodillan sobre un petate y toman de la cintura al esposo para hacer esfuerzos extenuantes

(que a veces implican horas) hasta lograr la expulsión de la nueva criatura.

Así llegó Valentina a la Montaña, en medio de la precariedad contrastada con el enorme cariño que le profesaron sus padres. Fue la primera mujer de los diez hijos que tuvieron. Valentina creció en el campo, comiendo quelites y tortillas. Siempre fue con su madre a la parcela familiar para llevar la comida a su papá. Desde los tres años empezó a caminar hora y media para asistir al jardín de niños de Caxitepec.

Al igual que todos los niños y niñas de la Montaña, iba a la escuela sin almorzar, y en su bolsa de plástico (donde llevaba sus útiles escolares) su mamá le ponía dos tortillas con sal o alguna memela de frijol. Al filo del mediodía regresaba a su casa para escalar la Montaña durante dos horas.

Este sacrificio trajo la dicha a sus padres porque logró la hazaña de concluir la educación preescolar. Entró a la primaria y asumió la responsabilidad de guiar en la Montaña a sus pequeños hermanos que se incorporaban al jardín de niños. Desde los 8 años pudo cumplir con el estudio y con el trabajo en el campo. Culminó su primaria a los 13 años. A esa edad ya sabía sembrar maíz, frijol, calabaza y cortar la flor de la jamaica. También aprendió a moler y hacer tortillas. En lugar de aceptar el rol sumiso que los padres imponen a las niñas, Valentina convenció a sus papás para irse a estudiar la secundaria a la capital del estado. Se fue con una prima y encontró trabajo en una tienda.

En Chilpancingo enfrentó el estigma de su identidad étnica y superó la barrera lingüística. Allí sólo permaneció año y medio porque tuvo que regresar a su pueblo para apoyar a su mamá. Su retorno la obligó a acatar las costumbres que aún imperan en las comunidades indígenas, como que las niñas pueden casarse desde los 12 años, con el consentimiento de sus padres.

Valentina llamó la atención de Fidel Bernardino, quien, atendiendo a las normas comunitarias, le comentó a su papá, Hilario, de su interés por Vale. Con gran presteza, Hilario se preparó para visitar a los padres de Valentina y cumplir con el ritual de petición de la novia. Don Victoriano Rosendo y María Cantú, al enterarse de que el papá de Fidel tenía cierta solvencia económica porque contaba con más de 150 chivos y 15 vacas, se sintieron presionados para aceptar la propuesta matrimonial. Valentina se casó el 28 de noviembre de 2000, cuando tenía 15 años. Dejó la casa paterna para vivir en Barranca Bejuco con la familia de Fidel.

En 2001 nació su hija Yenis, quien fue como una bendición, porque contaron con el apoyo familiar para construir su casa de adobe. Valentina pasaba horas en vela para cuidar a su hija, mientras Fidel se empeñaba en acabar su casa. En los trabajos del campo y de la cocina, Valentina siempre cargaba a su hija en la espalda, acurrucándola con su rebozo. Sólo cuando se iba a lavar a la barranca la dejaba dormida sobre un petate.

Desde que se casaron decidieron incorporarse a la OPIT. En este espacio organizativo las mujeres empezaron a perder el miedo.

La militarización que se vivió en la región después de la masacre de El Charco obligó a que las comunidades se organizaran y empezaran a denunciar la multiplicidad de atropellos que el Ejército cometía con total impunidad.

Las denuncias públicas que empezaron a difundir como organización indígena acrecentaron la animadversión de los militares hacia los miembros de la OPIT. Con el fantasma de la guerrilla el Ejército tomó el control de la región e implementó una guerra de baja intensidad, que se focalizó contra las organizaciones indígenas independientes.

Esta problemática era analizada en las reuniones que la OPIT realizaba cada semana en diferentes comunidades. Entre sus miembros siempre estuvieron presentes Fortunato Prisciliano, Inés Fernández, Fidel Bernardino y Valentina Rosendo. Ellos y ellas estaban bien enterados de las atrocidades de los militares. Nunca imaginaron que el Ejército llegaría al extremo de cometer violaciones sexuales como parte de una estrategia bélica.

El 16 de febrero de 2002, Valentina, después de haber dado de comer a su hija y de dormirla sobre su pequeño petate, cargó con la ropa y el jabón de polvo para lavar en la barranca. Escogió la mejor piedra para tallar la ropa. Aprovechaba la corriente de

agua para enjuagar con mayor facilidad las prendas enjabonadas. Ensimismada en su pensamiento y atareada con la ropa que lavaba, escuchó a lo lejos voces y ruidos de hojas secas. Sintió miedo cuando de reojo vio que se acercaban ocho militares con una persona que traían atada de las manos. Siguió concentrada en su trabajo, aparentando ignorar lo que sucedía en su entorno. Los militares la rodearon y empezaron a interrogarla. Valentina respondía lo mínimo, por el miedo que la invadía y por su precario español.

En el interrogatorio le pedían nombres de encapuchados. Recuerda que nombraron a su esposo Fidel, quien aparecía en la lista de personas que ellos buscaban, al igual que Ezequiel Sierra, quien era el comisario, y a Encarnación Sierra, que fungía como secretario de la comisaría. Durante el interrogatorio un militar le asestó un duro golpe en el estómago, que la dejó inconsciente por un momento. En ese instante uno de los militares se abalanzó sobre ella para violarla. Esto mismo hizo otro de los militares, que pertenecían a la base de operaciones Ríos, quienes habían llegado a la región de Acatepec en los primeros días de febrero de 2002.

Esta violación sexual se enmarca en la operación Azteca 21, que diseñó el Ejército desde la 35 zona militar, designando al 41 batallón de infantería para que se abocara a la erradicación de plantíos de amapola y a la aplicación de la Ley Federal de Armas de fuego y Explosivos. Implementaron la operación

militar en la zona de Mezcaltepec. Se sabe que, en esos días, en el cruce de Pascala del Oro detuvieron a un civil, de quien nunca se supo su paradero ni su identidad. Esta información, proporcionada por el Ejército, coincide con el testimonio de Valentina, quien habla de un civil que llevaban amarrado y que fue testigo de la violación sexual.

La base de operaciones Ríos cambió de mando por la Méndez, que se instaló en la comunidad de Tres Cruces durante el mes de marzo, cuando se consumó la violación sexual de Inés Fernández Ortega en su domicilio de Barranca Tecuani, en marzo de 2002.

A Valentina la agredieron no solamente los dos militares que la ultrajaron, ni los ocho que fueron cómplices, sino el Ejército mexicano en su conjunto, porque, con tal de no enlodar su imagen, intentaron acabar con Valentina. Ella ha cargado con todo el aparato represivo e impune del Estado. Ha sobrevivido a todos los intentos de arrancarle la vida. Ha demostrado ser una mujer digna, orgullosa de su identidad étnica, fiel a sus principios, indómita en su búsqueda de la justicia. Una mujer inquebrantable en sus objetivos para lograr que se castigue a los responsables para que no se repita más esta barbarie, para que el Ejército reconozca públicamente su responsabilidad y repare todos los daños.

En lo más recóndito de la Montaña, don Victoriano Rosendo y doña María Cantú, desde que su

hija Valentina alzó la voz para romper el muro de la impunidad, viven intranquilos. Les llegaron rumores de que su hija trabajaba en las cantinas, de que la iban a matar y de que a ellos les iban a quitar su parcela y los iban a correr del pueblo.

Además del ultraje físico, Valentina sufrió el estigma de la comunidad, el abandono de su esposo, la vergüenza y la cerrazón de las autoridades mexicanas para esclarecer su caso y castigar a los culpables. Por si fuera poco, fue víctima también de amenazas, agresiones y hostigamiento por agentes gubernamentales. Ha estado sujeta a vigilancia. Su vida, la de su hija y la de sus padres han estado en peligro.

Inés

Inés Fernández Ortega, indígena del pueblo me'phaa, fue violada en su casa por varios militares. Eso sucedió el 22 de marzo de 2002 en la comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres.

Ese día, como a las tres de la tarde, 11 soldados se metieron sin permiso al patio de su casa. Ella recuerda que se encontraba en su cocina, preparando agua fresca para sus hijos Noemí, Ana Luz, Colosio y Nérida, cuando vio que ocho de los soldados empezaron a recoger la carne de res que su esposo había tendido sobre unas cuerdas en su patio. En lugar de gritarles que no se robaran la carne, prefirió esconderse en su cocina. Hasta ahí llegaron tres militares, que la encañonaron y la increparon: "¿Dónde fue a robar carne tu marido? ¿Vas a decirnos adónde fue o no

vas a hablar? ¿Ustedes son narcotraficantes?” Inés no pudo contestar nada porque no habla español.

Uno de los militares la agarró de las manos y la tiró al suelo. Fue sometida por la fuerza del militar y por las armas que la encañonaban. Sin que les importara la presencia de sus pequeños hijos (que lloraban al ver a su madre tirada en el piso), un guacho se abalanzó sobre ella para violarla. Los otros dos militares se encargaron de proteger al violador y de correr a los niños.

Noemí, la hija mayor de Inés, dijo que el militar que abusó de su mamá portaba en su uniforme una insignia del 41 Batallón de Infantería. Ella corrió a la casa de su abuelo para refugiarse con sus hermanos. Ante el temor de perder la vida, el abuelo optó por cerrar su casa mientras Inés era ultrajada por los uniformados.

Fortunato Prisciliano, esposo de Inés, pidió el auxilio del comisario municipal para interponer la denuncia. Acudieron también a la oficina de la OPIT para presentar la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la denuncia en el Ministerio Público. La historia de la impunidad se repitió: el Ministerio Público dejó en manos de la justicia militar la investigación del caso.

Desde aquellas fechas fatídicas, Inés sufrió no sólo el ultraje físico, la vergüenza, la burla y la estigmatización al ser tratada como mujer de los guachos, sino que enfrentó amenazas, agresiones

y hostigamiento por agentes que trabajan para el gobierno. Le robaron dos chivos y le mataron uno de sus perros.

Ante la falta de garantías para acceder a la justicia en nuestro país, Inés y Valentina acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determinó remitir los dos casos ante la Corte Interamericana.

Siempre pienso en Inés Fernández. Ella, allá en su comunidad de Barranca Tecuani, que ni siquiera está dentro del pueblo. Su casa está fuera del pueblo, en la entrada, y no hay luz. Su única defensa es una tranca que tiene en el patio. Una tranca que ni siquiera cuenta con una llave o un candado. Una tranca con un palo. Y en su casa hay otra puerta, con otra tranca y otro palo.

Pienso en Inés denunciando al Ejército, enfrentándose a los militares. Pienso en que dijo en público que había sido víctima de tortura sexual. En que lo expresó en diversidad de espacios, en el Ministerio Público, a nivel interamericano, en diferentes foros. Pienso en las amenazas que sufrió. Pienso en que el Ejército fue a amenazar a la comunidad con que iba a proceder contra la gente si seguían denunciando.

En medio de todo esto, pienso cómo Inés no ha sucumbido. Cómo Inés no ha claudicado y se mantiene firme. Sabe los riesgos. Tiene varios hijos pequeños. Sabe que está a la intemperie.

Cuando uno visita a Inés, cuando uno está con Inés, cuando va uno en el camión o en la camio-

neta y regresa por esos caminos tan quebrados, tan llenos de polvo, pienso que ella tiene que caminar desde las dos de la mañana para alcanzar una camioneta que la traiga a Ayutla. Y entonces me digo: “Ella es la que realmente hace que los derechos humanos tengan la fuerza para enfrentar al poder”.

Me coloco como el defensor de los derechos humanos y me digo: “¡Híjoles! Creo que no estoy siendo muy honesto, porque quien es la defensora es Inés. Es ella quien realmente sigue sufriendo, sigue enfrentando las carencias”. Su esposo no tiene trabajo. Ellos viven del campo. Ella carga a su bebé y se va a trabajar al surco. Y me digo: “Ella es Inés la víctima, la sobreviviente de tortura sexual”. Pero la verdad es otra. Ella es Inés, la gran defensora de derechos humanos.

Esa Inés es la que nos ha enseñado a nosotros cómo defender los derechos humanos. Es la maestra, es la sabia. Es el sol de la justicia, en términos de lo que ha sido su fuerza, su testimonio. Pero cuando uno está a lado de ella es, simplemente, la Inés del pueblo me’phaa, con su timidez, con su silencio y con sus pasos acompasados en la Montaña. Camina muchas veces descalza, con poca ropa, para bajar a la ciudad.

Me digo: “Esos son los defensores”. Los compañeros y las compañeras que estamos en el equipo de Tlachinollan estamos tocados por la magia de los derechos humanos. Pero, cuando la vemos a ella y

a gente como ella, decimos: “Ése es el camino que quiero acompañar con esta gente”. Como dijera Juan el Bautista con Jesús: “No soy digno de seguirlo”. Ella y ellos son los verdaderos defensores.

Eso mismo decimos al ver a Valentina, que sufrió tanto, que la persiguieron tanto, que la amenazaron tanto que tuvo que esconderse. Que tenía una niña y sabía que, en lugar de guardar silencio, si no por ella misma, por su niña, tenía que hacer lo que hizo para garantizar su seguridad. Y, a la vuelta de más de 15 años, sigue adelante con sus denuncias.

Como defensor, uno hace sus elucubraciones, sus reflexiones y sus conclusiones. Va, viene y habla sobre los derechos humanos. Pero Inés, Valentina y los demás no van y vienen. Ellas están allí como la roca. Firmes en su lucha por los derechos humanos.

Y ellas y sus luchas son como ese sol que nos alumbra en las montañas en medio de las tinieblas. Ellos son esos soles, esos luceros que nos guían en esta penumbra, en estos baches, en estas trampas en las que fácilmente puedes caer o te pueden tumbar. Los actores estatales y los delincuenciales te pueden tirar con cualquier trampa, en cualquier lugar, en cualquier camino. Más ahora. Pero Inés, Valentina y los demás iluminan el camino.

El fuero militar

Han sido las mujeres indígenas las que han dado la batalla a riesgo de su seguridad y de su vida para romper el muro de la impunidad causada por el fue-

ro militar. Ellas saben lo que significa defender la verdad a costa de sufrir. Han sufrido el escarnio y nunca han obtenido el apoyo de las autoridades mexicanas. Por el contrario, en todo momento les han espetado que eran mentirosas.

Inés y Valentina se transformaron de sobrevivientes de tortura sexual, en defensoras de derechos humanos. La sociedad mexicana sabe que para el pueblo me'phaa son las embajadoras de la verdad.

Su esfuerzo titánico, que se coronó con el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado mexicano de estos hechos detestables, nos proporciona algunas claves para entender el proceso. El reconocimiento de la verdad que alcanzaron contribuye a curar las heridas, a retejer las relaciones rotas, a reivindicar y respetar a las mujeres de los pueblos originarios.

La contribución de Inés y Valentina ha sido excepcional. Su búsqueda de la verdad contribuyó a fortalecer el Estado de derecho y a crear conciencia de que estos hechos nunca más deben repetirse. Las sentencias de la Corte Interamericana, que puntualizan que la adopción de reformas pertinentes para permitir que las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo de impugnación de tal competencia, son paradigmáticas.

Feminicidios

En la Montaña, las mujeres tienen que pelear en asambleas para tener una pequeña parcela donde

sembrar maíz, frijol y calabaza para paliar el hambre. Ellas mismas cargan sobre sus hombros las varas y leños para su fogón. No hay tiempo para el descanso, mucho menos para poder platicar con las demás mujeres que han sido víctimas de la violencia. En la Comisaría no son escuchadas porque los mismos esposos se encargan de bloquearlas y más bien buscan que se realicen acciones para que se les sancione por transgredir la costumbre.

A pesar de que en gran número de comunidades indígenas varias esposas se han atrevido a salir de la comunidad para denunciar la violencia física y psicológica que les infligen sus cónyuges, ese estado de indefensión ha normalizado la violencia contra las mujeres. Lo peor de este esfuerzo es que en la agencia del Ministerio Público no encuentran la protección jurídica para hacer valer sus derechos. Para las autoridades del estado, las mujeres indígenas son seres destinados al sufrimiento y a padecer la violencia ejercida por los hombres.

Florentina Sánchez es una mujer del pueblo me'phaa que sabe que para procrear una hija hay que trabajar duro en el surco, porque en las semanas cuando amamanta a su bebé no hay nadie en la casa que la ayude a preparar su comida. En el piso de tierra tuvo a sus cuatro hijos e hijas, sólo con el auxilio de la partera. Ella ha enfrentado los estragos de la violencia y del abandono de su esposo.

Florentina es monolingüe y tiene 49 años de edad. Nunca imaginó que el 23 de agosto de 2014 se-

ría el último día que vería a su hija, Florencia Sánchez Joaquín.

Florencia conocía en carne propia el viacrucis que enfrentaba con su ex esposo, Marcelino de la Cruz Sánchez, cuando la golpeaba y la amenazaba con matarla. Temía que cumpliera su amenaza. Por eso se refugió en la casa de doña Florentina, su madre. No sólo temía que Marcelino le quitara la vida, sino que también intentara matar a su mamá y a sus hijas.

A pesar de que las autoridades conocían esta situación –y de que doña Florentina había pedido la intervención del comisario–, Marcelino se mostraba engallado porque estaba seguro que la autoridad lo apoyaba.

Cuando llegaba al pueblo donde Florencia vivía, la buscaba para hacerle daño. No le perdonaba haber acudido ante el síndico municipal, que lo obligó a pagar la pensión alimenticia para sus hijas.

El 23 de agosto de 2014 por la tarde, Florencia tuvo que ir a su domicilio para sacar la ropa de sus hijas. Había decidido ya no quedarse sola durante la noche. La lluvia y la crecida del río le impidieron volver a casa de su madre.

Esa noche Marcelino llegó acompañado de amigos. De manera cobarde violaron y mataron a Florencia. En este acto sanguinario, la hija que la acompañaba sobrevivió, envuelta en la cobija a lado de su madre. Este crimen de odio fue denunciado por doña Florentina. Marcelino y quienes participaron en el feminicidio de su hija atentaron contra ella.

Florentina ha tenido que enfrentar tanto a las autoridades de su comunidad como a las mismas autoridades encargadas de investigar estos delitos. Además de ver por sus nietas, de 7 y 5 años de edad, ha dedicado gran parte de su tiempo a exigir justicia contra el feminicida de su hija.

Después de mucho batallar, en mayo de 2017, Florentina logró que Marcelino fuera a la cárcel acusado de feminicidio. Sin embargo, esta acción en favor de su hija le acarreó más peligros. Los cómplices de Marcelino, con el apoyo de sus familiares, buscaron a Florentina para amenazarla.

Su lucha no fue en vano. Florentina pudo vencer en los tribunales a los autores de este feminicidio. Los cómplices de Marcelino huyeron del pueblo. La comunidad les retiró el apoyo y hay órdenes de aprehensión en su contra.

Son las mujeres indígenas como Florentina quienes están empujando para que las leyes que las protegen realmente sean aplicadas por las autoridades. Este feminicidio no se hubiera consumado si las instituciones estuvieran al servicio de la población. En la Montaña, las mujeres han pagado con su vida la inacción del gobierno ante la violencia de los hombres, que se sienten intocables porque tienen el apoyo de las autoridades y creen que pueden acallar el reclamo de justicia de las mujeres.

En la Montaña, a pesar de que se creó el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) y la Ciudad

de las Mujeres en Tlapa, están desprotegidas. Las instituciones siguen alejadas de la realidad violenta. Se mantienen pasivas y, con el peso de su burocracia, esperan a que las mujeres que han sido violentadas en sus comunidades lleguen hasta sus oficinas a pedir auxilio.

A las indígenas les sigue costando mucha sangre y mucho dinero hacer valer sus derechos. Sus voces aún son silenciadas en las asambleas cuando piden justicia. Si bien muchas han ejercido sus derechos como mujeres, es difícil superar los obstáculos que existen tanto en las comunidades como en las instituciones para garantizar su seguridad y poner a salvo sus vidas.

Por desgracia, tiene que haber historias como la de Florentina para hacer visible esta realidad. Tienen que perder la vida o ponerla en riesgo a cada momento para que las autoridades documenten e investiguen los delitos de feminicidio.

Las indígenas siguen siendo crucificadas porque las mismas autoridades se transforman en sus verdugos. Se mofan de ellas, las responsabilizan de su tragedia y las confinan a vivir en la desdicha. Ellas mismas tienen que vencer este suplicio, liberarse de esa cruz para poder desatarse de las leyes que las siguen tratando como objeto y las continúan esclavizando.

Para las mujeres indígenas, morir en la Montaña es morir en el olvido y en la soledad que congela. Es morir en la pobreza, es soportar el desprecio

de autoridades que no toleran la participación de las mujeres que exigen sus derechos.

En los pisos de tierra donde las mujeres dan a luz a sus hijos y donde atizan el fogón para alimentarlos, se gestan sus luchas. A pesar de su fragilidad física, tienen un espíritu indoblegable para parir, desde el vientre materno, la justicia comunitaria.

VII

LA MUERTE TIENE PERMISO

Hacia un Estado delincencial

Fue en 1998. Cuando la Organización de Campesinos Ecológicos de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) decidió detener los camiones de las empresas madereras, se topó con el poder caciquil de Rogaciano Alba y Bernardino Bautista, quienes tenían en el Ejército y la policía ministerial a sus mejores aliados. También estaban ligados al narcotráfico.

Por aquellos años el Ejército se encargó de arrestar y torturar a los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Más adelante, los caciques encarcelaron con falsedades al ecologista Felipe Arriaga. Y el 19 de mayo de 2005, Albertano Peñaloza Domínguez, también miembro de la OCESP, fue víctima de un atentado en el que perdieron la vida dos de sus hijos. La acometida inició el éxodo de decenas de familias de la Sierra.

En los albores del nuevo milenio, la Costa Grande se convirtió en el campo de batalla entre los cárteles de la droga. Los viejos cacicazgos perdieron

su hegemonía y los presidentes municipales en turno optaron por plegarse a los dictados de los nuevos jefes de las plazas. En el Guerrero de la alternancia todo cambió para mal: las autoridades sucumbieron ante la embestida delincriminal y dejaron inerme a la población. Con los años, el modelo de la Sierra y la Costa Grande se extendió a toda la entidad. Es el que priva hoy. En esta simbiosis entre narcotraficantes, judiciales, policías, militares, funcionarios y alcaldes se incubó la calamitosa violencia que hoy azota al pueblo guerrerense.

Para las organizaciones sociales, el realineamiento de amplias franjas del aparato estatal de justicia y seguridad con los intereses del crimen organizado multiplicó los riesgos de la lucha. La mezcla de intereses políticos con delincriminales gestó una alianza perversa para enfrentar a los movimientos sociales.

Raúl Lucas y Manuel Ponce

A raíz de la masacre de El Charco, la situación de Ayutla de los Libres recibió más atención. En un primer momento, eso facilitó que la gente se animara a organizarse. Pero la represión que se desató contra las comunidades con el pretexto del movimiento armado fue muy fuerte. No pudimos documentarla. Las comunidades se volvieron muy herméticas y también muy vulnerables porque el Ejército llegó con todo.

La gente lo ha ido contando poco a poco. Asesinaron selectivamente a líderes. Fueron desca- bezando el movimiento. Consideraban a algunos de los líderes como miembros de la guerrilla. Con tanta represión, la gente se desanimó. Con el reflujo man- tuvieron sólo la resistencia pasiva. Allí no había una organización que, como en el caso de la Montaña, fuera al frente.

En febrero de 2009, Raúl Lucas Lucía y Ma- nuel Ponce Rosas, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, fueron detenidos-desaparecidos por civiles armados y, a los ocho días, encontrados sin vida y con evidentes huellas de tortura.

Raúl Lucas se había librado de la muerte en varias ocasiones. En 1999, poco después de la ma- tanza de El Charco, el Ejército Mexicano lo torturó y amenazó. En septiembre de 2001 nuevamente fue torturado por militares en su comunidad, junto a sus hermanos y cuñado. En octubre de 2006 recibió más amenazas de los soldados. En febrero de 2007 fue he- rido de bala en el cuello durante una emboscada que casi le costó la vida.

Raúl y Manuel eran indígenas mixtecos, gue- rrerenses y pobres. Raúl era presidente de la OIPM y Manuel el secretario. La organización, nacida en 2002 de las comunidades sembradas entre profundas ba- rranas y grandes cerros, tiene su base en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres. Se dedica a defen- der los derechos de los pueblos indios de la región,

a denunciar las violaciones de los derechos humanos que sufren y a gestionar proyectos productivos y de bienestar social para los ñuu savi.

Raúl era oriundo de la comunidad de Roca Colorada. Durante muchos años luchó por el beneficio de las comunidades indígenas. Cuando fue nombrado presidente del comisariado de Coapinola, defendió los bosques contra la tala ilegal de la madera que llevaban a cabo empresas que saqueaban la riqueza forestal sin permiso del comisariado. Con éxito, encabezó la lucha de las comunidades mixtecas de su municipio en contra del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede).

En su momento, Raúl Lucas denunció cómo militares y policías entraron en al menos 20 de las 28 comunidades mixtecas de Ayutla. Contó cómo en los pueblos de La Fátima y Vista Hermosa los soldados llevaban dulces a los niños, pero luego les preguntaban si habían visto guerrilleros o narcos. Explicó cómo en esas incursiones los soldados robaron cultivos de caña. En 2008 hizo públicos cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en poblaciones mixtecas y tlapanecas.

Los asesinatos de Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron parte de esa limpieza contra los liderazgos indígenas, parte de la labor para destruir el tejido comunitario. A Raúl se le vinculó con la lucha armada. Y el hecho mismo de que haya organizado a más

gente para presionar al presidente municipal en turno, dio pie para que el alcalde pidiera el apoyo al jefe de la plaza de Ayutla.

Raúl Lucas y Manuel Ponce nunca imaginaron que organizarse y enfrentar al presidente municipal les iba a costar la vida. No pensaron que, dentro de la recomposición de fuerzas, un poder municipal iba a aliarse con la delincuencia para que se encargara de secuestrarlos, desaparecerlos y ejecutarlos.

Su ejecución fue un momento clave en el cambio del escenario político. La delincuencia empezó a hacer el trabajo sucio de deshacerse de los liderazgos sociales que antes realizaban los agentes militares y policiacos. De esa manera, quienes encargan esos trabajos de limpieza social no tienen que dar cuenta a nadie. Los crímenes de luchadores sociales dejaron de tener costos políticos para las autoridades.

Bonfilio

Este realineamiento entre delincuencia, políticos y caciques se dio mientras el Ejército desempeñaba tareas de seguridad pública, las cuales realizaba cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. El caso del joven nahua Bonfilio Rubio Villegas es un ejemplo de ello.

El 20 de junio de 2009 Bonfilio salió de Tlapa, Guerrero, con la ilusión de cruzar la frontera y trabajar en Nueva York. Cuando subió a un autobús que lo llevaría a la Ciudad de México, nunca imaginó que

en un retén militar el Ejército accionaría sus armas para abatirlo.

El Ejército paró el autobús y bajó a todos los pasajeros; retuvo a un joven porque portaba botas exclusivas del Ejército y le impidió subir a la unidad. El reclamo del operador por esta acción arbitraria puso en alerta a los elementos castrenses. El arranque intempestivo del autobús fue motivo suficiente para que dispararan contra los pasajeros. Una de las balas acabó con la vida de Bonfilio.

Los militares envalentonados siguieron al autobús y, al alcanzarlo, detuvieron al chofer y de nueva cuenta bajaron a todos los pasajeros. En lugar de prestar auxilio a Bonfilio, bajaron con dos paquetes que supuestamente contenían droga. Según ellos, su acción criminal quedaba justificaba por la supuesta huida del chofer. Hasta la fecha no hay ningún militar detenido y las mismas autoridades civiles se supeditaron a la investigación realizada por la Procuraduría de Justicia Militar.

Saga sangrienta

El pacto entre políticos y delincuencia organizada precipitó vertiginosamente la descomposición política y social en Guerrero. Las desapariciones forzadas de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, en diciembre de 2011, se dieron en este marco de impunidad. Esto lo acepta el Estado, pues ha responsabilizado de la autoría material de los hechos a un comandante de la policía ministerial estatal.

Hay que recordar que, por esos días, la misma Procuraduría a la que pertenece esa policía intentó sembrar un arma a un joven para atribuirle la ejecución extrajudicial de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Cuando la compañera Eva Alarcón, de los Campesinos Ecológicos de la Sierra de Petatlán, estaba denunciando la presencia del Ejército y la Marina en la Sierra de Petatlán, fue invitada a participar en una reunión en Acapulco. Ahí estuvimos. Se trataba de acercarse al Ejército y a las organizaciones sociales. Y ella, con esa fuerza y esa decisión que tenía, denunció ahí que le constaba cómo la Marina estaba apoyando a un grupo de narcotráfico en la Sierra de Petatlán. Lo dijo frente a los militares.

No fue la única ocasión en que hizo esa denuncia ante las autoridades. Durante los diálogos en Chapultepec con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ella le entregó una carta al presidente Felipe Calderón. Allí le solicitaba que por favor interviniera, porque había pruebas de que la Marina estaba metida con el narcotráfico.

Lamentablemente no se investigó nada. Y a Eva y a Marcial Bautista los detuvieron y desaparecieron. Tomaron un autobús desde Petatlán para venir a una reunión en la Ciudad de México con Javier Sicilia. En el tramo a Tecpan de Galeana los paró un retén del Ejército. Subió un elemento y preguntó por

Marcial. Ahí iba él, pero nadie dijo nada. Al no encontrar respuesta, el militar se bajó.

Más adelante estaba otro retén de la Policía Ministerial de Tecpan con el grupo de la delincuencia que controla ese municipio y San Luis de la Loma. Le hicieron parada al camión y se subieron. Ya no preguntaron por Marcial porque ya lo conocían. Lo ubicaron y lo bajaron. Eva venía más atrás en el autobús. Gritó: “¿Adónde lo llevan?” No le dijeron nada. Se bajaron con él y ella los siguió. Eso fue el 7 de diciembre de 2011. Desaparecieron Eva y Marcial.

Las investigaciones dicen que se los llevó *El Ganso*, comandante de la policía ministerial de Tecpan, junto con grupos de la delincuencia. Se habla de que los mataron. No se sabe bien cómo fue esa situación. Pero Eva había dado testimonio de que la Marina apoyaba a un grupo del narcotráfico. Y la desaparecieron. Primero pasaron el filtro del Ejército. Después vino el de la delincuencia. Se los llevaron a los dos, a Eva y a Marcial. *El Ganso* está ahora detenido, pero no se sabe dónde están Eva y Marcial.

Las ejecuciones de dirigentes sociales han sido recurrentes. El 31 de mayo de 2012 Fabiola Osorio Bernaldez, defensora del medio ambiente de la organización Guerreros Verdes, fue asesinada en Acapulco. Había mantenido una lucha férrea contra las autoridades del estado, por oponerse a la construcción del muelle de Pie de la Cuesta, a la deforestación de los manglares y al ecocidio de la laguna de Coyuca de Benítez.

En la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, donde la población ha sido víctima de múltiples asesinatos, Juventina Villa abanderó la lucha de las familias desplazadas. Con el apoyo de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, emplazó a las autoridades del estado para que asumieran su responsabilidad. Su clamor se hizo añicos: más de 30 personas armadas la emboscaron con su hijo adolescente Reynaldo Santana el 28 de noviembre de 2012. Contaba con protección policiaca.

En 2012, en Iguala, Arturo Hernández Cardona, líder de la organización campesina Unidad Popular (UP), había mantenido una relación ríspida con la administración municipal del tristemente célebre José Luis Abarca. La animadversión contra Cardona crecía en la medida que hacía visible las amenazas del edil. En este contexto, la UP organizó una protesta el 29 de mayo de este año. Después de concluir el acto, sus integrantes fueron interceptados por un grupo armado que bajó a Arturo y a siete compañeros del vehículo en el que viajaban y se los llevó con rumbo desconocido. El 30 de mayo de 2013 fueron encontrados sin vida los cuerpos de Arturo, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez. El alcalde Abarca participó directamente en sus asesinatos.

Unos meses después fue ejecutada Rocío Mesino Mesino, fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) e incansable denunciante de la masacre de Aguas Blancas. A ella la

mataron cuando buscaba víveres para llevarlos a las comunidades devastadas por las tormentas. Rocío apoyaba la construcción de un puente provisional y gestionó la instalación de un comedor comunitario. Pero un pistolero puso fin a su labor: fue asesinada a quemarropa y a plena luz del día el 19 de octubre.

El 10 de noviembre de 2013 fueron asesinados Luis Olivares Enríquez, dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, y su compañera Ana Lilia Gatica en la colonia Emiliano Zapata de Coyuca de Benítez, también a plena luz del día. Luis había denunciado un poco antes que había sido amenazado, pero no se adoptaron medidas para protegerlo.

Este somero recuento evidencia que en Guerrero la muerte tiene permiso para segar de un tajo las vidas de defensores de derechos humanos, luchadores sociales y activistas. Fue la entidad que cerró 2012 como el estado más violento del país, con municipios que se encuentran entre los más peligrosos de México, como Acapulco. Hoy resulta fácil a los poderosos deshacerse de las voces incómodas y atribuir las ejecuciones al río revuelto de la crisis de seguridad. En el campo de la lucha social guerrerense, la pregunta que angustia es: ¿Quién sigue? En Guerrero, para las autoridades, la muerte tiene permiso.

Guerrero se debate entre la violencia cotidiana y las expresiones de lucha social que hacen frente a los poderes de siempre. ¿Cuál será el resultado de esa pugna?, es una pregunta que en estos días acia-

gos nadie alcanza a responder. Como ha señalado Adolfo Gilly: la “violencia cotidiana pesa como una fuerza de desorganización para intimidar, desmoralizar, paralizar y disolver resistencias y respuestas”. Pero el pueblo guerrerense no se arredra.

El mapa de la delincuencia

Como defensores de derechos humanos le apostamos siempre a la ley, a defender los derechos humanos por encima de todas las cosas; le apostamos a interponer recursos jurídicos o a que el Estado proteja al pueblo. Pero resulta que, a pesar de esta apuesta, nos encontramos con que el Ejército, los policías ministeriales, los policías estatales, trabajan coordinadamente para atentar contra los derechos humanos de la población. Las instituciones de seguridad y justicia han sido capturadas por el crimen organizado.

El mapa de la delincuencia en Guerrero nos muestra cómo se tejió el cacicazgo político con grupos del crimen organizado, fuerzas del orden y empresas. Comparten un interés común: extraer lo más que se pueda el mineral, el agua y la amapola de la zona.

La presencia del Ejército no ha representado una amenaza para el crimen organizado que, en lugar de replegarse, adquiere más fuerza. Lo ha demostrado con el despliegue que realiza para ampliar su presencia en otros territorios. Las mismas autoridades saben cómo se multiplican y reposicionan estos grupos a lo largo y ancho del estado. Tienen

conocimiento de quiénes ejercen el liderazgo y cómo es su *modus operandi*; sin embargo, dejan que los grupos ejerzan justicia por mano propia. En esta disputa, varios agentes del Estado se confabulan con estos grupos para afianzar su poder.

La cartografía oficial ubica en la región de la Sierra al cártel del Sur, al Comando Suicida, a los Rojos y a los Ardillos. En la zona norte han asumido el control de la región Guerrero Unidos, la Familia Michoacana, Gente Nueva y los Rojos. En la Tierra Caliente se sabe que están asentados los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, los Tequileros y el cártel Jalisco Nueva Generación. En el corredor de la Costa Grande hay una disputa férrea por el control territorial entre el cártel Jalisco Nueva Generación, los Granados, los Caballeros Templarios, la Guardia Guerrerense y Sangre Nueva Guerrerense. En la región indígena de la Montaña Alta, los Rojos y los Ardillos aparecen como los principales grupos que se han asentado en varios municipios. La franja de la Costa Chica, que abarca parte de la zona montañosa, está en disputa por los restos de los Beltrán Leyva, los Añorve, los Carrillo y los Marín. El puerto de Acapulco se ha transformado en una de las ciudades más violentas del país por la lucha encarnizada que libran el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) y los Beltrán Leyva, que han demostrado tener presencia en varias colonias y enclaves turísticos, gracias al contubernio que existe con elementos de varias corporaciones policiales.

En la Montaña se encuentran los municipios más pobres de Guerrero: Metlatónoc y Cochoapa el Grande. Desde la Montaña y la Sierra la goma fluye hasta Nueva York y Chicago. Cruzan no sólo estupefacientes, sino armas y millones de dólares. Quienes procesan la droga y la trasladan desde los municipios más pobres hasta Nueva York no son los campesinos de la Montaña. No son ellos los que hacen el negocio. El negocio lo hacen gentes con poder político. Y no solamente los presidentes municipales, que son los mozos de la delincuencia, sino políticos importantes y los guachos del más alto nivel. Quienes se llevan los 3 mil millones de dólares que genera la droga en Guerrero no son quienes siembran la amapola.

A la hora de llevar casos empezamos a descubrir, poco a poco, que había un monstruo dentro de las instituciones. Ese monstruo antes era el de la mordida y la tranza. Pero ahora es el del narcotráfico.

Hace 20 años sabíamos que en Tlapa una plaza de comandante de policía ministerial costaba 20 mil pesos. Los comandantes decían: “yo compré la plaza por 20 mil pesos”. ¿Cuánto costaba una plaza en Acapulco, Zihuatanejo, Taxco o Chilpancingo, si en Tlapa, que es una población que no tiene mucho movimiento económico, costaba 20 mil pesos? Ahora estamos hablando de las macro plazas, de la macro criminalidad y del negocio del trasiego de la droga hacia Estados Unidos. ¿Cuánto valen ahora esas plazas?

VIII LA CRAC-PC

Darse seguridad

En la región ha habido mucha efervescencia social y política. Aquí se dieron movimientos armados dirigidos por Genaro Vázquez. También se formaron organizaciones productivas que hasta la fecha existen, como La Unión de Ejidos Luz de la Montaña. Todo este sustrato organizativo ayudó a que Tlachinollan empezara a construir una relación más estratégica entre los pueblos de la región.

Fue muy importante para nosotros tener el apoyo de sacerdotes progresistas de la diócesis de Tlapa. Había sacerdotes indígenas que reivindicaban su pertenencia a un pueblo originario. Ellos se comprometieron con la Teología de la Liberación y la Teología india.

Fue también relevante el trabajo que hicieron previamente jóvenes del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena. Muchas comunidades de la Costa-Montaña participaron.

En esta labor ayudó bastante el compañero y amigo Mario Campos Hernández, sacerdote. Como

ya comenté, fuimos compañeros en el seminario. Él tuvo una conversión porque se había formado en el Palafoxiano de Puebla. Traía una visión muy conservadora del trabajo pastoral, muy metida en la línea dogmática. Pero cuando se fue a las comunidades y empezó a reencontrarse con su gente, recuperó la lengua materna. Él es ñuu savi y comenzó a hablarlo.

Cuando lo cambian a la comunidad de El Rincón desarrolla plenamente su capacidad de inserción comunitaria, de identidad con las luchas. Con él allí se logró tejer con mayor colorido ese telar de relaciones que ya existían con estas organizaciones, con esas historias de resistencia. Él fue el que ayudó a conjuntar estos esfuerzos y promovió lo que llamamos “asambleas regionales”. Su parroquia estaba vinculada a muchas comunidades.

El hecho de que un sacerdote convocara a las comunidades fue algo inédito en la región. Trabajamos con él en un diagnóstico sobre las necesidades más urgentes de los pueblos de la Costa-Montaña. De allí salió la idea de pelear porque se construyera la carretera Tlapa-Marquelia. Fueron los precursores de esta lucha. Desde entonces se empezó a empujar esta demanda.

Era un sueño el que se pudiera comunicar la Montaña con la Costa a través de una carretera. Eso ayudaría a unir más a los pueblos. Haría más fácil cruzar la escarpada montaña que mucha gente caminó. O más bien, sufrió. Porque recorrer las hondonadas, las barrancas, los cerros, las cimas, los caminos

reales, implicaba un gran esfuerzo. La demanda de la carretera le dio presencia a Mario Campos.

Con él se empezó a analizar el problema de la inseguridad. Estamos hablando de los años 1992-1993. Empezaba a haber muchos grupos de la delincuencia común que asaltaban, violaban, dañaban el patrimonio familiar. Robaban el dinero de los que vendían el café. Eso se empezó a reflexionar en la comunidad.

Nosotros los acompañamos desde que empezaron a hacer estas reflexiones. A pesar de estar allí con ellos y discutir y ver los problemas del nulo funcionamiento del sistema de justicia, de que los ministerios públicos no hacían caso, de que los policías ministeriales extorsionaban, no teníamos respuestas más allá de los esquemas típicos de los defensores de derechos humanos.

La gente nos preguntaba: “¿Cómo le hacemos? Fíjate que violaron sexualmente a unas estudiantes”. Nosotros les respondíamos que íbamos a poner una denuncia, o una queja si es una autoridad. Para la gente, ese esquema era insuficiente. Nos contestaban: “Oyes, eso no nos ayuda”.

Con la Policía Comunitaria dieron el salto. Recuperaron su sistema de justicia. Se preguntaron a sí mismos y me preguntaron a mí: “¿Cómo es que nuestros abuelos enfrentaron estos problemas? Porque con el sistema de justicia y el Estado nos amarraron las manos. No nos permite hacer nuestro propio trabajo como comunidad”.

Mi contestación fue: “Ustedes son capaces de formular sistemas de justicia, porque son pueblo, tienen territorio, tienen una cosmovisión. De todo eso pueden tener un fruto, el fruto de la justicia comunitaria”.

De allí nació la pregunta: “¿Cómo le hicieron nuestros abuelos para hacer justicia, para garantizar seguridad?” La respuesta vino de los ancianos y los principales, a través de sus testimonios. Ellos recordaron: “Los pueblos mismos tenían sus propias instituciones. Los sabios daban los consejos y reeducaban a los jóvenes o a cualquier ciudadano mayor. Las autoridades que procuraban y administraban justicia tenían sus lugares para castigar. Había cárceles, sanciones, trabajo comunitario. Se hacía justicia pública en asambleas, se llevaba a la persona que se acusaba, había careos públicos, se hacían los señalamientos”.

Eso es lo que prefiguró lo que hoy es el gran modelo de lo que llamamos la Policía Comunitaria. No se trataba de una policía indígena, sino de una policía comunitaria. La llamaron comunitaria porque era representativa de la vida en comunidad. En la comunidad puede haber familias indígenas y mestizas que se rigen por un sistema normativo tradicional. Hay un gobierno indígena, una estructura de la autoridad tradicional y una norma que regula los comportamientos, incluidas las normas rituales.

Eso dio pie para que la Policía Comunitaria lograra tener un terreno fértil donde naciera con mu-

cha fuerza. Tanto en el proceso de su fundación como en su nacimiento estuvimos con el padre Mario. Íbamos a las reuniones, asambleas, a los cerros. Porque se trataba de formar comunidad participando en los rituales de petición de lluvia.

Íbamos con la gente a esperar el Año Nuevo en el cerro de Nixtamal, en Santa Cruz del Rincón. Era una fiesta con danzas. Fue muy significativo este acompañamiento. Fue una preparación del nacimiento de algo tan importante como es la Policía Comunitaria. Fue un acompañamiento desde antes de que naciera.

Ahora que el proyecto ha crecido lo seguimos acompañando como asesores, como compañeros de lucha. Respetamos y aprendemos de ellos, desde su sistema normativo hasta su derecho indígena. Los hemos apoyado para liberar a sus presos, para pelear frente a las autoridades, para impulsar una reforma constitucional que reconozca plenamente sus derechos.

Todo eso ha sido enriquecedor. Nosotros encontramos allí el otro derecho. Sin la Policía Comunitaria no tuviéramos la fuerza, la experiencia de lo que es el otro derecho. El derecho de los pueblos, el derecho a ser diferente, el derecho a construir desde la comunidad una cultura que ha dado vida a la Montaña. Ese otro derecho es lo que nos ha hecho a nosotros defensores comunitarios y defensoras de los pueblos de la Montaña. Hemos mamado de ese otro derecho, nos hemos nutrido de ese otro derecho.

En el centro de este proceso está la experiencia grata, magistral de la Policía Comunitaria. Es un baluarte para los pueblos. Es una luz que da esperanza de cómo construir la seguridad desde lo local, desde lo que llamamos la policía de la proximidad.

Qué mejor ejemplo que la Policía Comunitaria. Es desde aquí donde se debe nutrir el modelo que se quiere formar de policías que den confianza a la gente. Deben aprender cómo se forja el policía en la comunidad, cómo nace el policía en el seno comunitario de la asamblea, cómo tiene que rendir cuentas a los mayores, cómo no puede abusar de la confianza que le da la gente. Debe aprender todos esos valores y principios.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) abrió el horizonte y dio perspectiva a la lucha contra la inseguridad de los pueblos de la Costa-Montaña. Trazó el camino de los mismos pueblos, que por siglos han practicado un sistema de justicia que está cimentado en la asamblea y cuya seguridad descansa en los servidores del pueblo, que son nombrados por su prestigio y lealtad a su gente. Quienes la integran se forman como ciudadanos adscritos a un pueblo indígena. Aprenden a obedecer a sus superiores, que son los de la CRAC, a entender los códigos que se manejan en las asambleas y a comprender la ética comunitaria.

Desde hace más de dos décadas funciona este modelo de justicia comunitaria, que tiene como

funciones principales la implementación de acciones preventivas, la ejecución de órdenes de aprehensión y el proceso de reeducación contra los detenidos.

Nosotros compartimos ese proceso. Fue una grata experiencia apoyarlos en la redacción de su reglamento, en la conformación de la estructura de las Casas de Justicia. Todo ha sido muy valioso para quienes formamos parte de este proyecto de la CRAC.

La Policía Comunitaria y las drogas

Hace como 10 años, la Policía Comunitaria de Zitlaltepec detuvo por casualidad a una camioneta viejita con cuatro pasajeros. No eran de la región. Los bajaron del vehículo y lo inspeccionaron. Encontraron que llevaban 600 kilos de mariguana bien empacada. Venía de Metlatónoc, el segundo municipio más pobre del país, e iba rumbo a Estados Unidos.

¿Qué hizo la Policía Comunitaria con el cargamento? Hubo una discusión en Paraje Montero, en el marco de un aniversario de la CRAC. Ahí los consejeros y consejeras se preguntaron: “¿Qué hacemos ante esto?” Unos decían: “¿Sabes qué? Eso no nos toca, eso es del gobierno; eso que lo arregle el gobierno, déjenlo ahí”.

Otros opinaban: “¿Cómo no nos vamos a meter? Está en nuestro territorio. Tenemos que ver qué está pasando. Si cerramos los ojos y dejamos que pase lo que sea, que cruce lo que sea, nuestro territorio

va a servir a los grandes capitales para que otros, aprovechándose de nuestra pobreza, se hagan ricos”.

A final de cuentas, en esta discusión se determinó que la Policía Comunitaria le iba a entrar al asunto. Fue una decisión que no estaba prevista en su reglamento. Quienes preferían que no se hiciera nada argumentaron: “No dice el reglamento que le debemos entrar a los problemas de la delincuencia organizada y el tema del narcotráfico”. Sin embargo, los consejeros y principales dijeron: “Le tenemos que entrar”.

Hubo una asamblea en El Rincón. Ahí llevaron a las cuatro personas que transportaban esa droga. Los coordinadores de la Policía Comunitaria tuvieron que explicar qué había pasado. “A tal hora –dijeron–, paramos esta camioneta y bajamos a estos compañeros. Estos son los 600 kilos de mariguana que les quitamos. Ahora, ustedes decidan qué vamos a hacer.”

La comunidad llamó no sólo a los detenidos, sino a la familia. En la región lo que hacen es llamar a la familia –no a los abogados–, y decirle: “Están acusados de esto, ¿qué pasó?” La asamblea pidió a los detenidos su versión de los hechos. Ellos se defendieron: “Es que no sabíamos lo que llevábamos”. Uno venía del Estado de México.

A esa asamblea llegó el secretario de Seguridad Pública del estado con dos cuatrimotos y una camioneta. Les ofreció: “Por parte del gobierno del estado reconocemos que ustedes están contribuyendo a la seguridad. En apoyo a su sistema de justicia aquí

está una cuatrimoto para la Casa de Justicia de Zitlaltepec, otra cuatrimoto para la Casa de Justicia de Espino Blanco y una camioneta para San Luis Acatlán". Pero luego puso sus condiciones para entregarlas: "Yo diría que los presos que están aquí los turnen a la Procuraduría General de la República. Y que la droga sea llevada para que la quemem el Ejército".

La comunidad lo mandó por un tubo. "Deja la camioneta, deja las cuatrimotos y te puedes ir. No te vamos a entregar nada. Ni para ti ni para mí. Ahí que se queden porque nosotros sí quemamos todo", le respondieron.

La asamblea determinó: "Aunque no esté en el reglamento, nos toca a nosotros tomar la decisión. Esta asamblea dice que se procese a los compañeros y que la Policía Comunitaria quemem la droga".

Así que se quemaron los 600 kilos de marihuana. ¿Cuánto costaría eso en Nueva York? No sabemos. Pero fue sorprendente cómo en estos rincones de nuestro país, que han sido abandonados por el Estado, la delincuencia se los ha ido apropiando vía enervantes, vía el trasiego y la comercialización de la droga. Sin embargo, los pueblos mantienen incólume un sistema de seguridad ejemplar, que no se agrieta ante la embestida delincencial.

Los pueblos y la inseguridad

Los pueblos no solamente preguntan, sino que actúan. Por algo, ahí donde ha sido muy fuerte la mili-

tarización, se han dado experiencias como las de las policías comunitarias. Algo que podemos rescatar de ellas son las asambleas regionales, las asambleas micro regionales, las asambleas comunitarias. Allí está la clave de su fortaleza. También está en el control de las comunidades hacia sus policías, el conocimiento de quiénes son, el control de un territorio.

El sistema de justicia de la CRAC no solamente vela por la seguridad, sino también porque haya investigación y sanción. Busca que se detenga a quienes han cometido delitos y se les inserte en un proceso de reeducación comunitaria. La clave de esta reeducación es el trabajo comunitario, las pláticas con los ancianos, con los principales, y la rotación en las comunidades para dar este servicio. Esto ha servido mucho para poder contener a los grupos delincuenciales.

En la lucha contra la inseguridad han surgido también otras expresiones, como las autodefensas. Buscan contener a la delincuencia, capturar a los jefes del narco en las comunidades. Eso le ha funcionado muy bien a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se formó originalmente en la región de la Costa-Montaña, para dar respuesta a otras necesidades más allá de la seguridad. Sin embargo, se vieron obligados a formar sus cuerpos de policías con los comisarios y a identificar el modus operandi de la delincuencia.

La historia de su surgimiento es muy interesante. El sábado 5 de enero de 2013 en la noche, Eu-

sebio Alvarado García, comisario de Rancho Nuevo, municipio de Tecoaapa, fue interceptado en su domicilio por miembros de la delincuencia organizada.

Eusebio recién llegaba a su casa con la noticia de haber sido elegido segundo comandante del grupo de autodefensa promovido por la UPOEG. Esa tarde se había realizado una asamblea regional de autoridades comunitarias en El Potrero, perteneciente a Tecoaapa, donde estuvieron representantes de los municipios de Cuautepec, San Marcos, Cruz Grande y Ayutla. Días antes habían planeado acciones conjuntas para hacer frente a la delincuencia. Tenían pruebas de que las policías municipales y ministeriales apoyaban al Cholo, uno de los líderes más peligrosos de la Costa Chica. En la asamblea tomaron la decisión de formar varios grupos de policías con sus respectivos comandantes.

La desaparición del comisario de Rancho Nuevo puso a prueba el valor y la decisión del nuevo cuerpo de seguridad. En menos de 5 horas dieron con el paradero de Eusebio. Este operativo levantó el ánimo de las comunidades, que, sin temor a nada, decidieron tomar en sus manos la seguridad de la cabecera municipal de Ayutla. El mismo domingo 6 de enero llegaron 800 policías ciudadanos para dismantelar la estructura delincriminal y detener a 54 elementos que trabajaban para el *Cholo*.

Su experiencia es muy relevante. Ellos mapean bien cómo funciona el grupo delincriminal. Ubican las casas de seguridad y a los jefes. Y con esa

información hacen operativos, en los que les caen a los delincuentes y los detienen. Eso les ha funcionado. Sin embargo, no hay un control de estos compañeros. Son ellos, como grupo armado, los que toman las decisiones de qué operaciones van a hacer. Esto provoca que a veces se imponga más el uso de la fuerza que el trabajo organizativo de la comunidad.

La UPOEG ha sido un ejemplo de resistencia, que logró articularse con otros pueblos de regiones más allá de las comunidades en las que surgió. Su labor ha sido muy importante en la Costa Chica, sobre todo en los municipios que están en el corredor que va de El Ocotito hacia Cruz Grande.

En ese corredor hay retenes. Primero eran de la UPOEG, después de la Policía Comunitaria y luego del Ejército. ¿Cómo esta diversidad de actores armados está actuando en un solo territorio? Cada quien lo hace con sus propias formas de control del territorio, con sus normas. Pero lo curioso es que hay varios filtros. Y ahí está la Sierra del Ocotito, que es por donde baja la droga tanto de la Sierra como de la Costa Grande y de la Montaña.

La proliferación de actores armados de distintas vertientes no sólo busca garantizar la seguridad; algunos buscan tener el control del trasiego de droga. Chilapa es un ejemplo trágico de esta situación. Ahí está el Ejército y la Policía Federal, pero cada día se asesina alguna persona. Hay retenes en las entradas de Chilapa, pero en el interior de la cabecera tanto

los Rojos como los Ardillos tienen sus casas de seguridad y sus grupos que consuman asesinatos. Algunos lo interpretan como que unos son de un partido y otros de otro partido. Unos pertenecen al PRD y otros al PRI.

Esta imbricación entre grupos de la delincuencia y partidos políticos está generando mucha violencia. Chilapa es uno de los distritos con mayor número de electores a nivel nacional. El municipio es la boca de la Montaña Alta y un lugar estratégico de la Montaña Baja. Y en su interior hay una disputa simultánea por votos, por droga y por todos los giros económicos que hay alrededor de esta economía criminal. Curiosamente, allí está el Ejército, según para poner orden.

En Chilapa han matado a candidatos, a precandidatos y a precandidatas. Han asesinado a dirigentes de organizaciones sociales, como el compañero Ranferi Hernández. Han ejecutado a maestros. Han matado a taxistas porque también hay una guerra por las rutas. Agarran a los choferes, los asesinan y queman las unidades. De esta manera evitan que la droga que llega al municipio pueda salir de allí.

La situación en el municipio se ha vuelto muy complicada. El transporte público se ha involucrado en la guerra de bandas delincuenciales. Las escuelas cierran sus puertas. Los comercios no abren. Los campesinos no quieren salir a sus parcelas. La vida cotidiana se ha suspendido por el control que tienen

sobre este lugar los grupos de la delincuencia. En los hechos, los presidentes municipales aparecen como los representantes de alguna de estas expresiones del crimen organizado.

Ésa es la complejidad del momento que vivimos. Y a ello han logrado responder los pueblos de la Costa-Montaña. Lo han hecho como Policía Comunitaria o como autodefensas. Sin embargo, en Chilapa los grupos de la delincuencia se han presentado en algunas ocasiones como si fueran Policía Comunitaria.

No es el único lugar. El narcotráfico está armando sus “policías comunitarias”. Expresiones similares han aparecido también en Tierra Caliente, en la región del Balsas, en la parte de la Sierra de Chichihualco. Nada tienen que ver con el proceso comunitario ni con las asambleas. Son los delincuentes, que dicen: “Vamos a armar a este grupo; cómprenle sus playeras, ármenlos y que sea ahora la Policía Comunitaria la que controla la entrada del pueblo”. Esto ha provocado que el gobierno descalifique el trabajo legal de las policías comunitarias que se apegan al proyecto histórico de este sistema. El Ejército exige que no haya Policía Comunitaria ni autodefensas. Asegura que son criminales. Es un gran riesgo, porque se quieren cortar de tajo expresiones legales y legítimas de los pueblos, cuya raíz son sus derechos colectivos.

Así que la situación se ha vuelto más difícil. El gobierno estatal, junto con la Legislatura pasada, le quitó a la CRAC-PC el reconocimiento legal que te-

nía como autoridad que procura justicia. Le quitaron todas sus facultades para procurar justicia, investigar, detener, reeducar. Reformaron la Ley 701 y sacaron de ella todo lo que tiene que ver con la CRAC.

De cualquier manera, se está reactivando un movimiento de las cinco Casas de Justicia de la CRAC-PC para volver a presentar la propuesta, que ya se tenía como pueblos, de que se reconozca a la CRAC como una instancia que procura justicia y seguridad. Se está peleando a contracorriente para echar abajo esa contrarreforma. Se está trabajando con algunos diputados locales. Lo más interesante de este movimiento es que los pueblos han construido varios frentes para dar la batalla a nivel nacional y estatal. Son lecciones que nos obligan a redoblar esfuerzos para responder a estos grandes desafíos.

IX EL MAÍZ BOLA

El pretexto perfecto

La militarización no cesa con el paso de los años. La Montaña es una región pobre donde se siembra amapola. Estas siembras son el pretexto perfecto para que el Ejército entre al territorio. Desde este punto de vista, el combate contra la amapola forma parte de la contrainsurgencia porque se vuelve una buena excusa para colocar a la comunidad fuera de la legalidad.

Cuando empezamos a documentar los casos de los problemas provocados por la militarización, enviábamos al Ejército informes por escrito sobre lo sucedido. Después de que se construyó el cuartel y se instaló el batallón en Tlapa, hablábamos con algún mando militar. A veces se llegaba a un arreglo.

En una ocasión les comunicamos que los soldados habían estado en un lugar en Metlatónoc y habían quemado el bosque. La gente fue a quejarse con nosotros. “El Ejército llegó a la comunidad –nos contaron–. Estuvo allí acampando. Usaron la leña que te-

níamos cortada. Prepararon sus alimentos, dejaron la lumbre y se fueron. Hubo una quemazón.” Hicimos llegar a los militares esa demanda de manera económica. Respondieron que iban a indemnizarlos.

Este precedente sirvió para que después el Ejército nos reclamara a nosotros. Argumentaban que no podían hacer nada cuando iban a las comunidades. “Tenemos que llevar hasta nuestro tanque de gas, nuestra estufa, porque luego nos acusan de que quemamos hasta el bosque”, lamentaron.

Cuando presentábamos esas quejas, el Ejército y el Ministerio Público nos respondían: “Todo eso que les dice la gente, es porque nosotros hacemos presencia en una comunidad y no les gusta que estemos, porque detectamos que hay droga. Sus acusaciones son para desprestigiarnos. Les dicen que estamos quemando el bosque, que estamos robando el agua, que estamos molestando a la gente, porque siembran amapola”. Siempre el tema era la amapola.

Replicaban lo mismo en casos de municipios donde no se sembraba amapola. Así lo notamos en la región de Ayutla. Aunque ahora el cultivo se ha ido extendiendo allí, hace años no había sembradíos de amapola. Las mismas comisiones de las comunidades decían: “Vengan a ver”.

Sin embargo, con el paso del tiempo observamos que, de repente, aparecía sembrada la amapola donde la gente no la había sembrado. Se trataba de una acción del Ejército, que comenzó a promover su

cultivo. En algunos lugares hablaban con la gente para que las comunidades la sembraran.

No era lo único que hacían. También acordaban que, durante los operativos de erradicación donde había amapola, comunidades y soldados se deshicieran sólo de una parte de estas siembras. Llegaban los soldados y les decían: “¿Saben qué? Venimos a esto”. La gente les pedía que no cortaran. Y los militares se arreglaban: “Bueno, dígnosnos qué parte cortamos y qué parte no, pero tenemos que cortar”. Cortaban una parte y dejaban otra. La gente les daba su pago: les preparaba su barbacoa de chivo y comían.

El Ejército usaba el pretexto de la siembra de amapola como parte de una estrategia de incursión en los territorios indígenas. Utilizaba a su conveniencia la siembra y la negociación de la erradicación de la planta.

En respuesta a la militarización, las comunidades en Ayutla se organizaron en la OPIM. Los militares estuvieron un buen tiempo en la parte alta de Ayutla, en la región me’phaa. Las mujeres enfrentaron los abusos de los soldados. Dijeron ¡Ya basta! Lo hacían porque “han cortado nuestras mangueras, porque nos molestan cuando vamos en el camino; porque nos piden que les enseñemos qué llevamos en el morral y porque no nos dejan”. Se organizaron y les dijeron a los militares que se fueran y se llevaran todas sus cosas. Lo lograron: se fueron.

Hay hasta un video de cómo lograron sacar al Ejército. Lo grabaron ellas. Los corrieron. Los sa-

caron caminando como unos 40 minutos. Les advirtieron: “Se van a ir de acá. No hay motivo para que estén acá. Aquí no hay nada. Si dicen que hay droga, ¿dónde está? Y si no hay droga, ¿por qué están acá?” Su argumento más contundente fue demostrar que en sus territorios no había droga.

Pero el Ejército aseguraba que las denuncias en su contra eran justo las opuestas. Según ellos, la gente no quería que la molestaran porque les estaban cortando sus sembradíos.

Sin embargo, llegó un momento en que ese señalamiento de los militares se volvió real. Hubo personas que nos solicitaron que el Ejército se fuera de su comunidad. Nosotros les dijimos a los militares que había una queja en su contra. Ellos nos invitaron a acompañarlos para verificarla. Tenían claro que había una siembra grande.

Allá fueron compañeros de nuestra oficina con una comisión de uniformados. En un primer momento, la gente les mostró el lugar donde estaba el campamento militar y donde los soldados agarraban agua y cortaban la manguera. Nos señalaron dos o tres cosas. Se quejaron: “Nos han detenido. Nos han interrogado. Han venido aquí a la comisaría”. El Ejército lo aceptó, pero después pidió a nuestros compañeros que los acompañaran arriba. La comunidad no dijo nada. Subieron el cerro y se encontraron con que estaba lleno de amapola.

Con la evidencia, los soldados le dijeron a nuestra comisión: “Ésta es la razón por la que la

comunidad nos está acusando. No quieren que acabemos con este sembradío. Queremos que ustedes tomen en cuenta las razones por las que estamos afectándolos a ellos”.

El tlacololero

En estos 25 años de Tlachinollan ha habido muchos cambios en la siembra de amapola en la región. Aunque siempre ha sido una siembra precaria, al principio era más bien esporádica. Los terrenos de la Montaña no permiten extenderse tanto. Lo que se acostumbra es la siembra del tlacolol; es decir, la familia que se arriesga siembra maíz en, más o menos, un cuarto de hectárea.

El tlacolol es una porción de tierra situada en la ladera de algún cerro. El tlacololero es el campesino que siembra en ella. Esas siembras de amapola son riesgosas, clandestinas y precarias; se realizan en una situación de extrema vulnerabilidad. Quienes se atreven, trabajan en la barranca, donde hay agua, porque si no hay infraestructura hidráulica no se da. Tienen que ver dónde está el manantial o dónde fluye el agua por gravedad, para poder llevarla con un rollo de manguera de 100 o 200 metros, y regar con ella. Deben hacerlo casi en la noche.

La semilla llegó a la Montaña hace muchos años. Recuerdo que mi mamá me decía que en el Seminario de Chilapa, a un lado de la alberca, había plantas de amapola. Cuando ella era chica veía la

amapola. Es una flor muy hermosa. Era una planta de ornato. La cortaban y la ponían en el altar.

En aquel entonces no se sabía lo que podía hacerse con el rayado del bulbo. Entiendo que en las migraciones internas a la Costa Grande y la Sierra de Guerrero, y después a Sinaloa, fue donde la gente aprendió a hacerlo. Llegaron personas de otros estados a la región para promover su cultivo. No faltaron algunos elementos del Ejército que fomentaron esa siembra. Su producción se fue extendiendo, al grado de que la economía de municipios como Metlatónoc, Cochoapa y Acatepec dependen de la flor de amapola o de la goma.

Quienes la cultivan son campesinos pobres. Ellos mismos han aprendido a procesarla. Lo hacen en laboratorios clandestinos muy rústicos, muy rudimentarios. Consisten en cubetas y tinas con mezclas de cosas muy básicas. La gente se las ingenia. Personas de otros estados capacitan a los de Guerrero y luego se van. Hace más de 25 años, antes de que surgiera Tlachinollan, el Ejército y la Policía desmantelaron un laboratorio rústico en la colonia Benito Juárez, de Tlapa.

Las siembras de amapola son siembras de la pobreza; son siembras de una economía quebrada por la miseria, que se practica en las barrancas. En algunas comunidades decidieron sembrarla después de una discusión interna. “La situación está tan grave -argumentaban- que el que quiera, que siembre.

Pero eso sí, si hay problemas con el gobierno –como le dicen al Ejército–, ése es un problema de la persona. Se arriesga por su cuenta.” La comunidad da la autorización, pero no se hace responsable.

En otros casos ha habido un acuerpamiento comunitario. Pactan en secreto con la autoridad local. “Vamos a sembrar –establecen–, pero aquí nadie dice nada. Si llegan a venir, vamos a tener que decirles que se vayan o negociar.”

Hay diversas maneras de negociar con el Ejército. A veces de manera individual, a veces como comunidad.

Lo primero que sucedió con estas siembras fue que el Ejército empezó a detener a la gente. Arrestaba a los que encontraba en las siembras. Se dieron casos como el de Zopilotepec, municipio de Atlixac. El Ejército interceptó a dos matrimonios que venían de su siembra de maíz, pero pasaban por un cultivo de amapola. Los detuvieron. Los soldados amarraron a los esposos y violaron a las esposas. Se presentó una denuncia que no prosperó. Los esposos tuvieron miedo porque el Ejército les había advertido que los encarcelarían en Chilpancingo.

Hechos de este tipo construyeron un imaginario. Los campesinos se asumen culpables y, como tales, indefensos. Su lógica es que el Ejército les diga: “Te encontramos con las manos en la masa. Te encontramos en el lugar donde había amapola. Eres culpable. Si quieres que no prospere la denuncia, tienes que guardar silencio de lo que te hagamos a ti y a tu familia”.

Al principio, la gente decía que no podía hacer nada porque “el gobierno viene, se mete, destruye nuestros cultivos, nos detiene si estamos allí”. Y sí, se los llevaban a la cárcel y arremetían contra las mujeres. Era el terror.

Posteriormente, cuando se empezaron a presentar estas denuncias y comenzó a evidenciarse la criminalización de los indígenas, señalándolos como si ellos fueran los capos, la autoridad cambió de estrategia: se abocó a la destrucción de los cultivos sin detener a las personas. La excepción era si veían que alguna persona estaba armada. Entonces había una acción inmediata para investigar quién era.

Xalpatláhuac

El cultivo de la amapola se ha ido extendiendo durante estos 25 años. Si antes se decía que la Montaña era Roja por la lucha del maestro Othón Salazar y por el Partido Comunista Mexicano, ahora pasó a llamarse la Montaña Roja por la Amapola, es decir por el maíz bola, como la gente lo conoce.

La amapola es un maíz bola. Es decir, es el maíz rojo, el maíz que no es el grano, pero es la bola, y les da de comer. Para ellos es maíz. Y le rezan a San Marcos, que es la deidad, la potencia de la lluvia, la potencia que trae los frutos nuevos, para que llegue la amapola.

Xalpatláhuac es el santuario más grande de la Montaña, donde se venera el Santo Entierro. Las fiestas más grandes en la Montaña son las de los cristos muer-

tos, los cristos crucificados. Se veneran en los viernes santos de la Cuaresma. En esta temporada de secas es cuando irrumpe el hambre, que también está ritualizada. Se trata de todo un sistema de fiestas que preparan la siembra del maíz, con San Marcos en el centro.

Hay un mito náhuatl que cuenta que *el hambre entra el domingo de carnaval*, cuando la gente está en la fiesta. Para ellos, el diablo es el hambre. Mientras para el catolicismo el diablo personifica el mal que se expresa en el comportamiento individual, en la comunidad es un personaje que daña a todos. Los daña, no en el sentido moral, sino en el material. La gente empieza a sentir el daño demoniaco con la escasez de alimentos. Come, pero no se llena. Hay una sensación de insatisfacción a la hora de probar los alimentos.

Hay, además, toda una serie de fiestas propiciatorias para pedir el agua, tanto de ritual prehispánico como católico. En la Montaña, los santos, los cristos muertos, son una resemantización de los San Marcos, de las deidades del maíz, de las deidades del agua.

El tercer viernes es el viernes de los pueblos de la Montaña. Al santuario de Xalpatláhuac llega gente de todos lados. Aparte de ir a ver al Santo Entierro, suben al cerro de San Marcos. Van a ver su suerte. Al subir al cerro rascan la tierra, y al rascarla encuentran su suerte. Puede ser un grano de maíz, una semilla de frijol, un pelo de chivo, un pelo de marrano. Entonces la gente dice: "Te va a ir bien, vas a tener maíz, vas a tener chivos, vas a tener marra-

nos". Es la suerte. La buena suerte es San Marcos. Es el que te da la riqueza y al que se le puede pedir.

Simbólicamente, la gente ha encontrado supervivencia en esos espacios sagrados. Curiosamente, en estos últimos años también encuentran semillas de amapola, corcholatas de la Corona y de Coca Cola, tela de un vestido. En un principio, la gente tenía una idea esencialmente agrícola de la suerte, pero ahora la idea ya no es tan agrícola. Es una idea de los tiempos del nuevo comercio. Ya no te va a ir bien sólo con tu maíz en la parcela. Ahora te puede ir bien vendiendo cerveza en tu tiendita. O sembrando amapola. Así que al cerro también viene gente de donde se siembra maíz bola.

La geografía religiosa es, también, una geografía de las actividades económicas, lícitas e ilícitas. En el plano simbólico-religioso hay cambios. La gente va allí para todo. Pagan la misa para que les vaya bien con el maíz. Dejan recados y fotos muy interesantes, en los que cuentan para qué quieren que les vaya bien: que si la salud de su hijo, que si la titulación de sus hijos, que si las ventas, o que les vaya bien en su siembra de amapola. También piden que sus enemigos no les hagan daño. O piden la ayuda de Dios para que mate a su enemigo. Es toda una cosmovisión del bien y del mal, que es una realidad en la Montaña.

La siembra de amapola ha llegado a los altares. Se le pone como ofrenda a San Marcos. Saben que la amapola es un maíz, el maíz bola. No te lo

puedes comer, pero, gracias a que puedes vender un kilo a 25 mil pesos, puedes comprar los huaraches de tu hijo, los zapatos de tu niña, el vestido para que vaya a la escuela, los útiles escolares. Por eso le pides a San Marcos que llegue el agua para que la siembres, o que no llegue el Ejército, o que se pueda rayar.

Como a los pueblos les ha sido arrancada esa piel que es el maíz, como se les ha despojado del cosmos de su vida comunitaria, ahora tienen que suplantarlos con el maíz bola. Eso ha hecho que la gente vea al maíz rojo como estrategia de sobrevivencia.

Pero no es fácil. Hay una crisis muy grande en el campo, donde la gente no encuentra el paraguas para que florezca la justicia y la igualdad. Así como han visto que los precios del café bajan y suben, ahora ven que la amapola antes costaba 25 mil pesos el kilo y ahora cuesta 5 mil. Se topan con una fuerza oscura que no les da seguridad y los coloca en el total desamparo. Ni el café, ni el maíz, ni la Jamaica, ni ahora la amapola les permiten sobrevivir.

Maíz bola y derechos humanos

Es complicado, como grupo de derechos humanos, actuar en comunidades que han hecho de la amapola parte de su estrategia de sobrevivencia. Siempre es difícil cuando uno se pone en el dilema de lo que es bueno o malo en términos teóricos.

Pero es distinto cuando el asunto se enfoca en términos prácticos, de cercanía con la gente. Es decir, más profundos. Desde allí uno ve lo criminal que ha

sido la política del Estado contra los pueblos indígenas; el daño histórico que les ha hecho los ha colocado en la necesidad de generar su propia estrategia de sobrevivencia. El Estado no da a los pueblos margen de legalidad. La exclusión social en que los pone los coloca en la exclusión legal. Los expulsa en su mismo territorio. Los coloca fuera de la legalidad. Hasta esos extremos llega la perversidad de un Estado que tiene como política la discriminación, la exclusión, el desprecio, la estigmatización y el etnocidio.

Cuando uno ve en los rostros y la vida de las mujeres -descalzas, desnutridas, sin poder alzar la cara-, esas miradas siempre iguales, se da cuenta de lo grave que ha sido el drama de los pueblos. Tan grave que a veces hay personas, sobre todo mujeres, que no logran levantar la vista para entablar una comunicación fraterna. Ahí se ve hasta dónde ha llegado la actitud denigratoria de un gobierno que ha colocado a los pueblos indígenas contra el paredón.

Lo que menos queremos hacer es asumir un rol de jueces y decir esto está bien, esto está mal. Más bien hay que preguntarnos por qué está así la situación y por qué se ha llegado a estas formas de vida.

Cuando caminas por la Montaña, ves los cerros pelones. Ves la mano depredadora de los talamontes y el contubernio con las autoridades que les permitió arrasar los montes. Ves que la carretera, el camino y la terracería llegaron por interés del aserradero. No llegaron por la inversión pública, sino por

la inversión de un talamontes, que no hizo el camino al pueblo, sino al monte, al bosque, para sacar la madera. A la gente apenas le dio cervezas y al maquinista un chivo. Al pueblo le construyó o le dio material para la construcción de una iglesia.

Estos caminos fueron trazados para que circulen por ellos camiones troceros, para que entren al bosque por la madera. Es impactante ver en esas comunidades el contraste que hay entre la iglesia y las viviendas de sus habitantes. Pero la gente está feliz porque el maderero construyó esa iglesia.

Cuando uno escucha las historias de cómo ha sido la vida de los pueblos en medio de esa pobreza, de ese fango, de tanta precariedad, no tiene ojos para decir que la gente está fuera de la legalidad. Todos los actores externos que han llegado a las comunidades, incluso algunos maestros, han puesto a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los hombres en el rincón de los olvidados. Han buscado la forma de quitarles su agua, su bosque y la riqueza que existe en el subsuelo.

Cuando andas por esos caminos, te encuentras con la amapola. La ves en el patio de una casa. Y te dices: "Estos de plano ya se descararon". Pero si investigas un poco la historia que hay detrás, encuentras que en ese patio vive una viuda a la que le mataron a su esposo, con tres hijos y sin parcela. Su único terreno es ese patio. Si no tuviera de otra y sembrara ahí maíz, podría comerse apenas unos

elotes. Pero no podría sostener a sus tres hijos. Para que ella pueda curarse, para ir a la ciudad, necesita dinero. Y ese dinero sólo lo puede obtener sembrando amapola.

Pero cuando el Ejército llega a la comunidad y ve amapola en los patios, se va contra las mujeres. Las acusa de ser mañosas y a los hombres de ponerlas a sembrar.

Apenas hace como medio año, cuando ya había bajado el precio de la amapola, íbamos rumbo a San Rafael. Al pasar por la carretera vimos en el cerro como cien personas. Eran hombres y mujeres. Paramos a ver qué pasaba. Nos explicaron que en esos días había estado yendo el Ejército para destruir la amapola. Pero, como llegaba a eso de las 11 del día, les daba tiempo de ver a los soldados y que las mujeres se colocaran en el camino para impedir su paso a los sembradíos. De esa manera evitaban la entrada de los militares.

Pero ese día les habían madrugado. El Ejército llegó a las 6 de la mañana. La gente no estaba lista y, cuando se dieron cuenta, los soldados estaban desplegados en los sembradíos, cortando la amapola. Un helicóptero los apoyaba. Las mujeres bajaron, cargando a sus hijos, a encarar al Ejército. Le pidieron que les dejaran cosechar lo que quedaba porque algunas ya estaban para hacer el rayado. Les dijeron en mixteco: "No cortes la amapola, déjame cosecharla y ya después vienes".

Los campesinos estaban tristes. Algunos incluso llorosos. Su patrimonio familiar se había esfumado.

Ante esta realidad, uno se pregunta quién es el criminal. Está la mujer, cargando a su hijo, peleando por una siembra de menos de un cuarto de hectárea. Quiere rayar unas plantas para tener medio kilo de goma y venderla a 2 mil 500 pesos. Es un trabajo de cinco meses. Lo hacen no porque quieran, sino porque el Estado les ha negado todo. No tienen nada. Ni maíz, ni frijol, ni tierra fértil. Desesperados, esos montañeros veían que, para detener a los militares, no les quedaba más que los brazos de las mujeres y su súplica.

Pero no los pararon. Como los soldados habían estado yendo cinco días sin tener suerte, decidieron tomar venganza e irse contra todo. Se encontraron a las mujeres y los niños. Concluyeron que la comunidad era tan mañosa que mandaba a las mujeres y a los niños al frente. No se dieron cuenta de que, a final de cuentas, son ellas y sus hijos los que más van a sufrir los estragos de esta estrategia de arrasamiento de la amapola.

La relación de las comunidades con el crimen organizado en la siembra de la amapola en la Montaña es externa. Los compradores de amapola llegan a ellas, que están sumidas en la pobreza, como llega la Coca Cola y la Corona. A la gente no le interesa mucho de dónde vienen. Lo único que les interesa es saber quién paga más.

Hay integrantes de una red que vienen de la región, pero no son de las comunidades. Cuando hay problemas entre bandas, la comunidad está al margen. Lo único que hacen es guardar su kilo de goma porque no llegaron los compradores. No se arriesgan a salir de la comunidad a vender la droga. Saben que si lo hacen se colocan en peligro de sufrir una agresión mayor. El trasiego es lo peligroso. En cambio, si permanecen en su casa, si venden la goma en su domicilio o en su colonia, no pasa nada.

Ética de no juzgar a los excluidos

Al principio decían –y en ocasiones lo siguen diciendo– que somos defensores de delincuentes. Pero la figura del delincuente que tiene en el imaginario el gobierno es el indígena pobre. Nosotros somos defensores de los pobres que el gobierno dice que son delincuentes. Acompañamos a la gente.

A veces la gente no nos dice toda la historia. Hay muchos ejemplos. El pueblo de Tecozaca fue a vernos para informarnos que el Ejército había llegado a la comunidad, había entrado a sus casas. Fuimos allá y logramos hablar con los militares. Nos dijeron que en el pueblo había varias casas llenas de mariguana y no los dejaban entrar a ellas. Precisaron: “No es que estemos entrando a sus casas. Estamos entrando a algunas casas que tenemos detectadas que son bodegas. En una ya entramos y encontramos mariguana. Eso les molestó”. Les pregunté sobre los

carros. Los militares respondieron que eran carros robados, sin placas.

Fuimos entonces a hablar con la comunidad. Les explicamos que habíamos platicado con los militares y que, según ellos, en algunas casas tenían almacenada marihuana. Les aclaramos que a nosotros no nos constaba que así fuera, pero que eso decían los soldados, y ellos estaban ahí para erradicarla.

Yo les expliqué: “Nosotros no podemos juzgarlos a ustedes. Lo único que podemos decirles es que sí es un asunto delicado, pues hay siembras ilícitas. En este caso el gobierno, el Ejército, está actuando de acuerdo a como tienen sus facultades. Lo que sí les podemos decir es que ellos no se pueden llevar las cosas así. No pueden entrar a sus casas aunque estén cerradas. Ellos dicen que son bodegas. Pero no pueden entrar, a menos que pongan la denuncia y una autoridad mande a catear esa casa y determine lo que ahí hay. Tienen que saber que hay un procedimiento legal y que el Ejército no puede hacer eso. Puede extirpar o destruir cultivos. Pero no puede entrar a sus casas. Son sus casas. No se puede violar el domicilio. No lo puede hacer, a menos que sea una situación muy grave, que haya habido algunas acciones violentas, y aun así, tiene que haber un procedimiento”.

Eso provoca que las autoridades nos acusen de defender delincuentes, narcotraficantes. Pero el narcotraficante de la Montaña –que así le llama el gobierno– es el campesino pobre que se vio obligado a

cambiar el maíz tradicional por el maíz bola o la mariguana para poder darle de comer a sus hijos.

El comandante

Hace tiempo hubo un operativo grande de la Policía Federal en Tlapa. Empezaron a revisar los autobuses. Revisaron minuciosamente un autobús que iba a Acapulco a las 9 de la noche. Bajaron a una señora de la comunidad indígena de Atzompa, municipio de Metlatónoc. Iba con una sobrina de unos 11 años. En sus vestidos traían enredada goma de amapola. Llevaban dos o tres kilos, ya procesada.

Participaron unos 30 o 40 policías federales. Habían recibido un pitazo fuerte. Se llevaron a la tía y a la niña a la comandancia y las detuvieron. Eso fue el sábado en la noche.

Al otro día, domingo, yo estaba en la oficina. Todavía despachábamos en el cuarto del hotel Dulce María, nuestra primera oficina. Como a las 11 de la mañana llegaron dos hermanas de la niña y sobrinas de la tía. Nos contaron lo sucedido. Los policías acusaban a sus familiares detenidas de ser narcotraficantes. Se las iban a llevar a Chilpancingo porque esos delitos no se atendían en Tlapa.

Ellas habían ido a hablar con el comandante. Le preguntaron si no había forma de que las liberara. Él les dijo que sí, pero que le dieran 20 mil pesos. Juntaron el dinero con parientes y amigos. Entraron a la comandancia como a las 11 de la mañana y le dieron el dinero. Él lo contó y les dijo que estaba bien.

Les pidió esperar un rato afuera, para ver en qué momento les entregaban a su tía y a su hermana.

Estuvieron aguardando, pero más tarde vieron que dos camionetas de la policía salían de la comandancia, con su tía y su sobrina en medio. Quedaron desconcertadas. Buscaron al comandante, pero les dijeron que no estaba. Esperaron hasta que unos policías las fueron a ver. A ellos les contaron que se habían llevado a su hermana y a su tía. Ante su desconcierto, los policías les explicaron que se las habían llevado a Chilpancingo, que el comandante no estaba y que ellos no sabían nada.

Fue entonces cuando me vinieron a buscar y me platicaron todo esto. Les propuse que fuéramos a ver al comandante. Así que fuimos a la comandancia y preguntamos por él. Nos respondieron que no estaba y nos preguntaron de qué se trataba. Les dijimos: “Venimos de Derechos Humanos. Queremos ver un asunto de estas personas que pidieron nuestro apoyo”. ¡Por supuesto que ellos ya sabían de qué se trataba!

Decidimos esperar en la oficina de Tlachinolllan. En lo que platicábamos y escribíamos la denuncia del caso, llegó el comandante y se metió. La puerta estaba abierta. Se presentó:

-Buenas tardes. Soy el comandante Palma. Vine porque me informaron que me fueron a buscar a la comandancia. Aquí estoy. ¿Qué se les ofrece?

Sacó su pistola y la puso sobre el escritorio. Yo estaba ahí enfrente. Estaba también la hermana

de la detenida, que era la que más hablaba, y la más pequeña, que no hablaba español.

Le di las gracias por ir. Le expliqué:

-Lo fuimos a ver porque la compañera Rosa me lo pidió. Ella es familiar de las personas que fueron detenidas anoche en un operativo, y luego las llevaron a la comandancia, y al parecer hoy las trasladaron a la ciudad de Chilpancingo. Rosa me comentó que habló con usted. Ella le planteó la posibilidad de que sus familiares pudieran obtener la libertad. Usted les respondió que sí, pero que tenían que pagar o dar 20 mil pesos. Ellas se lo dieron, pero, en lugar de que sus familiares quedaran libres, se las llevaron a Chilpancingo. Y ahora ellas deben ese dinero.

-Eso es falso -respondió indignado el comandante-. A ver tú, chamaca, no andes mintiendo, ni diciendo cosas que no son reales, porque también te vas a ir a la cárcel. Porque a tu hermana se la llevaron a Chilpancingo por narcotraficante.

-Comandante -lo detuve en ese momento-, le pediría que, de favor, se condujera con más respeto. Imagínese, ella tiene dos familiares detenidas y usted la está amenazando.

En su mismo tono altanero me reviró:

-Así como las ve, esas señoras y esa muchachita son narcotraficantes. ¿Sabe lo que les encontraron? Son narcos. Usted le está creyendo a estas personas. Quieren la libertad de sus parientes. Obviamente van a decir que me dieron dinero.

-Comandante -le dije-, nosotros le estamos dando la credibilidad a ellas porque sabemos que tienen un problema muy grave. Entendemos que lo fueron a ver a usted, para ver la posibilidad de que usted les diera una oportunidad.

-En ningún momento he hablado con ellas -me interrumpió-. Yo ni las conozco. Usted sabe muy bien que cuando es un delito que tiene que ver con la droga, los detenidos se van a Chilpancingo. Son delitos federales. Es más, a mí ni me toca. Estuvieron en la comandancia porque no había espacio. Yo no tengo nada que ver con eso. Lo tiene que ver la Policía Federal.

-Yo te di 20 mil pesos -le dijo la muchacha.

Él, altanero, la amenazó:

-¡Cállate, porque te voy a detener!

Yo lo paré.

-No comandante, discúlpeme. Usted está en la oficina de Derechos Humanos y, mínimamente, va a respetar a la muchacha.

Él me volvió a arrebatarme la palabra.

-Es que está diciendo mentiras, y yo no voy a permitir que en mi cara me diga mentiras.

-No, comandante -no lo dejé seguir-. Yo creo en el dicho de ella. Lo que ella está manifestando con datos precisos es que le dio a usted los 20 mil pesos.

Rabioso, me reclamó:

-Pues pruébemelo, señor, pruébemelo usted. Conmigo no va a estar jugando. Yo tengo un cargo público y como tal se me debe respetar.

-No -le dije-, como servidor público usted debe honrar su cargo. Fuimos a buscarlo a su oficina en son de buscar un diálogo. Lo hicimos de buena manera. Ella se siente preocupada porque tiene una deuda de 20 mil.

-Yo no debo nada. No te debo nada. No seas mentirosa. No sigas inventando chismes porque ya te dije que también te puedes ir a la cárcel.

-Comandante -le insistí-. Creo que ésa no es la manera. Usted vino aquí a amenazarnos.

-¡No estoy amenazando!

-¡Cómo no! ¡Claro que sí! La está amenazando a ella. Usted puso la pistola acá.

-Señor, es mi instrumento de trabajo -replicó.

-Sí, pero su instrumento de trabajo no es para ponerlo en el escritorio.

-¡Cómo guste! -exclamó mientras se paraba-. Me encuentra allá. Ya sabe dónde estoy.

-Sí, comandante -le respondí-. ¡Hasta luego!

Hasta ahí llegó la conversación. La niña estaba espantada y, la verdad, yo también. Estaba solo en la oficina. Les expliqué que no podíamos hacer casi nada para recuperar los 20 mil pesos. Y que lo que seguía era poner la denuncia.

Después supimos que esa noche la niña de 11 años detenida fue violada en la comandancia por un elemento de la policía. A la tía la pusieron en un cuarto y a la pequeña en otro cuarto. En la madrugada llegó un policía y abusó de ella. Nos enteramos cuan-

do fuimos a verlas a Chilpancingo. No nos los dijo al principio. Apareció en el estudio que le hicieron. Ella confesó que la habían violado.

Denunciamos al policía que abusó sexualmente de ella. Lo detuvieron. A la niña la liberaron como a los ocho días. La tía permaneció como siete meses en la cárcel. No la podíamos sacar. Llevaba como tres kilos de droga y ella lo sabía.

La niña de 11 años regresó a la Montaña. Platicamos con ella. Dentro de todo lo malo, regresó a la escuela. Hablamos con los maestros para que no le fueran a generar un problema por sus inasistencias. Pero nunca previmos que eso había salido en los periódicos. Publicaron: "Desmembraron al cártel de la Montaña", junto a la foto de la niña con la tía. Eso se supo. También se corrió la voz en la escuela de que a la niña la habían violado. Cuando llegó a la escuela sus compañeros le decían: "Ahí viene la narcotraficante".

X

EL SELLO DE LA CASA

Deshacer entuertos

Un aspecto que distingue y marca nuestro trabajo es que estamos en la región, documentando en el terreno. Eso cuenta mucho para que la gente, que nunca ha tenido la experiencia de contar con el respaldo de una organización, pueda abrirse, confiar en nosotros, y nombrarnos sus representantes o sus defensores ante una situación grave de violaciones a los derechos humanos. Conocer el terreno y estar en medio del conflicto es el punto clave para saber navegar en las aguas caudalosas de Guerrero y meterse al remolino del problema sin ahogarse.

La gente nos llama, la gente pide, la gente solicita nuestra intervención. Nos invita a estar ahí. Estamos con ellos no sólo en los momentos difíciles, sino también en momentos lúdicos. Compartimos con la comunidad la comida, la bebida, el baile, la alegría. También los acompañamos en los momentos tristes,

difíciles, dramáticos, de asesinatos, de problemas graves. Es muy importante que sepan que cuentan con nosotros cuando enfrentan una situación difícil.

En una ocasión, en Cualac, municipio de la Montaña Baja, en la víspera de la fiesta patronal, después del baile, hubo un pleito entre el presidente municipal de Xalpatláhuac y dos sacerdotes, el párroco de ahí y uno que estaba de visita. Estaban tomados, intercambiaron palabras y el hijo del presidente se abalanzó contra el cura porque no le daba paso para cruzar la calle. El muchacho llevaba su camioneta y el cura tenía atravesada la suya. Discutieron. El chavo se le arrojó encima. El cura lo esperó. Tenía un arma, la accionó y lo hirió en la pierna. Entonces el presidente se abalanzó contra el sacerdote y el religioso volvió a disparar. El presidente municipal de Xalpatláhuac murió.

Se oyó la balacera en el centro del pueblo. El presidente de Cualac llegó al lugar de los hechos, encontró tirado al alcalde de Xalpatláhuac y embistió al cura. Finalmente detuvieron a los dos sacerdotes y los echaron a la cárcel.

En la madrugada le hablaron al obispo y el obispo me llamó a mí. Eran como las tres de la mañana. Me contó lo sucedido. Todavía no se sabía si el presidente municipal de Xalpatláhuac había muerto o seguía vivo. Se sabía que lo habían traído a Tlapa. Me pidió que lo ayudara a investigar cómo estaba y ver qué se podía hacer. Telefoneé al hospital y me informaron que el

presidente estaba muerto y su hijo herido, pero no de gravedad. Me dijeron que se iba a salvar. Le marqué al obispo y le comuniqué: “Está muerto”.

Este hecho generó un problema muy grave en la comunidad. Al otro día era la fiesta del pueblo. El obispo estaba invitado por el cura para hacer la misa de función, la principal. Así es que, temprano, el obispo se reunió con los sacerdotes para valorar si debía o no ir. Yo participé. Le dije al obispo que tenía que ir. “Pasó lo que pasó. Que las autoridades investiguen si el sacerdote, como dicen, fue el que accionó el arma. Y si fue así, que se castigue. Ni modo. Lo mejor para la gente en este momento de caos, de crisis, es que usted vaya, y como obispo reconozca que la Iglesia ha tenido a través del sacerdote una mala actuación. Es recomendable ofrecer disculpas y plantear que se va a investigar.”

Al final el obispo fue a Cualac. La gente lo esperaba como siempre esperan al obispo, a la entrada del pueblo, con cadenas de flores. Pero estaban muy desconcertados. Fueron a la misa. En la homilía, el obispo pidió perdón. Llamó a que se investigaran los hechos. “Lamentamos la muerte del presidente, pido perdón al pueblo”, dijo. Eso a la gente le movió todo. Respondieron: “Pero si el obispo no tiene la culpa. Aquí es otro asunto”.

Después de la misa tuvimos una reunión con los principales. Ahí, ya con el obispo y los sacerdotes, se propuso: “Tenemos que pedir que las autoridades investiguen. Si los sacerdotes son responsables, ten-

drán que ir a la cárcel. A nivel civil tienen que pagar. A nivel eclesiástico también hay tribunales. Ya habrá proceso si los suspenden como sacerdotes. O ya habrá otro tipo de castigo". Fue importante explicar a la gente que se tenía que castigar al cura y permitir que fuera a la cárcel. La gente pidió que se le castigara.

Más tarde, regresando a Tlapa, la gente de Xalpatláhuac se fue a protestar a la casa del obispo. Estaba muy enojada. Cuando los policías ministeriales se enteraron de que la gente quería que le entregaran al sacerdote, dijeron que se lo iban a llevar a Chilpancingo. El obispo fue a ver a los sacerdotes, que se encontraban detenidos en la comandancia de policía.

El sepelio se hizo en Xalpatláhuac. La gente estaba muy indignada. Ya no fue el obispo. Se hizo la misa. La ofició el padre Mario. Le recomendé que la Iglesia debía pedir perdón. Se hizo la procesión. La gente no quería que fueran los curas al sepelio. Otros compañeros de Tlachinollan y yo fuimos a darle el pésame a la viuda, a la familia y a las autoridades que estaban ahí. Estaban muy serios. "Estamos muy enojados con los curas -nos dijeron-. ¿Cómo es posible que, siendo ellos los que hablan de Dios, maten? Estamos enojados con el obispo porque tememos que los va a liberar. Dicen que el obispo ya está hablando para que los liberen, para que se vayan."

Les explique: "Nosotros fuimos a Cualac. Estuvimos en la comandancia, en la policía. La postura del obispo y de la Iglesia es que se les tiene que castigar. Las autoridades tienen que investigar bien,

tienen que deslindar responsabilidades. Si los sacerdotes son responsables, se va a proceder. Nos consta que el obispo no está pidiendo que los liberen, ni está negociando con nadie. Él está a disposición del Ministerio Público”.

Se tranquilizaron un poco. Aseguraron que lo único que querían era que se investigara y se castigara a los culpables. Les aseguramos que así iba a ser. Les explicamos que el obispo nos había pedido que acompañáramos el proceso.

Se hizo el sepelio. Había mucho enojo. Pensamos que nos iban a rechazar, pues nos ven muy vinculados con la Iglesia. Pero pudimos estar ahí. No nos dijeron nada. Al final, la familia fue a pedir que los asesoráramos, que les recomendáramos unos buenos abogados para que los curas quedaran en la cárcel y ellos fueran indemnizados.

Les respondimos que no podíamos llevar ese asunto.

Hemos estado presentes en varios casos así. Como en la ocasión en la que los militares mataron a un policía, después de emboscarlos en la curva del Chupamirto. Tuvimos que ir a hablar con la gente porque tenían detenidos a los militares. No los querían soltar. Tuvimos que ir a hablar con el presidente y con los familiares, para evitar que se generara una fricción mayor. No queríamos que pensarán que estábamos apoyando a los militares. Pero había que advertirles que, si les llegaban a hacer algo, las cosas se iban a poner peor.

Sin pretenderlo, nuestra participación en estos asuntos tan graves ha ido amarrando la base del trabajo de Tlachinollan. Son los soportes que no se ven. Se ha cimentado un trabajo que tiene que ver con el acompañamiento, con nuestra intervención en momentos difíciles como actores que buscan solucionar el problema. Al final, la gente lo reconoce.

No tenemos muy claro cómo hemos hecho esta labor, pero la hemos hecho. Han sucedido situaciones de violencia muy graves y hemos acompañando a la gente. Algunos lo ven mal. Las autoridades ven mal cuando acompañamos a grupos que detienen a los policías. Nos acusan de apoyarlos para que lo hagan. Pero nuestra presencia ahí permite mediar y que tengamos legitimidad. Hemos acudido en tres ocasiones, de las que tengo memoria, a rescatar a los policías que son detenidos por la comunidad debido a sus malas actuaciones. En una ocasión, porque se llevaban una camioneta supuestamente robada que se encontraba fuera de la comisaría. En otra ocasión encerraron a los policías porque quisieron detener a una persona dentro de su domicilio sin llevar orden de aprehensión. El tercer caso se trató de policías del estado que, sin notificar nada al comisario, procedieron a llevarse un vehículo que supuestamente estaba reportado como robado. Nuestra intervención fue clave para llegar a un acuerdo con las comunidades y lograr la liberación de los policías.

No se trata de actuar solamente en el campo legal. No es solamente un asunto de recursos jurí-

dicos, sino de acompañamiento, de apoyo, de saber mediar y de tener la capacidad de llegar a acuerdos.

Hay casos tan extremos que nos sentimos obligados a brindar apoyo económico a gente muy desamparada. Cuando están muy enfermos, los apoyamos con medicinas, con sus pasajes. También cuando enfrentan catástrofes por los temblores y las tormentas.

Con el desastre provocado por los huracanes Ingrid y Manuel tuvimos que caminar con la gente para encontrarla en sus comunidades. Ahí nos reunimos con ellos y les dijimos: “No vamos a poder resolver uno por uno sus problemas. Juntémonos. Veamos si formamos un consejo de comunidades”. El hecho de estar ahí, de haber cruzado caminando en el lodazal en el que no podían entrar las camionetas, hizo la diferencia. Esas cosas son los detalles que tejen fino. Así es como se hace un trabajo de acompañamiento a las víctimas, a los pueblos, a las organizaciones, con otra forma de luchar y exigir justicia.

Ingrid y Manuel

Lo de Ingrid y Manuel fue muy duro. Recuerdo que fue el 15 septiembre de 2013, en plenos días patrios. Empezó a llover. Estábamos en Tlapa. Era el cumpleaños de mi esposa Rosario. Llovía mucho. Íbamos a cenar en la casa para celebrar el Grito. De repente empezó a llegar gente de las comunidades a avisarme: “Abel, ya se derrumbó el cerro. Hay algunas familias que están sepultadas. Hay una grieta grande

en una comunidad en Unión de las Peras, allá en San Miguel el Viejo. Se está viniendo el cerro y el lodo está cerca de la iglesia”. Ésas fueron las primeras noticias que me llegaron. Al final ya no pudimos cenar ni hacer la fiesta. El agua no lo permitió.

En la noche nos reunimos con los compañeros. Al otro día igual siguieron llegando las gentes. Tlapa quedó incomunicada, tanto de la Cañada, del lado de Huamuxtitlán para salir a Puebla, como de la salida a Chilapa para ir al centro del estado. Estábamos totalmente aislados.

Lo primero que hicimos fue reunirnos para tener más o menos el panorama de lo que estaba pasando y nombrar una comisión que saliera de la Montaña. Nos juntamos en La Ciénega. Fue impresionante. Llegaron pobladores de diferentes comunidades, todos caminando y enlodados. Nos decían: “Se murió la gente. Se cayeron nuestras casas. Hay varias comunidades que salieron del pueblo y están en la cima del cerro”. Realmente era un diluvio en la Montaña.

Fue muy importante salir de Tlapa y reunirnos en una comunidad más o menos estratégica para la llegada de los demás. Fue muy importante juntarnos a dialogar y ver qué hacer ante la catástrofe. Eso nos permitió registrar la tragedia y tener idea de la situación. Dijimos: “Necesitamos maíz, alimentos, porque no tenemos forma de hacer que lleguen”.

Quedamos totalmente incomunicados, silenciados. Toda la atención y la ayuda de las autori-

dades se concentró en Acapulco. Se olvidaron de la Costa Chica y la Montaña.

Partimos caminando desde Tlapa. Fuimos rumbo a la salida de Puebla. Hablamos con los medios y con algunas organizaciones. Buscamos solidaridad. Recibimos apoyo de las organizaciones de la Ciudad de México, de la Iglesia. Fue una experiencia que nos marcó. Hasta ese momento no nos había tocado tan fuerte el tema del piso básico de la supervivencia, del sentido humanitario, de lo que significa estar con la gente, ayudarle en circunstancias como éstas.

Eso nos dio la pauta para preguntarnos qué hacer. En esa misma reunión en La Ciénega decidimos formar un consejo de pueblos damnificados. Convocamos a una asamblea en Tlapa. Llegaron más de mil personas de toda la Montaña. Iban con la esperanza de que el consejo les ayudara a enfrentar la contingencia. Acordaron: "Hablemos con el gobierno, porque nosotros solos no vamos a poder".

Llamamos a Rosario Robles, de la Sedesol; al gobernador; a Nubia Mayorga, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Atendieron nuestra solicitud. Pero su visita tuvo un desenlace fatal. Esperaban que la gente les agradeciera que hubieran ido, pero en lugar de halagos, se encontraron con reclamos.

Rosario, acostumbrada a que siempre se le tratara como la gran funcionaria, se molestó con el maltrato. Enojada, me reclamó:

-¿A eso me trajiste? ¿A que me golpearan?

-Rosario -respondí-, yo te traje a que escuches a la gente. Si para ti eso es golpeteo, voltea a ver la realidad de nuestra gente.

-¡No! -exclamó-. Esto es una trampa. Me trajeron a golpear. Yo no lo voy a aceptar.

Traté de explicarle:

-Acepta la realidad de la gente. Entendí que tú venías porque tenías ese sentido humanitario de entender la tragedia de la Montaña.

Se salió de la reunión amenazando: "No vuelvo más", mientras la gente le gritaba indignada.

Dejó ahí a un subsecretario y a un grupo de funcionarios menores para atender a los damnificados, pero ordenó que no se diera importancia al consejo de damnificados. Canalizó toda la ayuda a través de los presidentes municipales. Los funcionarios siguieron el juego con las empresas que llegaron. Hicieron un gran negocio.

Las autoridades de todos los niveles del gobierno se acuerparon para hacer su propia estrategia, según ellos de apoyo a las comunidades. Eso dio pie a que los pueblos dijeran: "Ya vimos que ni el gobierno federal, ni el estatal ni el municipal nos van a atender. Asumamos el compromiso. Acuerpémonos como pueblos".

Sin quererlo, tuvimos que asumir un liderazgo como Tlachinollan. No veíamos posibilidades de abanderarlo. Pero, al final, la misma gente nos empu-

jó. Ahí nació la propuesta Que llueva maíz en la Montaña. Surgió de reflexionar: “Ahora nuestras tierras se devastaron, están inhabilitadas. Tenemos que pensar en la reconstrucción, en reparar nuestra casa, en dar de comer a nuestros hijos. Tenemos que pensar entonces en un programa alimentario que nos ayude”.

Nos planteamos cómo exigir al gobierno que garantizara el derecho a la alimentación. Y nuestra respuesta fue elaborar una propuesta, con un enfoque de derechos humanos, para garantizar el derecho alimentario. El gobierno federal y el estatal se cerraron a nuestra demanda. Vieron que era un movimiento de reclamo, de exigencia, de enfrentar a las autoridades, de desenmascarar los negocios turbios que estaban haciendo alrededor de la tragedia.

El dolor de los pueblos fue la bonanza de los políticos. El presidente Peña Nieto echó a caminar el programa Nuevo Guerrero. Pusieron a Miguel Alemán como presidente del consejo de empresarios responsable de dar una nueva imagen a Guerrero. Llegaron empresas de Hidalgo, del Estado de México, algunas ligadas a la CDI y otras de gente del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Peña Nieto, para hacer negocios alrededor de la reconstrucción y la proyección de una nueva imagen para la entidad.

Para nosotros ha sido una gran enseñanza trabajar con los pueblos, con las comunidades, en un tema central como es la alimentación. Es un asunto

que hasta la fecha no está resuelto. Es un problema porque hay un déficit alimentario. Los campesinos cosechan 300 kilos de maíz por temporada para una familia de siete miembros. Por eso se ven obligados a sembrar amapola en las barrancas.

El gobierno instaló en la región los comedores comunitarios e impulsó la Cruzada Nacional contra el Hambre, con militares. Llegaron a Tlapa, donde se creó el Consejo de Comunidades Damnificadas, los soldados ahora como cocineros. Ocuparon las comisarías, arguyendo que ahí sería donde recibirían los alimentos y que los prepararían a un lado.

Recuerdo que en una reunión que se tuvo con Rosario Robles y Kerry Kennedy, quien ha trabajado junto a Tlachinollan desde hace nueve años, ella le preguntó a la secretaria:

-Oiga, ¿por qué militares están dando de comer a la gente? La gente sabe preparar su comida. Los pueblos indígenas tienen una cocina tradicional de antes de la Conquista.

-Lo que pasa -respondió Rosario- es que, como hay damnificados y la mayoría de la gente está necesitada de comida, los militares les enseñan a cocinar en grandes proporciones. Por eso los militares están ayudando. Son los que ayudan a calcular cómo alimentar a 100 o 200 personas.

¿A quién creían que engañaban? Llevaron la Cruzada contra el Hambre, que fue un gran negocio. Llegaban los paquetes de comida de los empresarios

de México. En los comedores comunitarios servían chilorio. La gente se quejaba de tener que comer huevo en polvo. Los alimentos que se servían ahí vinieron a romper con la forma de entender la comida tradicional de la naturaleza. ¡Llegaba pura comida empaquetada!

Empezamos a luchar y a decir: “¡Eso no! Tenemos que exigir el maíz, producir el maíz y pelear por el maíz”. Hasta la fecha seguimos trabajando en esta línea del derecho a la alimentación.

La salud

Aunque la salud es un asunto que le corresponde atender al gobierno, lo hemos convertido en un eje muy importante de nuestro trabajo. Vemos que es algo que lastima a las familias.

Las muertes maternas son muy dolorosas. A veces las familias no pueden trasladar a las mamás de sus pueblos porque no tienen recursos. No hay ambulancias y tienen que bajarlas en una camioneta de redilas. Les cobran mil, dos mil pesos para llevarlas a Tlapa.

Ante dramas como el de las muertes maternas o el de los niños desnutridos, uno no se puede quedar con el discurso de que es el Estado el que tiene que resolver el problema. Claro que el Estado es el responsable pero, mientras tanto, está la historia real de la gente que está enfrentando el problema. Y es ahí donde nos vemos obligados a hacer algo.

La gente se ha visto orillada a protestar para que haya un médico. Han tenido que bloquear carreteras para que haya medicamentos. Vemos el tema de la salud de la población como un derecho básico. La Montaña y la Costa Chica son las regiones con los índices más altos de todo el país en mortalidad materno-infantil. El hecho es motivo de preocupación internacional.

Esas muertes se producen porque no hay seguimiento a las embarazadas de que va bien el niño. No se conoce si la madre está en buenas condiciones de salud. No hay trabajo preventivo de atención a las embarazadas. No se sabe si las mujeres tienen la presión alta o si tendrán complicaciones durante el embarazo o en el parto. Todo queda en manos de las parteras. Ellas resuelven los problemas del alumbramiento siempre y cuando todo vaya bien, pero, si se complica, ya no.

Empezó a documentarse que muchas embarazadas morían en el parto. Eso, a pesar de que se decía que ya no era normal que sucediera. Esto provocó que en el periodo de Vicente Fox se creara el Hospital del Niño y la Madre en Tlapa y se instalara uno similar en Chilpancingo. Con eso trataron de medio paliar este problema.

Se crearon además las Casas de Atención a Mujeres Indígenas (CAMI). Fue una iniciativa de organizaciones indígenas para atender a las mujeres en una casa donde pudieran estar durante el embarazo. No es que ahí las atendieran, sino, más bien, les brin-

daban el apoyo necesario para que su embarazo no se complicara.

Es un tema muy doloroso, porque las madres que traen la vida son las que en muchas ocasiones pagan este regalo con su muerte. Lo hemos denunciado. Ahora el gobierno se cuida mucho de decir que ya bajó el índice de mortalidad materna infantil, pero sabemos que todavía sigue. Es importante que haya atención en Tlapa con especialistas, pero no es suficiente. Los mismos médicos dicen: “Es que ya nos traen a las mamás graves. Llegan en un momento muy crítico, cuando ya no se puede hacer nada, y mueren”.

El gran problema es que no se ha garantizado la atención básica a la salud en las comunidades. No hay un trabajo preventivo, de seguimiento. Eso es lo que hemos estado peleando.

Derecho a la salud

Hay un Hospital General en Tlapa que tiene 30 camas. Son las mismas camas que tenía cuando se inauguró hace 40 años. Ese hospital se creó como IMSS-COPLAMAR, con el presidente José López Portillo. Desde aquella fecha esas 30 camas siguen. No han ampliado la cobertura. Pero el hospital se lo quitaron al IMSS y pasó a ser parte de los servicios estatales de salud. Lo desmantelaron totalmente. Quedó una estructura obsoleta. Casi no hay especialistas, si acaso dos o tres: un ginecólogo, un traumatólogo, un pe-

diatra. Pero no hay tres turnos. Si al paciente le toca que el pediatra vaya en la mañana, es atendido, pero si no, debe esperar a la noche o el fin de semana. El especialista no lo ve si no es su turno.

Es un solo hospital que cubre los 19 municipios de la Montaña, a más de 600 comunidades. ¿Qué tipo de salud es ésta? La gente va con nosotros y nos cuenta que tiene problemas de todo tipo. Por ejemplo, de traslado. Nos dicen: “Mi hijo se va a tener que llevar a Chilpancingo, pero va a costar 5 mil pesos la ambulancia. No tengo para pagar gasolina, ni para pagarle al chofer. Y va a tener que ir con él un médico porque va delicado. Yo no tengo ese dinero”. Entonces, el paciente no se va a Chilpancingo o a México. Ahí es cuando Tlachinollan interviene y habla a Chilpancingo para reclamar a las autoridades: “Nosotros sabemos que hay un fondo para traslados. Ese fondo de traslados aplíquenlo a la gente, no les cobren”. Y se arma un regateo.

Igual nos dicen que tienen que comprar las medicinas, porque ahí no hay. O que deben pagar los estudios de laboratorio. Nada funciona y la gente está depauperada. Es cierto, es obligación de las autoridades prestar ese servicio. Pero las instituciones están debilitadas y corrompidas.

El trabajo que hacemos como Tlachi es hacer presión, documentar los casos, interponer recursos, poner quejas. Hemos detectado casos de violencia obstétrica. Nunca habíamos incursionado en ese tema. Pero ya hay dos recomendaciones de malas

intervenciones médicas, que provocaron que los niños, por esa mala atención, no tuvieran un desarrollo óptimo.

Son cuestiones complicadas en las que la misma gente nos va metiendo. Son problemáticas que no documentaríamos si no llegaran a la oficina o si no pidieran que fuéramos a sus comunidades a ver a los enfermos.

Mini Numa

Mini Numa es una comunidad indígena del municipio de Metlatónoc. Como tantas otras de la región, sus habitantes fueron a Tlachinollan a decirnos que querían un médico. Las autoridades de salud de la región se negaban a mandarlo, a pesar de que ya llevaban cinco años gestionándolo. Los pobladores querían ver cómo les podíamos ayudar.

Era un caso que se podía documentar bien. Ya teníamos más herramientas. Hablamos con la gente. Resultó que ellos habían documentado, a su manera, todas sus gestiones. Guardaban todos los oficios que habían elaborado desde hacía cinco años. Nos los enseñaron: “Éste es el primer oficio; éste es el segundo, firmado de recibido; éste es el tercero, ésta es la respuesta”. Tenían también documentados los niños que habían muerto por falta de atención médica. Llevaban a sus enfermos a Metlatónoc, pero ahí no los atendían.

Los abogados concluyeron que estaba bien documentado y que había que presentar un ampa-

ro. Además, fueron a sacar fotos a las tumbas, donde aparecían los nombres y el año de las defunciones.

El centro del caso era la violación al derecho a la salud. Las autoridades argumentaban que, de acuerdo con la norma oficial mexicana, solamente un poblado que tuviera más de dos mil habitantes podía contar con médico.

Con toda la información recabada y con los argumentos de la Secretaría se interpuso un amparo. Al presentarlo se esgrimieron todos los instrumentos internacionales que garantizan el derecho a la salud y la misma Constitución. Explicamos que las autoridades no habían respondido a los requerimientos de servicios médicos como debería ser, violando el derecho de petición. Señalamos que había un trato discriminatorio y se estaba usando una norma secundaria en detrimento del derecho básico de garantizar la salud, más allá de si era una comunidad de 500 habitantes. Explicamos que tan sólo el llegar a la cabecera desde la comunidad tomaba 40 minutos caminando.

Las autoridades insistían en que no había necesidad de una clínica en la comunidad. Nunca dimensionaron la importancia de que la gente estuviera preocupada por la vida, ni por la salud de sus ciudadanos. Dejaron de lado que esa situación había costado la vida a personas adultas y niños. No buscan proteger la salud. Su único argumento era decir que no se podía poner la clínica porque estaban a 40 minutos de la cabecera.

Ganamos el caso. Lo ganamos antes de la reforma de la Ley de Amparo. Fue un éxito. Fue algo inédito. Demostramos que sí pueden ser justiciables los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Mini Numa fue el ejemplo.

De repente nos enteramos de que el doctor Víctor Abramovich centraba sus clases en el caso Mini Numa para hablar de los DESC en la American University, con sede en Washington. Eso fue increíble para nosotros. Tuvimos la dicha de que Víctor, quien fue comisionado de la CIDH y ahora es procurador fiscal de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, Argentina, nos haya visitado en Tlapa. Bien recordamos cuando nos dijo: “Ustedes son muy famosos por allá. Y lo peor es que ni se dan cuenta de que son famosos. Lo son por el trabajo que hacen, por lo que han logrado, por cómo han construido los casos. Porque son casos emblemáticos que están abriendo brecha”.

La verdad, nunca imaginamos que el ejemplo Mini Numa llegara a ser un referente internacional del derecho a la salud y de cómo se puede hacer justicia a un derecho económico y social.

Hasta la fecha, los funcionarios de salud siguen enojados. No les cabe la idea de que haya un médico en esa comunidad de 500 habitantes que está cerca de Metlatónoc. Piensan que eso no se debe hacer, porque son gastos infructuosos. Nosotros les respondemos que es más efectiva la lucha de los pueblos que su visión burocrática. Ahí está Mini Numa. Hasta la fecha sigue el médico y hay medicinas. La

gente ahora sabe lo que significa pelear por un derecho y hacerlo efectivo.

Pero la cosa no quedó ahí. Además, se obligó al gobierno a que se construyera bien el centro de salud de Metlatónoc. Se planteó que los servicios de salud tenían que mejorar en la cabecera municipal para que atendieran a la población que llega de las comunidades. También se emplazó a la Secretaría de Salud a que concluyera la construcción del centro de salud y se contratara personal médico especializado.

Los invisibles

En Tlachinollan, la cuestión de los jornaleros es un tema cotidiano, permanente. En la Montaña, las comunidades indígenas son comunidades jornaleras. Raro es encontrar una familia donde uno de sus integrantes no haya ido a Sinaloa o a Morelos a jornalear en los campos. En todas hay alguien que se ha subido a un autobús para ir a buscar un ingreso.

Esta migración interna ahora es mayor. La crisis en el campo ha provocado que las familias se jornalericen. Los pocos productos que se venden en la Montaña no tienen precio, por eso las familias no cuentan con ingresos seguros. Esta precariedad provoca que la gente siga la ruta de los campos agrícolas.

En Tlachinollan teníamos un área de migrantes internacionales y migrantes locales, de jornaleros. Pero concluimos que no debíamos tener un área de migrantes porque era un problema transversal. Es

como el tema de mujeres. Atraviesan todo Tlachinolán. Así que al final quitamos el área de migrantes y la incorporamos dentro del área jurídica, en el campo de la violación de sus derechos laborales.

Sin embargo, eso no responde a la realidad. Lo que es real es que las familias bajan a Tlapa. Ahí se quedan un día o dos, esperando un autobús que los lleve a los campos agrícolas. Hay todo un sistema de enganchadores que prometen un sinnúmero de beneficios si se van a trabajar a ciertos campos. Hay personas que tienen experiencia jornaleando y hay otras que no.

La red de enganchadores dedicada a llevarlos a los campos agrícolas está contaminada. No les cumplen con los contratos, los engañan. Van niños, van mujeres embarazadas. Lo hemos documentado en diferentes informes. Pero lo que más nos ha frustrado es que no hemos podido incidir en políticas públicas. No hemos podido colocar el tema a nivel nacional, ni en la Secretaría del Trabajo ni en la Secretaría de Asuntos Indígenas. Los jornaleros agrícolas son invisibles. Es un problema grave porque, como decía Rodolfo Stavenhagen, sufren “violaciones masivas de derechos humanos”.

Estamos hablando de miles de familias, de niños, de mujeres que van en el viacrucis de su comunidad al campo agrícola y del campo agrícola a su comunidad. Sufren accidentes. En el camino mueren niños y mujeres. Hay asesinatos. Padecen un sinnúmero de problemas. Hay niños a los que no se les

brinda albergue y pasan el día en los surcos. Son rociados con agroquímicos, porque las avionetas bañan a la gente con plaguicidas.

El mundo de los jornaleros lastima mucho, pero a nadie le duele, a nadie le preocupa. Lo único que hemos logrado es que cada temporada se haga un programa de atención a jornaleros. Cuando es temporada alta se abre un comedor comunitario para ellos, que atendemos con el Consejo de Jornaleros. Se instala un dispensario médico y se documenta a quienes salen.

Ya tenemos un estacionamiento para que lleguen los autobuses a recoger a los trabajadores. Ahí se registra la gente para saber en qué autobús se va, quién es el chofer, a qué campo agrícola se dirige. Es un lugar para que los jornaleros en tránsito tengan un techo donde dormir, un espacio en el cual bañarse. Se busca que cuenten con lo básico.

Sin embargo, la verdad es que ninguna autoridad quiere entrarle a este trabajo. Y nosotros tenemos que atender tantos temas que, lamentablemente, no hemos podido fijar una estrategia, incidir en las autoridades y lograr hacer cambios. No nos da la vida.

XI

AYOTZINAPA, LA MARCHA DE LAS TORTUGAS

Rutas convergentes

Los maestros de la Montaña fueron los guías en nuestro caminar. Muchos de ellos se formaron en el ámbito profesional en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Ayotzinapa fue la matriz que dio consistencia al trabajo educativo en el estado y en la Montaña. Para nosotros la Normal ha sido la cuna de la resistencia, la cuna de la educación crítica y la cuna de los maestros que están dispuestos a irse a trabajar a la Montaña y a la Costa. Adicionalmente, ha sido un bastión de las luchas emblemáticas en el estado.

La formación de los jóvenes con una visión crítica ha sido un terreno en el que se ha podido sembrar la semilla de la justicia y de los derechos humanos. Su formación a partir de la educación crítica que adquieren dentro de su propia organización como estudiantes, y su participación en el movimiento nacional de las escuelas normales, ha sido clave en el papel que los muchachos han desempeñado en las luchas por la democracia en la entidad.

Los distintos gobiernos, desde Francisco Ruiz Massieu, pasando por Rubén Figueroa, René Juárez, Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre Rivero, han recurrido de manera sistemática y excesiva al uso de la fuerza para tratar de apaciguar los conflictos añejos de la Normal de Ayotzinapa. El método que han seguido es reprimir, asesinar y hasta desaparecer a los hijos de campesinos e indígenas. La escuela ha cargado a costas el estigma de ser un “nido de guerrilleros”. Sus estudiantes han sido catalogados como “vándalos”. Para remarcar el racismo y el desprecio que prevalece entre la clase política iletrada contra los estudiantes pobres, han sido bautizados como ayotzinapos.

Las diferentes corporaciones policiales y el Ejército han ejecutado todo tipo de acciones violentas en contra de los normalistas. Los aparatos de seguridad han sido partícipes de ellas. Su móvil es destruir un proyecto educativo que ha sido la cuna de la conciencia social entre los guerrerenses.

Tanto los gobernadores como los secretarios de Gobernación y los presidentes de la República han tenido encendido el foco rojo de Ayotzinapa. Para ellos, lo que sucede en esa escuela es asunto de Estado.

Por su combatividad y su persistencia ejemplar en defensa de un modelo educativo vinculado con la justicia social, los normalistas rurales han logrado articular un movimiento inédito a nivel na-

cional, aglutinado en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Simultáneamente han reivindicado el proyecto educativo de la Revolución Mexicana.

Las autoridades gubernamentales nunca han reconocido como actores legítimos a los normalistas. Mucho menos les han dado un trato digno como estudiantes. Más bien, desde su visión autoritaria, los han tratado con la bota militar. Según ellos, son delincuentes y guerrilleros.

El casco de la ex hacienda de Ayotzinapa se mantiene incólume por el acero de estos jóvenes que, en medio de las precariedades económicas, mantienen robusto el ideario de la Normal Rural. La mayoría de ellos aprendieron a escribir y a leer acompañando a sus padres en las siembras del hambre. Tienen conocimientos vastos de cómo se cultiva el maíz y de cómo hay que sobrevivir en el cerro, donde no hay trabajo para obtener un ingreso.

Como Tlachinollan, tenemos contacto con los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desde hace una década y media. El acercamiento surgió cuando empezaron a sufrir la más cruda represión de los gobiernos. Fue cuando las autoridades se abocaron a desmantelar la Normal Rural, redujeron la matrícula y achicaron el presupuesto para las becas. Con el pretexto del manejo financiero, buscaron quitar fuerza a las normales, encogiendo su matrícula.

Nuestro acercamiento con ellos se dio paulatinamente. El comité estudiantil nos pidió asesoría

como centro de derechos humanos. Querían que los ayudáramos en el tema legal, para enfrentar la criminalización de la que eran víctimas; que los acompañáramos en la gestión con las autoridades y en el acercamiento y el diálogo con el poder. Buscaban hacer más visible su lucha y establecer alianzas con otros sectores.

Nos vieron como una organización confiable, cercana, con un discurso que se articulaba con su lucha emancipadora en el tema educativo. Eso ayudó bastante a acercarnos. Eso hizo que compañeros de las diferentes áreas de Tlachinollan, como el área de defensa, de fortalecimiento comunitario, de comunicación, y yo mismo, como parte de la dirección de Tlachi, estableciéramos estos vínculos. Participamos en sus eventos, aniversarios, y al mismo tiempo escuchamos sus inquietudes y su problemática.

Nunca pensamos que la situación se fuera a agravar tanto en la escuela, hasta que la policía ejecutó a dos estudiantes de la Normal, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. El 12 de diciembre de 2011, ellos estaban protestando junto con todos los jóvenes de la Raúl Isidro Burgos en la Autopista del Sol. La policía estatal y la federal arremetieron con sus armas contra ellos.

La lucha de los normalistas para ser escuchados y para que no se vulnera su derecho a la educación siempre ha sido dura, fuerte. Pero la acción de fuerza de las policías ese 12 de diciembre fue totalmente desproporcionada, fue letal. Las policías usa-

ron sus armas en contra de ellos, cuando lo único que llevaban los jóvenes para defenderse eran piedras y resorteras.

Después de generar terror para desmovilizar a los normalistas, las autoridades quisieron criminalizarlos. Y luego dismantelar su lucha. Pero las pretensiones gubernamentales se toparon con la realidad. No lograron hacerlo. La formación de los normalistas cincela su carácter de lucha. Su carácter se alimenta de la memoria de los caídos y del proyecto educativo emancipador, para que exista justicia y para que haya verdadera democracia.

La Normal Rural de Ayotzinapa es el núcleo duro de la resistencia en el estado. Para nosotros ha sido ejemplar la forma de autogobierno de estos jóvenes, sus estrategias de organización estudiantil, sus espacios para tomar decisiones. Es muy importante que hayan mantenido este modelo de lucha como lo máspreciado de su vida como normalistas. Esa experiencia ha sido, a su vez, el corazón de lo que es la formación de un estudiante en esa normal.

Después del ataque que sufrieron en 2011, nos quedamos trabajando con ellos. Configuramos un método de trabajo, de acompañamiento, de asesoría, de construcción de una estrategia en la relación con las autoridades. Nos convertimos en sus representantes ante el gobierno del estado y ante el gobierno federal. Después del fuerte agravio que sufrieron con las ejecuciones de sus compañeros, ellos

eran reacios a negociar con el gobierno. Sin embargo, se formó una comisión negociadora para hablar con el gobernador Aguirre Rivero sobre cómo mantener una agenda con las demandas de la Normal que se pudiera atender y cumplir. La idea era que pudiéramos llevar a la mesa de diálogo el tema de la justicia y de las investigaciones.

Lamentablemente, la Procuraduría del estado manoseó mucho el caso de 2011. Hubo hasta intimidaciones a los abogados. En particular, amenazaron fuertemente a Vidulfo Rosales. Le enviaron mensajes anónimos a la oficina de Tlachi en Chilpancingo, donde le advertían que lo iban a hacer pedacitos. Por eso, para evitar que se cumplieran las amenazas, decidimos que Vidulfo saliera del país.

La noche de Iguala

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa nos cimbró como institución. Nos puso a prueba en un momento muy crítico. Nos colocó ante la disyuntiva de replegarnos o salir al frente para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes, tal como los papás y mamás lo han hecho de manera ejemplar.

Fue una prueba que nos marcó como institución civil de derechos humanos. Por el hecho de estar en la región siempre hemos acompañado procesos, comunidades, luchas, movimientos. Ayotzinapa fue una prueba más. En esta ocasión, la prueba consistió en tener que dedicarnos de tiempo completo a este caso.

El compañero Vidulfo, en su momento el compañero Armando, del área de fortalecimiento; el compañero Isidoro, la compañera María Luisa, del área internacional, y un servidor, nos desplazamos hasta la Normal para acompañarlos, para estar ahí. Nunca imaginamos que esto iba a ser un peregrinar largo, difícil y azaroso. Ayotzinapa ha sido una prueba de fuego.

En el momento que sucedieron los hechos, recibimos una llamada de uno de los estudiantes, que nos alertó: “Abel, nos están agrediendo aquí los policías. Nos tienen rodeados. No nos dejan bajar de los autobuses. Vemos que la situación se va a complicar mucho”.

Yo estaba en Tlapa. Llamé a las autoridades en ese momento. Teníamos contacto directo con el sobrino del gobernador, Ernesto Aguirre. Él se comportó como siempre. Nos dijo: “Voy a hablarle al procurador, al secretario de Salud, al secretario de Seguridad y al presidente municipal para que la situación no pase a mayores”.

Quedé en el entendido de que la situación estaba bajo control o iba a estarlo. Sin embargo, después de media noche, me llamó otra vez el estudiante y me informó: “Nos acaban de matar a compañeros. Nos tienen rodeados. Nos van a matar a más. Esta gente está armada. Están los policías. Está todo el mundo contra nosotros. No nos dejan ni recoger al compañero. Ayúdanos. Dile a la autoridad”.

Le expliqué que ya había hablado. Igual volví a telefonar al sobrino del gobernador. Su respuesta fue la misma. La típica respuesta de un burócrata que está al margen de los problemas, sin sensibilidad y sin compromiso para evitar que la situación se desborde. “Ya se fueron las autoridades. Ya están atendiendo el caso. Tenemos conocimiento. Ya están allá el procurador y el secretario de Salud”, me dijo.

La situación se desbordó. Lamentablemente sucedieron hechos atroces. Si las autoridades hubieran actuado en ese momento, si esa noche hubieran tomado las mejores decisiones, no estaríamos en una situación tan grave como la que estamos viviendo. La tragedia fue producto, en parte, de esa negligencia, de esa indolencia, de esa actitud tan irresponsable de las autoridades.

Pero esta situación tan terrible fue resultado, sobre todo, de la colusión que hay entre crimen y actores del Estado, municipales, estatales y cuerpos policiales. Del desorden, de la maraña de intereses que nos han hundido en la violencia cruenta en que vivimos. Una violencia que el crimen organizado ha acumulado y afianzado.

Al siguiente día se fue a Iguala el equipo de abogados de Tlachinollan, con Vidulfo al frente. Llegaron también los compañeros del Centro Morelos, con Manuel Olivares a la cabeza. Fuimos a acompañar a los papás y mamás para hablar con el Ministerio Público sobre lo que había sucedido realmente, a dimensionar

las cosas. Al llegar allá, lo primero con lo que nos topamos fue con una telaraña de grupos pertenecientes al crimen organizado, rodeando a las familias, a los abogados, a los estudiantes. La delincuencia organizada estaba en el centro del enjambre local. Era como si el gobierno estuviera en manos de los que tenían las armas, los cuernos de chivo.

Notamos que la situación estaba muy descompuesta. Se veía un ambiente turbio, una situación sumamente grave. Las autoridades estaban desdibujadas, ausentes. Ese vacío de poder era evidente en las actuaciones de los ministerios públicos. Estaban desbordados, muy rebasados. Su forma de actuar era poco profesional.

Los hechos eran muy graves. Los asesinatos y la ejecución de Julio César Mondragón clavaron una daga en el corazón a las madres y padres. Sin embargo, aún no se dibujaba el escenario atroz que luego viviríamos. Se esperaba que los estudiantes que se habían dispersado y huido a los cerros regresaran a sus casas.

Las autoridades tenían una visión superficial e irresponsable de lo sucedido. El mismo sobrino del gobernador decía sin el menor empacho: "Algunos de los muchachos ya están en sus casas. Nada más nos están haciendo quedar mal. Nos quieren hacer un poco pesado el momento. Ya tenemos información de que algunos están en sus casas, otros escondidos. No es real lo que dicen de que no han llegado y que estén desaparecidos".

En la noche del día siguiente llegaron más padres a buscar a sus hijos. El recuento de los muchachos que no aparecían comenzó a hacerse desde la primera noche. Los abogados armaron la primera lista de desaparecidos. Eran más de 50 estudiantes. Cuando tuvieron la información de que algunos ya habían llegado, la lista se depuró. La cifra era grande, sumamente escandalosa.

La sacudida

La cifra de 43 jóvenes desaparecidos se ha transformado en el símbolo de la infamia en México. La noche de Iguala ha marcado el derrotero de nuestro país. Ni el gobierno federal ni el estatal han hecho investigaciones profesionales. No han brindado atención profesional a las víctimas. Se descubrió, se develó, una estructura delincuencia que nos ha atrapado en las garras del crimen organizado. Creo que eso es lo más cruel.

En Tlacinollan no hubo tiempo para la reflexión sobre Ayotzinapa. Como siempre pasa en Guerrero, nos desbordaron los hechos. Las tragedias nos obligan a actuar, nos obligan a estar, nos obligan a tener que desdoblarnos, a tener que acompañar, a tener que desinstalarnos de nuestro espacio, a tener que estar con la gente.

Bien o mal, Tlacinollan ha labrado su identidad, su personalidad como institución, con el rostro de las madres y padres de los 43. Su lucha, que es emblemática, es un faro de luz en este mar de iniquidad.

Para nuestra institución, Ayotzinapa ha sido un momento de quiebre. Nos obligó a atender este caso como de máxima prioridad. Nos obligó a aceptar que no podíamos seguir trabajando en la inercia, en el hábito constante de solamente atender a la gente que llega. Tuvimos que desdoblar el trabajo de Tlachinollan hacia la Normal.

Fue algo que nos marcó. Hasta la fecha, después de 57 meses de acompañamiento, Tlachi, con otras organizaciones hermanas como el Centro Prodh, Fundar, Serapaz, hemos entendido que tenemos que estar con los padres y madres hasta donde tope.

Hemos transitado un camino inédito. Todos juntos hemos hecho un trabajo valioso. Nos hemos complementado para trabajar tanto en el terreno internacional como en el jurídico. Tejiendo alianzas con organizaciones sociales y sindicales. Impulsando un modelo de atención integral a las víctimas. Ha sido un gran desafío para las mismas organizaciones que acompañamos, porque existe una multiplicidad de situaciones que se tienen que tomar en cuenta para un acompañamiento efectivo a las madres y padres de familia. Ha sido determinante la unidad de los padres y madres, para mantenernos también unidos en torno a ellos y ellas. Siempre nos marcan la pauta para nunca perder el horizonte de dar con el paradero de sus hijos.

La participación de las instancias internacionales, como la CIDH y la ONU, su contribución, ha

sido determinante en esta nueva lucha protagonizada por las madres y padres para que la asistencia técnica internacional forme parte del nuevo modelo de atención a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. El escrutinio internacional, con sus grandes aportes técnicos, ha iluminado mejor el camino para arribar a la verdad. Las madres y los padres saben que la CIDH y la ONU son una garantía para que las investigaciones realizadas por la nueva fiscalía no tuerzan el camino, ni mucho menos se atrevan a reeditar la “verdad histórica”.

La Comuna de Ayotzinapa

Fueron las madres y los padres quienes nos abrieron los ojos para ver el México profundo. El México donde sobreviven las víctimas sin ser atendidas, con su dolor, con su sufrimiento, con un muro de impunidad. Aplastadas por el olvido, por la insolencia y la indolencia de las autoridades. Con la vinculación o la articulación de redes mafiosas.

Los padres y las madres entraron al túnel de la infamia, al túnel de la ignominia. Empezaron a escudriñar la telaraña de intereses que se viven en este sistema devastado por las mafias enquistadas dentro del sistema de justicia, y por los aparatos de seguridad que sirven al mundo empresarial y al crimen organizado.

Ellos y ellas nos ayudaron a descubrir el otro rostro de los derechos humanos. Nos ayudaron a mi-

rar ese otro mundo de las víctimas. A entender que necesitamos otra narrativa, otros paradigmas, otros modelos de trabajo en el terreno de los derechos humanos. Necesitamos saber acompañar a las víctimas, tener más incidencia en la toma de decisiones, más presencia y más fuerza. Porque, hasta ahora, lo que hemos hecho ha mostrado ser insuficiente.

Los padres y las madres nos han hecho renacer en la lucha. Eso es lo más valioso que hemos aprendido con ellos y ellas. En este peregrinar nos han adoptado como hermanos y hermanas de la lucha. O como padres y madres que ven a los estudiantes como sus hijos, los hijos de México. Nos han hecho ser parte de una familia grande que está dispuesta a pelear con todo para que las cosas no sigan igual. De una familia comprometida con la batalla para desmontar estructuras que nos están clavando la espada de la violencia.

Todo este dolor ha sido muy grande. Todo este sufrimiento ha sido enorme. Las lágrimas no alcanzan a llenar las barrancas del olvido, los ríos de la violencia. Pero los padres y madres nos han dado un mensaje de esperanza, nos han envuelto en un nuevo ropaje de lo que es pelear realmente por los derechos humanos, desde el torbellino de la violencia.

Tlachinollan lleva el sello de los 43, sin merecerlo. Ellos y ellas han labrado nuestra identidad en estos últimos años. Nos han enseñado cómo se pelea por los derechos humanos en las calles, en las aveni-

das, en las autopistas, en la PGR, en la protesta permanente, al encarar a la autoridad, al desenmascarar sus malas intenciones, al denunciar internacionalmente y saberse plantar en los foros internacionales. Nos han enseñado a nunca desfallecer, a nunca arrodarse, a nunca sucumbir, mucho menos claudicar. A mantener siempre ese sentido de hermandad, de acuerpamiento y de un colectivo que ha logrado formar la comuna de Ayotzinapa.

Los 43 son 43 porque están juntos. Su lucha no es separada. Los padres y madres nunca la van a entender como algo separado. Nosotros, como defensores y defensoras, tenemos que entender que nuestra lucha va a ser fuerte cuando sigamos el ejemplo de los 43, peleando como hermanos y hermanas en aras de que haya un cambio profundo en nuestro país.

Un proyecto

Al igual que les ha sucedido a los estudiantes de Ayotzinapa, en Tlachinollan hemos vivido momentos muy críticos. No sólo se nos descalifica y se estigmatiza nuestro trabajo; también hemos enfrentado amenazas que nos han colocado en el filo de la navaja. Eso nos ha hermanado desde hace muchos años. Nos ha convertido en aliados estratégicos en la lucha por la vigencia del proyecto histórico de las normales rurales.

Se trata de un proyecto educativo que busca formar maestros que tengan la sensibilidad y el compromiso para centrar su labor docente en la vida

comunitaria, en esa cultura. Un proyecto que valore la cercanía con los niños y niñas indígenas, que son los más olvidados. Un proyecto en el que realmente puedan ser sembradores de una nueva educación, cimentada en la libertad, en la democracia, en la justicia, en la igualdad. Eso nos ha unido. Eso nos ha marcado en el recorrido conjunto que hemos hecho a lo largo de varios años.

El GIEI

El aporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH para el caso Ayotzinapa (GIEI) fue una luz en el túnel de la impunidad. Nos mostró la importancia que tiene la participación de expertos internacionales para adentrarse en los casos en que las autoridades se empeñan en encubrir a los responsables y mantener intocados los intereses delincuenciales. En nuestro país la población ha dejado de confiar en los ministerios públicos. En lugar de desempeñarse como profesionales de la investigación, se han transformado en personajes siniestros que actúan bajo consigna. El papel que desempeñó Tomás Zerón como director de la Agencia de Investigación Criminal fue para maquinar la trama del basurero de Cocula. Actuó violentando los protocolos establecidos para las investigaciones ministeriales. Violentó los derechos del detenido y armó la “verdad histórica” a base de torturas.

En la investigación que hizo el GIEI se constató cómo, desde que los estudiantes salieron a Chil-

pancingo y a Iguala, fueron monitoreados por el Ejército, las policías y los políticos. Sabían que, históricamente, los jóvenes han tomado autobuses para trasladarse a las movilizaciones, lo mismo para invitar a participar a otras normales que para ir a la Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre.

Lo que generó malestar a los grupos de poder fue que los estudiantes agarraron un autobús que, supuestamente, estaba adaptado para llevar droga a Estados Unidos. Lo tomaron sin saber. Su plan no era ir a la central de autobuses de Iguala a tomar camiones. Lo que pretendían era tomar los que iban de paso en los tramos de la carretera de Iguala a Chilpancingo y de Iguala a México. Ahí es donde ellos pusieron sus dos retenes. Pero, como el chofer de un autobús pidió a los jóvenes que le permitieran bajar a los pasajeros en la terminal, accedieron, con tal de llevarse la unidad.

Al llegar a la terminal, el chofer se bajó del vehículo y encerró a los estudiantes. Ellos marcaron por teléfono a sus compañeros para avisarles que los tenían encerrados. Los muchachos que estaban en el retén se trasladaron a la central de autobuses y liberaron a sus compañeros. Y, ya ahí, tomaron más autobuses.

Uno de esos autobuses fue el motivo de la discordia. Alertó tanto a los policías como a los grupos de la delincuencia, al grado de que emprendieron la persecución contra los estudiantes. El desenlace fue fatal, porque en Iguala la urdimbre delincencial tiene más

poder que las propias autoridades. Todos sabemos que Iguala, la ciudad del oro, se ha transformado en el centro de operaciones para el traslado de droga hacia Chicago. Existen varias denuncias en Estados Unidos que describen cómo se da el trasiego de la droga en estas ciudades. Se cuenta con información de que varios detenidos en la ciudad de Chicago confirmaron que Guerreros Unidos trasladaba droga de Iguala a Chicago en autobuses de transporte público. Falta profundizar más en esta línea de investigación.

Los dos informes del GIEI muestran las fallas que hay en el sistema de justicia. Sus recomendaciones son precisas con respecto a las líneas que se tienen que retomar para reencauzar la investigación. Su aporte es invaluable porque lograron desmontar la “verdad histórica” y, con la amplia experiencia que tienen como investigadoras e investigadores, lograron desentrañar todas las inconsistencias que contribuyeron a enturbiar y afianzar más su teoría sobre la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula. El GIEI demostró que nuestro sistema de procuración de justicia se encuentra capturado por grupos de interés que responden a los dictados de fuerzas oscuras vinculadas a la macrocriminalidad.

En la medida que avanzaron las investigaciones del GIEI, se fue derrumbando la versión oficial del basurero de Cocula. Por eso el gobierno federal apresuró la salida del GIEI, para evitar el colapso de su “verdad histórica”.

La innovadora sentencia dictada por los magistrados del primer Tribunal Colegiado del Decimonoeno circuito con sede en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la creación de una Comisión Especial de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala), es una grieta que dañó estructuralmente la narrativa del basurero de Cocula, defendida a ultranza por Peña Nieto. El pacto de impunidad que se mantiene intocado entre las altas esferas del poder sigue siendo el nudo ciego que impide saber, con toda certeza, quiénes desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Antonio Vivar Díaz y Ayotzinapa

La lucha por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un huracán que sacudió al conjunto de la sociedad guerrerense. Miles de jóvenes se involucraron activamente en esta gesta. Antonio Vivar Díaz fue uno de ellos. A esta causa dedicó mucho de su tiempo y sus empeños. Por ella ofrendó la vida.

En la Montaña tenemos la necesidad de formar jóvenes que se nutran de los saberes locales y se formen en la comunidad, para que puedan ser profesionistas al servicio de ella. La UPN ha servido en la región como institución educativa para formar a los maestros indígenas en un modelo educativo que se nutre de las comunidades, de sus enseñanzas prácticas en el trabajo, en la asamblea, en la tierra. Por eso impulsamos la creación de una licenciatura en desarrollo comunitario, para ampliar la oferta educativa.

Los chavos que estudian cursos de educación superior regresan a Tlapa y se decepcionan. Les ofrecen en el Tecnológico que van a ser ingenieros civiles y al final no pueden ser ingenieros. Les venden la idea de que van a ser contadores y al final no son contadores. Por eso dijimos: “Queremos que esta carrera se focalice en los jóvenes de la Montaña, en Cochoapa, en Metlatónoc”.

Llevamos ya diez años con ella. La primera generación de egresados fue muy importante. Llegaron a cursarla más de 150 jóvenes de los 15 municipios de la Montaña Alta. Había mixtecos, tlapanecos, nahuas.

En esa primera generación llegó Antonio Viver. Era un chavo del barrio de San Antonio de Tlapa. Sus padres son mixtecos. Aprendió a trabajar el pan. Decíamos que era chavo banda. Era muy conocido entre la banda de San Antonio.

Su incorporación a la escuela fue muy interesante. Le sirvieron mucho las prácticas de campo. En la primera que salimos fuimos a Atlamajalcingo del Monte; se topó con su cultura. Se sorprendió. “De aquí es mi papá y no sabía cómo era la cultura”, confesó. Él y sus compañeros subieron al cerro La Purísima, donde estuvo Vicente Guerrero resistiendo en la época de la Independencia.

Es una historia apasionante. Eran los años más aguerridos en la lucha independentista. Camino a Atlamajalcingo, Vicente Guerrero encontró en los

indígenas mixtecos y tlapanecos a los mejores aliados de su lucha. Ahí dejó como lugarteniente al indígena mixteco Juan del Carmen, originario de Xonacatlán. Juan le hizo la guerra a las tropas realistas que llegaron por el lado de Amapilca y se enfrentaron con los indígenas. Los testimonios nos describen cómo los mixtecos de varias comunidades circunvecinas se organizaron y subieron al cerro para hacer la guerra contra los enemigos de la patria. En la cima del cerro, los indígenas llevaron las coyundas de los animales para amarrar grandes piedras que pudieran ser lanzadas en el momento en que las fuerzas realistas escalaban la colina.

En esta batalla campal fueron derrotados los gachupines. Sin embargo, uno de los soldados, que quedó herido, alcanzó a accionar su arma y mató a Juan del Carmen. En su lugar quedó Mariano Galván, otro indígena mixteco. El pueblo de Xonacatlán sigue honrando la memoria de Juan del Carmen, quien fue sepultado en la cima del cerro, donde Vicente Guerrero continuó la lucha por la Independencia. Los principales del pueblo conservan con mucho orgullo documentos históricos, un pequeño cañón y municiones de aquella época gloriosa.

Antonio vio el escrito que dejó firmado Vicente Guerrero de puño y letra, que decía: “La nación queda en deuda con Atlamajalcingo”. Luego, en la práctica de campo, empezamos a hablar del territorio, al tiempo que lo recorríamos. Visitamos los

puntos trinos. Luego conversamos sobre la presencia de las mineras. Fue una sacudida para Toño. Empezó a decir: “Tenemos que hacer algo. Los que estamos en Tlapa no conocemos nada y resulta que nuestra Montaña tiene mucha historia, pero al mismo tiempo tiene mucha riqueza”.

Se organizó con sus compañeros y empezaron a ir a las comunidades. En algunas, de Zapotitlán Tablas, proyectaban un video sobre el impacto de las mineras en los territorios indígenas. Luego hablaba él. Eso le dio mucha presencia. Descubrió que tenía un lenguaje cercano a la gente, no solamente a los chavos de la ciudad. Eso le ayudó mucho. Fue un chavo que se tiró hacia la práctica, más que a la escuela. Les decíamos: “Está bien, chavos, vayan a la comunidad y no al salón”.

Cuando pasó lo de Ayotzinapa, Toño quedó impactado. De inmediato se fue para allá. Se quedó en la escuela varios días. Se formó la Asamblea Nacional Popular (ANP) y él se integró. Él traía a Tlapa todos los acuerdos que tomaban en la ANP. Cuando se decidió que se iban a tomar los ayuntamientos, a formar las asambleas y los comités municipales, Toño encabezó la lucha. Fue el constructor de toda esta resistencia. Dejó la escuela en segundo plano.

Ahí yo descubrí a Toño como el dirigente juvenil. Era una persona con mucho carisma. Siempre iba a las comunidades. Siempre estaba al frente. Dio vida al movimiento. Aunque fue mi alumno, se puede decir que, en verdad, yo fui su alumno.

En pleno movimiento me decía: “Maestro, ¿qué pasó? Usted nos hablaba de la importancia de los derechos humanos y de que los derechos humanos están en las comunidades. Tenemos que irnos a las comunidades. Tenemos que irnos con los comisarios”. Yo le respondía que eso estaba bien, “nada más que tenemos nuestras limitaciones”. Él sabía que Tlachinollan acompañaba a los 43, que nos movilizábamos con ellos. Pero, según él, nuestro compromiso con la gente estaba muy corto. Él sí se entregó con todo.

Toño abrió camino para los chavos y las organizaciones de Tlapa. Logró dar un peso muy fuerte a la lucha de los 43. Tlapa fue el ayuntamiento que duró más meses tomado, desde finales de octubre hasta principios de junio, antes de las elecciones. Todos esos meses el palacio municipal estuvo ocupado por el movimiento, hasta que se formaron los grupos de choque de los partidos políticos, del PRI, el PT y el PRD, y fueron a desalojarlos.

Él entendió de qué se trataba. Hay una foto que muestra el momento en el que estos grupos de choque llegaron al ayuntamiento para desalojarlo por medio de la violencia. La gente no los enfrentó. Se hizo a un lado. Los golpeadores les quemaron todas sus cosas y ocuparon el corredor del ayuntamiento. En esa imagen se ve el perfil de Toño, iluminado por la fogata en la que arden las pertenencias de quienes habían tomado la Presidencia. Él no les hizo frente. Se replegó, pero no se fue.

Después del desalojo, Toño siguió luchando. Incluso en el proceso electoral. Siguió protestando en contra de las elecciones estatales. Para él, eran una farsa.

El 7 de junio de 2015, en plena jornada electoral, ante el incendio de una camioneta del Instituto Nacional Electoral, la Policía Federal, apostada en las instalaciones del 27° Batallón de Infantería de Tlapa, desplegó un operativo para detener a siete personas, entre ellas un menor de edad, que se encontraban cerca de la CETEG. Para los policías, se trataba de personas sospechosas. Las detuvo y las trasladó al Batallón para llevárselas en un helicóptero de la Marina al puerto de Acapulco.

Los vecinos de la colonia Tepeyac protestaron y retuvieron a varios elementos de la Policía Federal, quienes se llevaban una camioneta de la CETEG. Decidieron encerrarlos en una capilla para exigir el regreso de las personas detenidas. En cuanto las autoridades federales trasladaron a la Casa Guerrero a las siete personas y las presentaron ante el gobernador interino para sacarse una fotografía, en ese momento, en un operativo conjunto de la Policía Federal y el Ejército, arremetieron contra la población civil y ejecutaron a Antonio Vivar Díaz. En esa trifulca, un policía de los que estaban detenidos en la capilla le dio el tiro de gracia. Fue una noche de terror, con el pretexto de garantizar la seguridad y restablecer el orden.

Ése fue el Toño que todos lloramos, que todos añoramos. El Toño tocado por la tragedia de Ayotzi-

napa. Para nosotros es un ícono en la Montaña. Su corta vida es una condensación de lo que es un joven indígena dispuesto a todo.

Vivo en el corazón

Los hechos de Iguala no habrían sucedido si el Estado mexicano hubiera investigado cabalmente los hechos previos de violencia en la región. La desaparición y ejecución de los activistas de la Unión Popular, la masacre en el Cereso, las incursiones armadas en Carrizalillo: todo fue tolerado. La entidad quedó sumida en el único Estado de derecho que realmente existe ahí: el estado de impunidad. Si los policías de Iguala dispararon contra autobuses de estudiantes fue porque sabían que nadie los sancionaría, como nadie ha castigado a los agentes que asesinaron y torturaron normalistas el 12 de diciembre de 2011. Para el poder, los jóvenes normalistas –reducidos al denigrante epíteto de ayotzinapos– no son ni siquiera daños colaterales: son vidas prescindibles, como lo fueron para el Ejército los universitarios del 68.

Esta situación no cambiará mientras el Estado procure impunidad. Al no esclarecerse las ejecuciones y al no sancionarse a los responsables, el mensaje que se manda desde las alturas es claro: la muerte de estudiantes, defensores y activistas es aceptable. Cuando se analiza la acción de la justicia guerrerense, el contraste es brutal. Mientras que nadie se encuentra en prisión por muchos crímenes cometidos

contra estudiantes y activistas populares, más de una decena de figuras claves de la policía comunitaria fueron encarcelados durante años (hoy ya están libres), acusados por delitos tan graves como el terrorismo. Varios fueron encerrados en cárceles federales. Para los policías comunitarios, acusaciones desproporcionadas y prisiones de alta seguridad; para quienes matan líderes sociales, impunidad total.

En sus dos informes sobre la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el GIEI mostró la colusión existente entre las corporaciones policiales, el Ejército y autoridades civiles con el crimen organizado para perpetrar la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Desafortunadamente, este caso no es un hecho aislado, mucho menos circunscrito a un municipio, ni a las policías municipales. Es un problema de fondo, con mucha raíz, que se ha incubado por años.

Ayotzinapa es un movimiento ejemplar que coloca a las víctimas de la violencia en el centro de la acción política del Estado. Ayotzinapa vive en el corazón de la patria.

XII

DESPOJO Y RESISTENCIA

Un estado de seguridad nacional

Tlachinollan nació en un contexto de mucha violencia, de discriminación hacia los pueblos indígenas, de militarización. En el marco de una guerra muy cruenta por la presencia del Ejército, que llegó en los años 60 a Guerrero a destruir el tejido comunitario, a dismantelar los movimientos sociales y enfrentar las expresiones armadas.

Desde hace 25 años hemos ido aprendiendo cómo luchan los pueblos, cómo se organizan, cómo se defienden, cómo tienen sus sistemas normativos y los hacen valer. Hemos ido tomando nota de cómo defienden su territorio y enfrentan a las fuerzas represivas del Estado. Hemos visto cómo el Estado se va reconfigurando desde una visión militarista, privatizadora y desde una guerra de conquista o de saqueo.

Guerrero es uno de los estados considerados de seguridad nacional. Aquí surgió una insurgencia armada que puso en jaque al Estado y lo obligó a hacer cambios a nivel nacional en los que se ha tenido que aceptar la pluralidad de los partidos.

Sin embargo, en Guerrero esos cambios han sido, a final de cuentas, una simulación de la democracia profunda a la que los pueblos aspiran. Lo que hay en la entidad es una democracia de escritorio y políticos que no están comprometidos con los pueblos. Son políticos de la burocracia y de los edificios suntuosos, pero no del campo, no del surco, no de la parcela.

En Iguala hay dos instalaciones militares: una de fuerzas especiales y la zona militar. ¿Por qué se pusieron ahí? Porque a finales de los 70s y 80s hubo brotes guerrilleros. En esa ciudad estuvo encarcelado el guerrillero Genaro Vázquez, hasta que un comando lo liberó. En el marco de una estrategia de contrainsurgencia, construyeron instalaciones militares para desactivar cualquier foco armado en la región de Iguala.

El estado se fue militarizando, pero no para garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino para desactivar a las organizaciones populares y a los grupos armados. Como en Chiapas y otras regiones del país, la militarización sirvió para desmovilizar, atemorizar y desactivar las protestas sociales.

Llegó el Ejército y dismanteló a la guerrilla. Pero, en lugar de irse, sigue aquí. Se quedó en las regiones que hoy están atestadas de droga. Me refiero a la Costa Grande, Zihuatanejo, todo el corredor hasta Acapulco. Igual en Atoyac. Y en el corredor de la droga en la parte de la Montaña, de la Sierra, en Tlacotepec, Chichihualco. Todo eso va a dar a Aca-

pulco, que es el centro estratégico de la droga a nivel de Centroamérica. Y a Iguala, que es la bocasierra de Tlacotepec, que es la salida para Morelos, para la Tierra Caliente de Michoacán y, obviamente, la salida para la Ciudad de México.

La situación de los pueblos es muy difícil. Deben enfrentar no exclusivamente a los políticos, sino también a los narcopolíticos; ya no solamente tienen enfrente al Ejército, sino a los narcomilitares y a los narcoparamilitares. Los actores se han diversificado, sobre todo los actores armados, tanto los estatales como los de la misma población. Eso vuelve más compleja la situación.

Un hecho determinante en esta descomposición social y política ha sido la presencia del Ejército en las comunidades indígenas. ¿Cuál ha sido el saldo de esta presencia con respecto a la seguridad de los pueblos? Desde que llegó el Ejército a Guerrero, se narcotizó la economía del estado y se transformó en una entidad más violenta de lo que ya era. La venta de armas se convirtió en un gran negocio para los militares. El Ejército ha sido una fuerza de ocupación, parte de una estrategia de contrainsurgencia, de desmovilización y de contención social. También un actor económico en el que parte de sus integrantes están metidos en la economía criminal.

Los militares no solamente llegaron a Guerrero y arrasaron comunidades, prendieron fuego a casas, mataron campesinos e indígenas y violaron muje-

res. También se instalaron en regiones estratégicas. Ocuparon esos territorios e impulsaron la siembra de enervantes. Ése es el problema: este control territorial no solamente ha servido para impedir la movilización y la protesta, sino también para imponer un modelo de economía criminal que ha ido extendiéndose a varias regiones.

La geografía de la entidad se ha transformado en una geografía propicia para la economía criminal. Es un estado muy pobre. La población no tiene acceso a salud ni a educación. Pero es el principal productor y distribuidor de amapola en América Latina.

¿Cómo es posible que esas regiones, que son tan pobres, sean las que están nutriendo de materia prima al gran negocio del narcotráfico? ¿Cómo pensar que la Sierra de Guerrero es un centro estratégico para las ciudades de Chicago y Nueva York? ¿Qué sucede para que la migración guerrerense participe en el trasiego de la droga? ¿Cómo es que la Montaña sigue siendo el primer centro productor de amapola en el país? ¿Cómo es que allí están ubicados los municipios más pobres de México: Cochoapa, Metlatónoc, Acatepec, donde florece la amapola?

Curiosamente, eso sucede mientras la Montaña y la Sierra están militarizadas. Son regiones de alta producción de enervantes, narcotizadas. ¿Cómo pensar este proceso en el que, de manera simultánea, se ha ido narcotizando y militarizando el estado, y se han ido privatizando los territorios?

El Ejército se transformó en facilitador de estos grandes negocios. Con su apoyo, los caciques se reubicaron políticamente en la entidad. La presencia de los militares sirvió para contener el descontento social.

Esta lógica de un Estado criminal, donde el Ejército es la punta de lanza para el control territorial, ha provocado que los pueblos emerjan, igual que siempre, como actores que tienen que defenderse por sí mismos. Para controlar sus territorios, necesitan poner un dique a los actores armados estatales y del narcotráfico.

En Guerrero, las policías avasallan a los pueblos. Antes, con el gobernador Rubén Figueroa Figueroa, eran pistoleros a los que el gobernador les dio credencial de comandantes. La carrera de un policía se medía por el número de personas que había matado. Ahora varios de ellos se han ido a las filas del sicariato.

Los jefes de las bandas de la delincuencia disputan el territorio a los pueblos. No se lo pelean a los militares, ni a las autoridades municipales. No. Se lo quieren arrebatar a los pueblos.

Tierra Caliente y la Costa Grande están controladas por dos grupos de la delincuencia. Unos son los Tequileros. Otros, Guerreros Unidos. Otros más son los Rojos, y otros los Ardillos. La gente los identifica con partidos políticos. Dice que los Ardillos son del grupo del PRD, y los Rojos son del PRI. Los partidos políticos se reparten el negocio.

No es una novela de Carlos Montemayor. *Guerra en el paraíso*, la novela de Montemayor, fue real. Lo que estamos viviendo es la cruda realidad. La delincuencia y las bandas del narcotráfico quieren apoderarse de los territorios.

La situación es muy compleja. Los actores armados en el campo están marcando el rumbo de los acontecimientos. No hay más que ver las noticias en Guerrero. Dan cuenta de muertos, muertos y más muertos. Ahí está el Ejército y la inseguridad sigue igual. El sistema de justicia y seguridad está colapsado. Su raíz está podrida. Encubren intereses macro delincuenciales.

De los 81 municipios de la entidad, sólo 9 de la Montaña y 2 de la Costa Chica se mantienen al margen de la disputa por el trasiego de la droga y el control de los corredores carreteros. En estos 70 municipios no son los presidentes municipales ni las corporaciones policiales las que hacen valer la ley. Son los jefes de las bandas criminales.

En los 16 municipios de la Zona Norte y los 9 de la Tierra Caliente, estos grupos han impuesto su poder sanguinario, asesinando y secuestrando masivamente a la población. Acapulco es el centro neurálgico del narcopoder. Los asesinatos de varios agentes del estado, no sólo en Acapulco, sino en Chilapa, Zihuatanejo y Tierra Caliente, dejan entrever la densidad del entramado delincencial que existe en la entidad.

La realidad es que los narcotraficantes, con el apoyo de los policías, están tomando el control territorial. Son los actores armados los que están determinando quién es el que gobierna cada municipio.

En el armazón delincencial no solamente participan los policías municipales. Es un entramado dentro de las instituciones, en el que están metidas corporaciones militares y policiacas. No son entes inmaculados, aunque se les quiera presentar como tales.

Existe una red subterránea de intereses, donde los militares metidos en el tráfico de drogas son muy poderosos. Hacen un trabajo de contención, de contrainsurgencia y, al mismo tiempo, otro delincencial, a través de la economía criminal. Ahí están los ejemplos del general Jesús Gutiérrez Rebollo y del general Mario Arturo Acosta Chaparro, acusados de narcotráfico. Eran parte de la telaraña del instituto castrense.

Es algo que preocupa mucho. Explicaba el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, que para él, el problema del narcotráfico no está solamente en los grupos criminales que controlan territorios, sino en la misma estructura del poder político, en el Estado. Eso le ha costado que lo descalifiquen y ha generado una mayor crispación con la Iglesia. El mismo obispo dijo: "Yo he hablado ya con los grupos de la delincuencia. He estado con ellos en Tlacotepec. He estado con ellos en la parte de Chichihualco, en Corral de Piedra. Casi con todos los grupos he habla-

do. Solamente no he podido hablar con un grupo, el que está vinculado con el poder político del Estado". Y añadió: "Esto no se va a poder arrancar, porque la Sierra es estratégica para los políticos en términos económicos, en términos militares, en términos de todo el entramado económico, que hay igualmente en la Montaña".

La Parota

Uno de los episodios centrales en la lucha de los pueblos guerrerenses en contra del despojo se dio en la parte rural del municipio de Acapulco. Lo protagonizó el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP). El CECOP es un movimiento de campesinos que han luchado por más de 12 años contra una presa hidroeléctrica en el río Papagayo. Generaron un movimiento de resistencia en contra de la hidroeléctrica a base de asambleas comunitarias. Impugnaron con éxito la construcción de la presa. Han ganado todas las asambleas y han salido victoriosos en los tribunales.

Hicieron una asamblea regional para consultar a los pueblos si aceptaban o no la presa hidroeléctrica por usos y costumbres. Llevaron a expertos de la UNAM. Convocaron a un representante de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que fuera a dar su punto de vista sobre las bondades de la presa. Invitaron a los expertos para que dijeran cuáles eran los riesgos de su construcción.

La gente decidió, en una asamblea de más de 3 mil personas, el ¡NO a la presa hidroeléctrica! Fue un gran ejercicio democrático.

Los del CECOP siguieron luchando, ahora contra los empresarios gravilleros. Alrededor del río hay empresas apoyadas por las autoridades municipales y estatales para explotar todo el material pétreo. Esas compañías destruyen el río y la carretera. El CECOP metió amparos porque esas compañías estaban ocupando sus tierras comunales. Ganaron los amparos, se dictaron medidas cautelares y prohibieron a uno de los gravilleros que siguiera explotando el río.

Eso enojó mucho a los empresarios, a sus compadres en la política, y a elementos del Ejército. El empresario armó a grupos de pistoleros, que se dedicaron a dividir las comunidades.

En una fiesta del pueblo, a comienzos de enero de 2018, se dio un enfrentamiento entre gente armada del empresario y policías comunitarias. El CECOP había creado su policía comunitaria para enfrentar el problema de inseguridad y defenderse de los grupos de gatilleros de los empresarios. La confrontación se dio en la comunidad de La Concepción. Murieron dos policías comunitarios y seis personas del grupo del comisario de La Concepción.

Como a las 3 de la mañana, cuando estaba el baile en la cancha del pueblo, dos policías comunitarios siguieron a un sujeto que corría hacia la comisaría. Antes de que entrara, lo alcanzaron y lo retuvieron. Cuando se lo llevaban, una persona de las que

estaban bebiendo dentro de la comisaría sacó su pistola y les disparó. En ese momento los compañeros de la CRAC corrieron para apoyarlos. Fue cuando se desató la balacera entre la gente de la comisaría y los comunitarios.

A las 11 de la mañana llegaron policías del estado, bien armados. Hablaron con el comisario y también con Marco Antonio Suástegui. Luego llegaron policías ministeriales. En el pueblo varias personas fueron al cerro a esconderse porque tenían que les hicieran algo.

La presencia de los policías no fue tanto para ayudar a las familias de los asesinados, sino para hacer frente a los comunitarios.

Cuando ya estaban listos los cuerpos para trasladarlos al Semefo, apareció un helicóptero que empezó a volar muy bajito sobre la comandancia de la CRAC. En ese rato llegaron más camionetas con policías, tanto del estado como ministeriales. La policía disparó. Fue como una señal. La gente del gobierno comenzó a disparar también. Ellos eran muchos, llegaron en más de 25 camionetas. Los policías comunitarios eran pocos, no pasaban de 20.

A Crescenciano Everardo, el comandante de la comunitaria, lo hincaron con las manos en la cabeza. Lo arrastraron y lo golpearon. Apareció muerto. Eso mismo les sucedió a Alexis el *Coco* y al *Monty*. También los mataron. Varias compañeras se metieron a la comandancia de la Policía Comunita-

ria, donde estaban tirados los cuerpos de Ulises y de Eusebio, los dos policías que habían asesinado en la madrugada. Hasta ahí se metieron los policías para sacar a empujones a las señoras. Luego entraron a las casas de los compañeros del CECOP. Se metían gritando: “¿Dónde están las armas?” Sin pedir permiso, esculcaban todo.

Desarmaron a todos los policías de la CRAC, los arrastraron y les arrancaron su uniforme. A Marco Antonio lo esposaron y lo aventaron a una camioneta. Lo llevaron al cerro y lo torturaron. Le taparon la cara para golpearlo con un palo de moringa en las asentaderas, hasta que perdió el conocimiento. Lo obligaron a disparar. Le dijeron que lo iban a chingar. Que de ésta no se escapaba, porque ya debía muchas.

El gobierno los presentó como delincuentes fuertemente armados, que se dedicaban a vender drogas. El gobierno quería venganza y meter a la cárcel a Marco Antonio con 24 compañeros más del CECOP.

Los integrantes del movimiento de La Parota trabajan en el campo y apenas cosechan maíz para ir comiendo en el año. El gobierno no los apoya para tener trabajo y producir mejor sus predios. No los pueden ver porque no permitieron que la CFE entrara a sus tierras para construir la hidroeléctrica. Los del CECOP quieren que respeten sus territorios y que el gobierno los deje en paz. Quieren que acabe la pesadilla en el Acapulco donde viven los pobres.

Finalmente, en junio de 2019 quedaron libres los presos de La Parota. El juicio oral concluyó con el fallo absolutorio de cada uno de los compañeros detenidos. Los jueces resolvieron que el Ministerio Público no logró probar la responsabilidad plena de los integrantes del CECOP en homicidio de seis civiles, durante el enfrentamiento de la madrugada del 7 de enero de 2018. Los jueces hicieron énfasis en la deficiente investigación del Ministerio Público; el tribunal expresó sus preocupaciones por la indagatoria. Además, hubo tortura y pruebas que se extrajeron de manera ilegal. Los de La Parota estuvieron detenidos muchos días en la fiscalía y la defensa no pudo entrar para hablar con ellos. La investigación irregular cayó por su propio peso.

Las mineras

En Guerrero, a algunas mineras no les ha quedado otra alternativa que pactar con el crimen organizado. Ya lo hicieron con Carrizalillo y también con Campo Morado. Esto está pasando con Media Luna en Coquila, cerca de Iguala. Para seguir explotando Media Luna, los de Goldcorp tuvieron que pactar con los grupos de la delincuencia organizada. Ahora estos se encargan de la seguridad de la mina y también forman parte de los concesionarios que se encargan de trasladar los materiales que desechan por el lavado del mineral. Ante las disputas que se han multiplicado en la zona norte y Tierra Caliente por los dife-

rentes grupos de la delincuencia organizada, los empresarios mineros prefieren llegar a acuerdos con los jefes de éstas organizaciones para proteger sus negocios y asegurar el traslado del personal. Las cuotas no sólo se fijan para las empresas, sino también para los trabajadores eventuales y los sindicalizados.

En Carrizalillo hace 12 años se conformó la Asamblea Permanente de Ejidatarios de Carrizalillo (APEC) para hacer frente a la empresa minera Luismin, la filial en México del consorcio minero Goldcorp. Los ejidatarios decidieron bloquear la mina ante el pago irrisorio de mil pesos por hectárea de renta anual. Según la empresa minera, ya era dueña de 150 hectáreas que supuestamente un grupo de ejidatarios le había vendido. Los mismos dueños de la tierra reconocían a la empresa como la nueva titular de estas tierras. Se lamentaban y al mismo tiempo se resignaban: “Nos atontamos, pero ya ni modo. Ahora por lo menos vamos a pedirles una mejor renta”. Pero esa venta no tenía sustento legal. Se trató más bien de un atraco.

Una parte de los ejidatarios, cansados de tanto engaño y de los abusos del empresario, conformaron la APEC para demostrar fuerza en la negociación. Ante el bloqueo en la entrada de la mina, el gobernador, Zeferino Torreblanca, en coordinación con el presidente municipal de Zumpango del Río, envió policías para desalojarlos. Golpearon a las familias y a los niños. Pensaron que con eso los iban a

espantar. Pero la gente se volvió a reorganizar. Casi todo el pueblo se plantó nuevamente en la entrada de la mina y se autonombró como la comunidad del nuevo Carrizalillo del Oro.

La gente solicitó nuestro apoyo. Los visitamos y escuchamos las innumerables quejas de los campesinos pobres que se quedaron sin tierras para sembrar el maíz por la llegada de la mina. Les ayudamos a recuperar sus terrenos que la minera reclamaba como suyos. Nunca hubo una asamblea de los ejidatarios donde se planteara la venta de sus tierras. Lo único que existía era un convenio particular. Los ejidatarios fortalecieron su movimiento con la solidaridad de varias organizaciones y la presencia de los diputados federales de Guerrero. Su apoyo fue determinante, porque políticamente se equilibraron las fuerzas ante la postura del gobernador de no reconocer a la APEC como un interlocutor legítimo.

Después de varias reuniones con el representante de la empresa, se llegó al acuerdo de que se pagarían 14 mil pesos de renta anual por hectárea; en un inicio los ejidatarios pedían 100 mil pesos por hectárea. La empresa se tiraba a los vidrios y decía: “¡No!, esa cantidad es impagable. Ya no me conviene”. Teníamos información de que ese año la compañía tenía proyectado obtener ganancias por 129 mil millones de dólares, como producto de la extracción de 200 mil onzas de oro. Al final se negociaron los 14 mil pesos por hectárea y un plan de desarrollo co-

munitario financiado por la minera. Se comprometieron a pavimentar la carretera hasta la comunidad, a instalar un taller de costura para las mujeres. A los alumnos de bachillerato se les pagaría una beca de mil pesos, y de dos mil a los de licenciatura. También se comprometieron a instalar un centro de cómputo. Los campesinos pelearon también que se construyera un tanque de almacenamiento para el agua potable, porque, a diferencia de la mina, que extrae el agua del río Balsas, la comunidad carecía de este líquido vital, entre otros acuerdos.

Consiguieron estos logros cuando la mina ya estaba operando dentro de la comunidad y no había más que tratar de contener los daños. Pero para ese momento la devastación ya era criminal. La explotación acabó con sus cerros sagrados, donde había vestigios de la cultura olmeca. Cerros con un sinnúmero de valores históricos y arqueológicos. Ellos vivían de la producción del mezcal. La mina acabó con el maguey. Acabó con su modo de vida campesina. A cambio, les empezó a pagar los 14 mil.

Llegamos a apoyar lo que ellos ya habían decidido. La mina ya estaba en funcionamiento. Lo que peleaban era que la mina no los fuera a matar de hambre y que con el tiempo los expulsara de su territorio. Nunca imaginaron la devastación que causaría este modelo de explotación a cielo abierto. Tampoco previeron que con el mejoramiento en el pago de sus rentas iban a llegar de la mano grupos de la delincuencia

organizada. Al poco tiempo los ejidatarios de Carrizalillo se dividieron y varios se pasaron a las filas del crimen organizado, como forma de proteger su precario patrimonio. Todo fue en vano, porque el pacto con la delincuencia fue como vender su alma al diablo. Empezaron los asesinatos y los desplazamientos de las familias. Al final de cuentas se quedó la minera y se asentaron los grupos del crimen organizado.

Como Tlachinollan, una vez que logramos la firma del convenio nos retiramos. Se brindaba el apoyo puntual para las negociaciones que se tenían que realizar anualmente con la empresa. Compañeros de otras organizaciones se comprometieron a dar seguimiento a los acuerdos. Lograron establecer un esquema de pagos cuyo referente no era la moneda nacional, sino la onza troy. Este tránsito en el esquema de negociación ha permitido que varios ejidatarios obtengan más de un millón de pesos por la renta anual de sus tierras. Esta bonanza ha costado vidas y, lo que es peor, varias familias ya no pueden vivir en Carrizalillo. Algunos ejidatarios andan a salto de mata, mientras la minera se da el lujo de difundir con sus socios que es una empresa socialmente responsable, que cuida el medio ambiente y busca el mejoramiento económico de la población y un desarrollo armónico.

Actualmente hay como 21 familias desplazadas por este conflicto. También está el cráter de la mina a cielo abierto. El pueblo está totalmente destruido. Las obras que ganaron no tienen sentido, porque la gente está enferma. Se han registrado varios

casos de niños que han nacido con cáncer. El deterioro de la salud es muy grave.

Carrizalillo es un ejemplo de las consecuencias que acarrea la minería a cielo abierto, sin control de los daños ambientales y sin cuidado de la salud. Creo que la explotación cerrará en unos 10 años. Fue de las minas que más oro obtuvieron en el país y en América Latina. Ése es el desarrollo que dejó en una de las regiones más violentas del estado, la parte de la Sierra de Guerrero en la que se encuentra la entrada a Tlacotepec. Ahí hay una gran producción de amapola.

Algo parecido sucedió en Cocula, el municipio donde, de acuerdo con la versión del ex procurador Jesús Murillo Karam, fueron a incinerar a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. En ese territorio está otra mina, que se llama Media Luna. Según información periodística, esta mina tendrá una explotación mayor a la de Carrizalillo.

En esta región se dio un primer desplazamiento de varias comunidades que se encontraban asentadas sobre la ribera del alto Balsas. En 1965 se construyó la presa hidroeléctrica El Caracol. Los campesinos se transformaron en pescadores. Pero ahora, ya como pescadores, no pueden seguir trabajando, porque la mina está contaminando el vaso de agua. Los peces ahora se mueren por las sustancias tóxicas, al grado que ya nadie se atreve a consumir pescado porque los que sobreviven son impresentables.

La gente ya no puede protestar. Se lo impiden sus ex compañeros, que ya se metieron a la delincuencia organizada. Ellos controlan la entrada del pueblo. Dicen que ya formaron su policía comunitaria. En realidad es un grupo conformado por sicarios, que al mismo tiempo mantiene vínculos con la minera y está subsidiados por ella.

Los pueblos se organizaron y los trabajadores pidieron que se cancelara el contrato colectivo con la CTM, para pertenecer a otro sindicato. En esa lucha fue asesinado el compañero Quintín Salgado, que era de los pescadores que denunciaron todo esto.

Otro caso parecido es el de San Miguel Totolapan, en Tierra Caliente. Ahí también hay mineras, pero el control es muy fuerte por parte del narcotráfico. Hay tres grupos de la delincuencia disputándose los territorios. Las mineras a fuerza tienen que negociar con ellos. Esta negociación la llevan a cabo policías y autoridades municipales.

Ahí estaba *el Tequilerero*, que controló esa región mucho tiempo. Estaba vinculado con grupos de la policía y con el mismo Ejército. La gente lo sabía; sin embargo, nadie podía decir nada porque el que suelta la lengua tiene contados sus días. Esta región es de las zonas silenciadas del estado, porque sólo la metralla impone la ley y el lenguaje de las balas. El presidente municipal tiene que obedecer al jefe de la plaza, porque sabe que su sobrevivencia depende de la protección que le brinden sus aliados que se encuentran en las filas de la delincuencia.

Geografía del despojo

En la Montaña hay una geografía de despojo. La gente la está enfrentando. En 2010 supimos por diferentes espacios académicos que había un plan para establecer una Reserva de la Biósfera en la Montaña de Guerrero. Existían posiciones encontradas sobre ella. Se decía que era una Reserva de la Biósfera para proteger el territorio y que no hubiera abusos. Sin embargo, esto no lo planteaba la gente, sino la universidad, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) del gobierno estatal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)

La propuesta venía envuelta en palabras muy bonitas, muy suaves. Su lenguaje era de protección, de cuidar el medio ambiente, de preservar la naturaleza. De hecho, empezaron a ir a las comunidades diciendo: “Señores ejidatarios, comuneros, vamos a trabajar en un proyecto que se llama Reserva de la Biósfera. Su propósito es cuidar su territorio para que no se acabe el bosque, para que no se acabe el agua”.

La propuesta involucraba los municipios de Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Iliatenco y San Luis Acatlán.

Buscaron a jóvenes de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero para que hicieran ese trabajo de convencimiento a las comunidades. Les explicaron de qué se trataba. El plan era que fueran de comunidad en comunidad para hacer asambleas.

Cuando nos dimos cuenta, el territorio que abarcaba la Reserva era justo el corazón de la Montaña, en términos de agua, de bosque, de minerales. Era lo más valioso. Ellos defendían su proyecto diciendo: “Como es lo más valioso, precisamente por eso hay que cuidarlo”.

Curiosamente, las concesiones mineras están en una parte de la Reserva de la Biósfera. Se suponía que la Reserva, en el discurso, no permitía la explotación minera. Pero hay una cláusula que dice que, si se consulta con las comunidades y se hace una evaluación y se concluye que no habrá daños ambientales, se pueden otorgar estas concesiones. Es decir, las mineras se asientan preferentemente donde se encuentran las reservas del agua. En la Montaña existe un gran venero donde nace el río Balsas, y otros ríos que se unen para formar el gran caudal del río Papagayo.

Adicionalmente, lo que querían hacer, sin decirlo, era que hubiera un director de la Reserva de la Biósfera y existiera vigilancia externa. En otras palabras, todo iba a quedar en manos externas. A final de cuentas, hacían a un lado a las comunidades. Así ha pasado en Chiapas y en Oaxaca.

La Reserva iba a ser el resultado del gran proyecto que elaboró hace 10 años el programa Manejo Integrado de Ecosistemas (MIE). Pagaron millones de pesos por esa investigación. Pretendían que se concluyera que las propias comunidades habían planteado la creación de la Reserva de la Biósfera. Por eso

soltaban dinero a las comunidades, a los ejidatarios, a los comisariados, para que firmaran su adhesión.

Pero la gente se organizó y detuvo al rector de la Universidad, al coordinador regional de la CO-NANP y al secretario de la Semaren. Les dijeron: “En primer lugar, ustedes están trabajando sin consultar a las comunidades. En segundo lugar, no nos están informando de esa Reserva de la Biósfera. Ustedes le hablan en corto al comisariado; le dicen a la gente que conocen a los líderes para ir cerrando filas. Van con nuestros hijos, que son estudiantes, para pagarles una beca y les piden que hagan bien su trabajo y que les firmen en la asamblea que están de acuerdo”.

Todo esto sucedió al final del sexenio de Felipe Calderón; por eso urgía que las comunidades enviaran sus actas de asamblea, para que hubiera elementos de peso que animaran al presidente a firmar el Decreto de Creación de la Nueva Reserva de la Biósfera. Lo bueno fue que la gente de las comunidades se dio cuenta y, ahí mismo, en la Ciénega, acordó no permitirlo. Las comunidades no tuvieron más salida que agarrar a los funcionarios y obligarlos a dejar de seguir proponiendo ese proyecto.

Los pueblos entendieron cuál era el plan y lo echaron abajo. Ahora, ese territorio sigue siendo la reserva de las comunidades indígenas sin necesidad de tener una Reserva de la Biósfera; sin necesidad de dependencias públicas, ni de funcionarios que ganen más de 150 mil pesos.

De esta lucha nació el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña (CRAADT). Fue algo muy relevante. Ahora las autoridades comunitarias están coordinadas para defenderse contra el despojo.

En Guerrero, la Secretaría de Economía entregó 680 concesiones mineras. En la Montaña hay 27. Los 15 núcleos que formaron el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio realizaron asambleas agrarias para levantar actas de rechazo a la minería en su territorio. 13 núcleos solicitaron ante el Registro Agrario Nacional (RAN) la inscripción de sus actas con la finalidad de decir al Estado que no están de acuerdo en que esos megaproyectos entren a su territorio. Lo único que hizo el RAN fue inscribir tres actas y rechazar las demás.

Una de esas comunidades, la de San Miguel del Progreso, no sabía que la mayoría de su territorio había sido concesionada, por supuesto, sin su autorización. Pero se organizaron y realizaron una asamblea. “Resulta –dijeron– que ya el 75 por ciento de nuestro territorio está concesionado a empresas extranjeras y nosotros no lo sabíamos.”

Fue en ese momento cuando empezamos a trabajar con ellos. Metimos un amparo y se ganó. La Secretaría de Economía quiso vengarse. “Ya se retiraron las concesiones mineras –dijo–, pero como quedaron desocupadas, voy a hacer pública una Declaratoria de Libertad de Terrenos para que otras empresas, las que quieran, puedan solicitar esas con-

cesiones.” ¡Les valió gorro todo! Igual metimos otro amparo y se volvió a ganar.

La demanda de amparo buscaba la cancelación de los títulos de concesión minera, por violentar los derechos de la comunidad indígena. Adicionalmente, se logró que se declarara la inconstitucionalidad e inconveniencia de la ley minera, por contravenir la Constitución y tratados internacionales.

Hasta ahora, las concesiones mineras que hay en la región de la Montaña únicamente están en fase de exploración. No ha habido ningún caso de explotación.

Al Concejo de Autoridades Agrarias le hemos mostrado el ejemplo de Carrizalillo. Se organizó un viaje al lugar donde hay una explotación minera a cielo abierto, para que la gente conozca los daños que provoca, tanto a la salud –físicos y psicológicos– como al medio ambiente: agua, aire, fauna y flora. También los efectos que provoca en la comunidad. Para que vean cómo rompen la comunalidad, fracturan su identidad y desplazan personas.

Despojo y delincuencia

El mapa del despojo coincide con el mapa de la delincuencia. En Guerrero actúan, por lo menos, seis grandes cárteles. Algunos están asentados donde hay empresas mineras trabajando. Ellos hacen el trabajo de control territorial.

Desde hace más de 60 años, cuando la guerrilla surgió en la entidad, hay una guerra y un ejército

de ocupación. A pesar de los años que han transcurrido, la estrategia de contrainsurgencia sigue vigente. Sólo que ahora participan nuevos actores. Con el proceso de privatización en marcha, se han involucrado actores privados. Y estos son los de la delincuencia organizada. Son ellos los que están tomando el control del territorio. Son ellos quienes protagonizan la otra geografía de la violencia.

El Estado se ha hecho a un lado. Pero atrás están las mineras y otros proyectos. Hay un clúster minero que tiene relaciones inmejorables con el poder político. “La minería es un detonador de desarrollo”, dijo el gobernador. Pero, como hemos dicho, resulta que también la delincuencia tiene ahí algunas concesiones: de transporte, de acarreo de material, de seguridad.

Las muertes no cesan. Apenas hace unos meses mataron a dos compañeros del Consejo Indígena Emiliano Zapata de Chiautla. Ellos acababan de hacer una gestión para obtener fertilizante. Dejaron su camioneta en Chilapa, donde existen dos retenes militares, uno viniendo de Tlapa y otro yendo a la capital del estado. Se supondría que con esos retenes estaban bien cuidados. Regresaron de Chilpancingo, bajaron de la Urvan y tomaron la camioneta que habían dejado en Chilapa. Se subieron a su vehículo, y ahí mismo, en el libramiento donde están los dos retenes, como a 300 metros frente a la Coca Cola, los interceptó un grupo armado y los mató en plena ca-

rretera. Las autoridades no se dieron cuenta de quiénes fueron los asesinos; para ellas no pasó nada.

Nos falta trabajar más en comparar los mapas de la delincuencia con los de la minería, con los de la militarización y también con los de las disputas por el trasiego de las drogas. ¿Quién controla qué carreteras? Estamos en un entramado muy bien planeado.

¿La autoridad no se da cuenta? ¿La autoridad no sabe? El Ejército, que tiene 60 años en el estado, ¿no sabe cómo está esa geografía? ¿Cómo fue que la dejó crecer? ¿Cómo es que floreció la delincuencia en el territorio que está militarizado? ¿Cómo es que creció la siembra de enervantes en todas esas partes? ¿Cómo es que la Sierra y la Montaña de Guerrero son los principales proveedores de droga a nivel internacional en Nueva York, en Chicago, y son las regiones más pobres de país? ¿Cómo es que sale la droga de Iguala hasta Chicago por vía terrestre? Es decir, ¿cómo es posible que la autoridad no sepa nada de esto?

En los hechos, las autoridades alientan la creación de grupos de choque para enfrentar a las policías comunitarias o a las autodefensas. Utilizan a los grupos del narcotráfico para armar estos grupos que se encargan de someter a la población. Buscan controlar a las organizaciones que resisten, para dejar el paso libre a sus proyectos privatizadores. El despojo hoy tiene el uniforme del Estado y también el de la delincuencia.

Abuso sobre abuso

Pero esa especie de subrogación del trabajo sucio hacia los grupos criminales no implica que no se trate de borrar la huella militar en ella. Mucho menos significa que no siga provocando abusos contra la población civil en la entidad. Dos anécdotas ejemplifican esta situación.

En 2018 el periódico *El Sur* publicó una foto donde un grupo de señoras y señores impide a unos militares entrar a sus tierras. En esos días el Ejército estaba en plena campaña de destrucción de cultivos, porque estaba la cosecha de amapola. Se posesionó de todos los territorios de la Costa Chica y la Montaña Alta, pero no entró a la Sierra, donde está el grueso de la producción de estupefacientes.

En sus operaciones, se dedicó a criminalizar a las mujeres amuzgas, mixtecas, nahuas que, como las de la fotografía, dicen: “Somos viudas, somos madres solteras y tenemos tres hijos. No podemos llevarlos a la escuela. No nos queda de otra más que tener una parcelita para sembrar algo de amapola”. Contra ellas se ha lanzado todo el aparato del Estado, al tiempo que montan escenas donde presentan al Ejército como un actor para llevar paz, que pone orden y erradica cultivos ilícitos.

También en 2018 llegó el Ejército a la comunidad de Atlixnac. Observó que habían entrado cuatro hombres que no eran de ahí. Los vigiló. Supuso que eran los asesores para la siembra de la amapola o compradores. Puso un retén a la salida de la co-

munidad. Y cuando estas personas se marchaban, les exigieron identificarse y los comenzaron a grabar. Les pidieron sus credenciales. Los chavos se las mostraron, mientras uno de los militares iba narrando: “Aquí se encuentra Jaime García, que dice que es de la comunidad de tal lado, que vino aquí a trabajar y que ahorita va a declarar”. ¡Como si fueran ministerios públicos! Los militares los obligaron a declarar que habían visto amapola.

Les pidieron sus celulares y los revisaron. Uno de los chavos llevaba en su celular una foto de un plantío de amapola. El soldado lo amenazó: “Te voy a acusar porque tú estás promoviendo la siembra de amapola aquí en la Montaña. Ésta es una prueba clara con la que yo te voy a poner a disposición”. El Ejército tiene ahora facultades de policía. Más aún, está actuando como Ministerio Público. Realiza acciones para someter más fácilmente a la población.

La situación es complicada, pero el movimiento de pueblos y organizaciones no se deja vencer por la estrategia bélica. Sigue luchando porque sean los derechos colectivos, los derechos humanos y la organización comunitaria los que marquen el rumbo del país.

La resistencia

Para enfrentar el despojo no hay más camino que recuperar la organización comunitaria. La gente ahí está y tiene claro en qué trincheras debe colocarse.

Lamentablemente, muchas energías se desgastan en pleitos intracomunitarios. Ven al otro comunero como enemigo. No alcanzan a vislumbrar al monstruo que causa mucho daño dentro de la comunidad.

Los compañeros de la Montaña formaron el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. Cada dos meses tienen foros de información. Cada día toman el pulso de lo que sucede. La gente está alerta. No va a permitir en su territorio la entrada de nadie.

Ellos mismos están haciendo sus Estatutos Comunales. Están elaborando sus propias normas de cómo organizarse, de cómo defender el territorio, de cómo ayudarse, de cómo sancionar a quienes no lo estén cuidando. Es su forma de decir ¡No a la minería! Los están entregando ante el Registro Agrario Nacional para que se les reconozca. Su acuerdo es: “Vamos a fungir con estas normas para proteger el territorio”.

Están hablando con algunos ayuntamientos para que ellos también hagan la declaratoria de ¡No a la minería en el municipio! Algunos ya aceptaron. Vamos a ver qué otras autoridades aceptan.

También tienen su Policía Comunitaria. Una policía que está limitada a defender el territorio, a cuidar, a hacer sus recorridos. Con ella buscan contar con una vigilancia permanente de quiénes entran y quiénes salen. Buscan vigilar a la delincuencia, a los empresarios o a los investigadores que quieran ser redentores del nuevo sistema de privatización.

Al mismo tiempo, otras comunidades analizan cómo interponer recursos jurídicos como el que ganó San Miguel del Progreso.

Las comunidades no están cruzadas de brazos. Hacen un trabajo muy importante. El riesgo es el crecimiento de la delincuencia. Eso sí es complicado, porque están haciendo la guerra dentro de la comunidad.

La gente debe reconocer bien sus territorios para defenderlos. Debe hacer sus propios mapas de reconocimiento de cómo están las concesiones mineras, cómo está el despojo, cómo están los actores de la delincuencia, cómo está la organización, cómo va a estar la Guardia Nacional.

XIII TLACHI

Un coctel

En Tlachinollan hemos llegado a tener 26 integrantes. Hay abogados, antropólogos, comunicadoras, contadoras, politólogos, sociólogas, expertas en derecho internacional y en derechos humanos, historiadores, maestros y maestras. También diseñadoras gráficas, que se han propuesto dar al Centro una imagen institucional. Confluyen una diversidad de profesionistas con diferentes carreras.

Toda esta afluencia de conocimientos, de profesiones, de disciplinas, ha sido muy importante. Ha sido muy enriquecedor juntar el saber antropológico con el jurídico, retomar el bagaje de los derechos de los pueblos indígenas vividos por ellos mismos.

Hay iniciativas, como las de la Policía Comunitaria, que solamente los pueblos pueden parir. No es algo que pueda hacer un organismo de derechos humanos. No deja de ser una ironía que, mientras los organismos de derechos humanos pueden manejar dinero y otros recursos, a los pueblos no se les permita hacerlo. Los pueblos tienen su territorio, su patri-

monio intangible y toda esa sabiduría, pero, como no son sujetos de derecho, no les permiten acceder a los presupuestos públicos. Pero en los pueblos hay un manantial de saberes; la gente va construyendo, va abriendo brecha y la va convirtiendo en autopista. Y en Tlachinollan hemos abrevado de ellos.

El trabajo con la gente es muy grato. Y quienes participamos desde Tlachi hemos encontrado un borbollón de experiencias, un manantial de luchas impresionante. En medio de una situación tan adversa, tan difícil, tan oprobiosa, tan dolorosa como la que se vive en la región, uno descubre la fortaleza de la gente, su trabajo, su compromiso, su fuerza.

La Montaña tiene su encanto. Y de la misma manera en que los antropólogos buscan encontrar aquí experiencias importantes que puedan documentarse, que puedan socializarse, que puedan abrir nuevos campos para la investigación, los defensores y defensoras de derechos humanos tenemos inquietudes parecidas.

En la gente de la Montaña hay magia. Es el encanto de las mujeres, de los niños y niñas, de los hombres, de los sabios y de los pueblos. Ese toque divino que aparece cuando la gente está puesta para hacer lo que tiene que hacer, y dice: "Vamos a dormir acá en la carretera. No vamos a permitir que pasen los carros. Vamos a enfrentar lo que venga". A veces, en situaciones así, yo me hago chiquito. Digo que no le entro. Pero cuando la gente se agiganta, me sumo a esa ola grande y les digo: "Aquí me quedo con ustedes".

Estas experiencias únicas permitieron que compañeros y compañeras de la Ciudad de México, con la inquietud de estar en procesos comunitarios más cercanos a la gente, se sumaran al proyecto. Siempre hay jóvenes, estudiantes y académicos que tienen la tendencia a estar en lugares donde hay desafíos importantes. Eso ayudó a que personas de la ciudad, con formación profesional, ya sea como abogados o licenciadas en relaciones internacionales o derecho internacional, sintieran el jalón del imán de la Montaña.

Para los jóvenes que llegaron al principio a Tlachinollan, provenientes de la Universidad Iberoamericana de León y de la Universidad Autónoma de Guerrero, el Centro fue un espacio de trabajo que les permitió trabajar con comunidades indígenas en la Montaña. Les permitió acompañar, promover y defender sus derechos humanos. En varios de ellos operó una influencia religiosa. Algunos religiosos les habían dicho que a la Montaña se podía venir como misión. En cambio, otros veían que aquí podían desenvolverse mejor como profesionistas y brindar un mejor servicio.

Poco a poco, conforme fue caminando el trabajo, adquirió importancia el hecho de que se estuvieran documentando casos importantes de violaciones a derechos humanos. El hecho mismo de que estos casos se presentaran ante los relatores especiales de la ONU fue como un faro de luz. Fue

un reconocimiento de que “se están haciendo cosas interesantes en términos de documentar casos, y al mismo tiempo se está haciendo un acompañamiento importante”. Tlachinollan se convirtió en un espacio para la creatividad y la exploración de caminos nuevos, innovadores, para la lucha y la defensa de los derechos humanos.

Eso es lo que siento desde mi experiencia. Eso es lo que hemos compartido con los compañeros y compañeras. Esta experiencia en los derechos humanos es la que nos amamanta, la que nos jala, la que nos atrae, la que nos apasiona, la que da sentido a nuestra vida, la que nos da el acero para ser sus defensores y defensoras.

Pensar en la gente

Nuestro trabajo cotidiano se nutre de lo que nos enseña la gente. Apenas vine a una reunión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salí a las 12:30 de la noche de Tlapa, porque me ganó el autobús de las 11. Llegué a México a las 8:30 de la mañana. Fue un viaje pesado. Pero me encontré con que los de Zitlaltepec y los de las Juntas de Caxitepec ya estaban en la Ciudad de México. Ellos habían salido un día antes. Muchos caminaron cuatro horas para tomar el camión.

Así es cada día en Tlachinollan. La gente llega enlodada a la oficina, con su ropa raída, seguramente sin almorzar. Van con una expectativa muy alta de que nosotros les ayudemos a resolver su problema.

Por eso decimos que no podemos llegar tarde a las oficinas. La gente que nos va a ver probablemente salió a las 2 o 3 de la mañana y llegó a las 7. Hay que tomar eso en cuenta.

Hay que colocarnos en la dimensión de cómo vive la gente, en su precariedad. Tienen muchas esperanzas en nuestro trabajo. Debemos pensar en ello cuando llegan a la oficina. Es lo mismo si es la señora que dice que fue golpeada por su esposo o si son los maestros o padres de familia que se quejan de que no llegó el funcionario que debió haber resuelto el problema, y buscan que nosotros intervengamos.

Tenemos que pensar no en todos, pero sí en la mayoría de la gente. Vienen esperando que les resolvamos sus problemas. Por eso, si el caso es grave, tenemos que irnos a la comunidad en ese mismo momento. Nos desplazamos al lugar donde maltrataron los militares a la comunidad. Si es una situación muy grave relacionada con una autoridad, o si hay detenidos, tenemos que intervenir.

El hecho de que estemos en el terreno con la gente le ha dado mucha consistencia a Tlachinollan. Pero una cosa es Tlapa, que a final de cuentas es la principal ciudad de la Montaña, y otra realidad son las más de 600 comunidades, que están a cinco, seis, siete, ocho horas de camino, en lugares muy difíciles de acceder.

Como la gente llega a Tlapa haciendo el esfuerzo de salir muy temprano en la madrugada, no-

sotros hacemos nuestro esfuerzo y vamos con ellos a sus comunidades.

La otra vez que entraron los militares a Juquila Yucucani, la gente de allá se trasladó nueve horas a Tlapa para vernos. Fue una agresión muy fuerte la que sufrió la comunidad. No llegaron en su camioneta, como nosotros de Tlachi. Llegaron caminando, trasbordando y pidiendo auxilio. Llegaron sin comer, enlodados, desesperados, con miedo del Ejército. Llegaron con la ilusión de que nosotros les íbamos a ayudar a resolver el problema. Así que agarramos la camioneta y nos fuimos para allá. Esas situaciones siempre nos pegan en la cara.

A veces sabemos que no está en nuestras manos resolver el problema. Si acaso, lo que podemos hacer es colocar el tema ante la autoridad, denunciar, contener un poco la agresión. Pero no podemos hacer nada más. No nos importa. Igual hacemos lo que está en nuestras manos.

Cotidianamente tomamos la radiografía de lo que sucede en la región. Lo hacemos con los testimonios de la gente. Procuramos darles cobijo, confianza, que sepan que no los vamos a defraudar. Los acompañamos con el Ministerio Público, hablamos con el presidente municipal, tenemos reuniones en la Procuraduría Agraria. Atendemos problemas de tierras y el tema de la violencia contra las mujeres. Hablamos con las autoridades en Chilpancingo, con el secretario de Educación porque no hay maestros,

con el secretario de Salud porque no hay médicos. Nos reunimos con los maestros donde hay conflictos con los padres de familia.

Hacemos trabajo de documentación, de escucha, de atención, de ir a las oficinas, de acompañarlos, de representación. Cuando la gente está indefensa, le decimos: “No te preocupes, yo voy a ser tu abogado o abogada”. Vamos a las comunidades y hablamos con la autoridad o con el Ejército, o documentamos el caso. Es muy importante estar con ellos.

Cada día hacemos en Tlachinollan esa radiografía. Recientemente defendimos a 16 presos del CECOP en el juicio oral en el juzgado de Acapulco y logramos la libertad de todos. Acompañamos a la comunidad de Llano de las Flores, que está como a cuatro horas de Tlapa, en la organización con mujeres para producir hortalizas. Al mismo tiempo fuimos a otra comunidad para hacer sus estatutos comunales. Esto tiene que hacerse en domingo, porque los comuneros solamente se reúnen ese día. Otros más están haciendo recorridos para su reordenamiento territorial. Los abogados y abogadas acompañan a las víctimas al Ministerio Público. Otros compañeros documentan lo que pasa con el problema del fertilizante. Otros más atienden a los jornaleros agrícolas. En fin, estamos puestos para servir a la gente.

Hacemos una radiografía de la violencia. De la violencia contra las mujeres y niños, de la asociada a sus problemas agrarios, de todo lo relacionado con

la lucha contra las mineras, de la criminalización de la protesta, de la salud, de la educación y de la vivienda. La violencia incubada en las mismas instituciones.

Hacemos la radiografía del microcosmos del olvido, de la pobreza y el maltrato que se viven en la Montaña. Todas esas historias pasan a diario por nuestras oficinas en Mina 77. Pero también por los caminos escabrosos de la región.

Eso es lo que da su identidad a Tlachinollan. Estamos con la gente en la Montaña, caminamos con ella, somos testigos de los hechos. Eso es el plus que tenemos. Y eso estamos viviendo a nuestros 25 años.

Ahora estamos más informados que algunas autoridades, les compartimos lo que está pasando. Y sucede que, en ocasiones, la autoridad todavía no está informada. A veces llamamos a los compañeros que hacen su trabajo de información para el gobierno federal o para Gobernación del estado y les preguntamos: “¿Qué está sucediendo en tal pueblo?, ¿que hay tres detenidos? Nos responden que ellos todavía no lo saben”.

La comunicación y la información llegan a Tlachinollan vía telefónica, vía correo directo de la comunidad o también a través de WhatsApp. La gente nos informa desde Estados Unidos. Nos hablan cruzando la frontera con Estados Unidos, o en el desierto. Nos avisan cuando se pierden los familiares o cuando se quedan allá. Nos hablan desde las cárceles y los campos agrícolas del noroeste. Se ha tejido una

red de información y comunicación impresionante. ¿Cómo le hicimos? No lo sabemos, pero estamos seguros de que la confianza que tienen en nosotros es lo que hizo posible este telar de relaciones.

Con una espada sobre la cabeza

Como defensores de derechos humanos, tenemos que convivir con funcionarios estatales siniestros. Nos dan miedo. Sabemos que son violadores de derechos humanos que han ejecutado personas, que han torturado, que han desaparecido. Y que, a pesar de ello, siguen ocupando cargos públicos y actuando con la misma impunidad. Más aún, desde las instituciones de seguridad se les sigue reconociendo como funcionarios prestigiados.

Por eso siempre tenemos muchos sentimientos encontrados. Sentimos impotencia, dolor, indignación y miedo. Sentimos malestar de que los derechos humanos puedan ser pisoteados por un Estado que considera a los indígenas como enemigos, a quienes hay que hacer la guerra por el hecho de levantar la voz, o por sentarse a platicar con alguna célula de un grupo armado. Sentimos coraje de que vean la organización comunitaria como vínculo de una expresión armada y se le trate como si fuera la religión del diablo, como si fuera un demonio al que hay que destruir.

Lo demoniaco, según ellos, no es la acción sanguinaria de los caciques, su comportamiento funesto: lo demoniaco es que los pobres se organicen y se defiendan.

Como defensores de derechos humanos, esto nos coloca en el filo de la navaja. No podemos cerrar los ojos ante un Estado represivo con caciques desalmados, con policías torturadores, con militares que desaparecen personas y hacen la guerra a los pobres. Tampoco podemos cerrarlos ante un pueblo indómito, con comunidades organizadas que resisten, e incluso con gente dispuesta a empuñar las armas ante la violencia estatal.

Como defensores de derechos humanos, no debemos sumergirnos en las hondonadas del olvido. No debemos ser indiferentes ante las trincheras que la gente ha construido para la autodefensa. Menos aún debemos pelear contra las murallas que el Estado ha levantado y que destruyen la vida de los pobres.

Los políticos profesionales

En los últimos tres años, a nivel regional y estatal, los políticos han asumido una relación de respeto hacia Tlachinollan.

Eso es nuevo. Antes no era así. Durante mucho tiempo la relación fue de confrontación, de descalificación, de constante fricción. No les gustaba que, cuando había quejas contra ellos o sus gobiernos, les mandáramos oficios y les planteáramos el problema. Menos aún que se interpusieran quejas contra funcionarios o contra el mismo presidente municipal. Eso les molestaba mucho. Pero ahora los alcaldes y síndicos han entendido que Tlachinollan es un referente regional en derechos humanos.

Los de Gobernación eran los encargados de recabar la información en la región. Recuerdo que un día, cuando recién empezábamos, uno de ellos, que estaba medio tomado, me reclamó:

-Ustedes ¿quiénes son?, ¿por qué mandan oficios? Ustedes no son autoridad, pero mandan oficios a los presidentes municipales, a las dependencias. Nosotros ya tenemos un bonche de oficios que ustedes mandan.

Y añadió con desdén:

-¿Quiénes se creen ustedes?, ¿por qué están mandando oficios a medio mundo si no tienen ninguna autoridad? Ustedes están usurpando funciones.

Le respondimos de manera sencilla.

-Mandamos un oficio -le dijimos- porque somos una organización civil. Como ciudadanos también podemos mandar oficios. ¿Quién dice que sólo una autoridad puede mandar un oficio? Tenemos nuestro sello, nuestros estatutos como asociación civil, nuestros socios, nuestros órganos de gobierno.

Acostumbraban tener una idea negativa de nosotros. Decían: "¿Quién es Tlachinollan, una organización civil que no tiene ningún reconocimiento ni autoridad desde el punto de vista oficial?" Los mismos abogados particulares no nos hacían caso cuando mandábamos a citar a algunos ciudadanos. Decían a sus clientes que no fueran, que no éramos Ministerio Público ni autoridad. Les explicábamos que un ciudadano nos pedía apoyo y queríamos

conciliar, y que nadie nos lo podía impedir. Fue toda una pelea. A muchos oficios y citatorios no les hacían caso. Igual los seguimos mandando.

Pero eso cambió ahora. Las autoridades nos piden que intervengamos cuando hay problemas muy fuertes a nivel estatal. En los últimos años ha habido como dos o tres conflictos en los que el secretario de Gobierno nos ha pedido que hablemos con la gente. Lo hemos hecho, sobre todo cuando la gente bloquea carreteras, cuando no se quieren mover de los caminos, cuando se han radicalizado. El gobierno nos pide que seamos mediadores. Y hemos intervenido. La gente nos dice: “Está bien si ustedes van ayudar a mediar. Si ustedes van a la reunión con nosotros está bien, porque si nos mandan solos, no vamos”.

Ahora hay una relación de reconocimiento, aunque no pública. Hemos dicho que, como defensores de derechos humanos, necesitamos que se nos reconozca como una organización que contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho.

Al gobernador le hemos planteado varios asuntos y los ha atendido. Él ha pedido que estemos en reuniones de mediación. Ha reconocido la calidad moral de Tlachi en juntas con ediles. Admite que somos una organización seria, que no tenemos agenda de partidos políticos o particulares, que no buscamos boicotear las acciones del gobierno. Ahora los presidentes municipales reconocen también nuestra interlocución, nuestra intervención. Claro, saben muy

bien que tenemos posturas claras y que no somos comparsas de nadie.

Igual sucede con los diputados. Estamos trabajando una propuesta de ley para una reforma sobre los derechos de los pueblos indígenas. En la convocatoria oficial dice: “Tlachinollan y la comisión de asuntos indígenas del Congreso”. También hemos llevado casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias a nuestra convocatoria, se están analizando dos controversias constitucionales. No sería igual si la iniciativa llegara por algún diputado o de alguna autoridad.

Hemos logrado consolidar nuestra presencia en la región. Con el gobernador, con el secretario de Gobierno, con las demás secretarías, con los presidentes municipales, con los diputados locales. Con el nuevo gobierno federal estamos vinculados en el tema de Ayotzinapa, por medio de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de Alejandro Encinas. Tenemos relación con el delegado federal de Guerrero, Amílcar Sandoval. Igual con los diputados federales y algunos senadores/as. Y con el INPI y con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por medio del subsecretario de reconstrucción nacional.

Hemos podido tejer fino en los últimos años. Lo hemos hecho para hacer más efectiva la defensa de los derechos humanos. Ése ha sido el punto que une, convoca y da confianza. Los mismos pueblos nos mandan por delante y no los podemos defraudar.

El movimiento por los derechos humanos

El trabajo en la Montaña requería del respaldo del obispo y de otras personalidades académicas. Pero también necesitábamos vincularnos al movimiento nacional. Así lo hicimos. Fue prematuro. No teníamos ni la experiencia ni el bagaje necesario de lo que son los derechos humanos. Pero caminar con las organizaciones del resto del país nos ayudó a dar saltos.

Como a los dos años de constituido Tlachi, se realizó en Tlapa la asamblea de la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas. Integrarnos a la red era una necesidad. No queríamos estar solos.

Como a los tres años sacamos el premio Tata Vasco de la Universidad Iberoamericana. Eso nos colocó como Tlachinollan en el plano nacional. Nos sentíamos muy novatos, muy verdes, para incursionar en el ámbito nacional. Sin embargo, nos dieron el premio y eso nos ayudó mucho. Fue importante que haya sido en la Ciudad de México.

La Universidad Iberoamericana, otras organizaciones, la Red Nacional y el sistema jesuita de universidades nos cobijaron. Era un momento muy crítico y difícil. Estaba muy dura la militarización, por la aparición del EPR; estábamos documentando los casos de tortura. Ese premio y esas relaciones nos ayudaron a entender que el trabajo de los derechos humanos tiene que ser en red.

Esa red debe tejerse no solamente con organismos de derechos humanos, con centros con los

que estamos en esta misma órbita, sino con organizaciones sociales, con organizaciones magisteriales, con organizaciones de base.

Sin proponérselo, nos articulamos a diferentes redes. No solamente interactuamos con las redes de derechos humanos que hay ahora. Lo hicimos también en temas nacionales, como ahora con el grupo Fiscalía que Sirva. Las organizaciones que la integran poseen una experiencia y una especialización importantísima. Han desarrollado una labor muy relevante, muy valiosa. Están contribuyendo a la discusión nacional en temas muy especializados. Bien o mal, Tlachi está aprendiendo de ellos. Estamos allí más como aprendices que como expertos. Sin embargo, sus discusiones están centralizadas en la Ciudad de México. Y eso nos rezaga. Toda nuestra energía está volcada para atender a la gente. Por el momento solamente hay dos abogadas en Tlachi, que se ocupan de 15 o 20 casos diarios. Eso nos sobrepasa. Y llevar una agenda nacional nos rebasa. No nos dan las fuerzas para seguir esos ritmos.

Hemos entablado vínculos con organizaciones nacionales e internacionales. Por supuesto, con Amnistía Internacional. Tenemos una relación muy importante con la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México. En Estados Unidos somos aliados de WOLA (siglas en inglés de Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) y de la Fundación Robert F. Kennedy. Cooperamos

con organizaciones como la Organización Mundial Contra la Tortura, con embajadas, con la misma oficina de la ONU en México para los derechos humanos. No es que sea una relación tan profunda, pero abarca temas específicos.

Esas redes hacia arriba y hacia afuera han sido muy importantes. Pero no son las únicas. También hemos tejido redes hacia adentro y hacia abajo. Trabajamos con las organizaciones sociales de Guerrero y con organizaciones indígenas que pugnan por una Ley Indígena. Colaboramos con el magisterio estatal y regional. Caminamos con organizaciones que defienden el territorio, con la CRAC. Se trata de organizaciones de base, de consejos de comunidades, de ejidos, de comisariados de bienes comunales. También hay una relación muy importante con periodistas locales y con algunos académicos del CIESAS y de la UNAM.

Nuestras redes están muy diversificadas, pero no bien aprovechadas. Hemos entablado una relación muy importante con antropólogas especializadas en antropología jurídica, pero no sabemos cómo articular esfuerzos que nos permitan que ellas nos ayuden con sus capacidades profesionales. De igual manera, no hemos podido aprovechar todo el bagaje que tienen otras organizaciones de derechos humanos en el estado.

Tlachi gravita en todas esas órbitas. No muy puntualmente. Pero ha podido extender ese abanico

de relaciones que le han servido de capa protectora. Toda la cobertura que hemos logrado concitar a nivel nacional e internacional, y los premios que hemos recibido, nos han ayudado a proyectar más nuestra labor, a abrir más espacios y redes. Hay un universo de relaciones que han sido muy provechosas para blindar nuestro trabajo. Recuerdo mucho que un compañero me decía: “El premio Kennedy (en 2010) les ayudó para que, a nivel del estado, el gobernador Aguirre Rivero le pensara más a las agresiones que se estaban generando en contra de ustedes”.

También nos amparó el premio Amalia Solórzano de Cárdenas en 2017. Ese reconocimiento nos acercó con el movimiento México Hoy, nos aproximó a otro espacio y a otras problemáticas. Bien o mal, esos reconocimientos son como escudos que nos dan visibilidad y protección.

Comunicar

Tlacinollan tiene el gran problema de estar en Tlaxcala, en plena Montaña. Siempre es difícil la comunicación cuando se está en una provincia lejana. Ciertamente, con Internet han disminuido las distancias y la lejanía. Sin embargo, al final no es lo mismo usar estas tecnologías en las regiones apartadas que tener acceso a ellas en las grandes ciudades.

La primer área de trabajo que creamos cuando Tlachi nació fue la jurídica. Era la principal. Nuestra misión era ayudar, asesorar y orientar, desde una

perspectiva tanto jurídica como de derechos humanos. Más adelante nos concentramos en el área educativa, para promover la reflexión sobre lo que es la cultura de los derechos humanos y los derechos colectivos. Se trataba de aprender y retroalimentarnos de esa experiencia.

Luego nos enfrentamos a la necesidad de difundir, no lo que nosotros hacemos, sino los problemas que enfrenta la gente. ¿Cómo hacerlo? Nos dimos de topes. A los tres o cinco compañeros que echamos a caminar el proyecto nos absorbía el trato con la policía judicial, con el presidente municipal, con las autoridades. Al final, éramos nosotros solos los que andábamos en las oficinas gubernamentales. Si acaso, se lo podíamos platicar cara a cara a los demás compañeros. Pero no mucho más. Nos decíamos: “Necesitamos difundirlo, sacarle fotos, decir que hicimos esto o que está pasando esto otro”. Vimos la necesidad de crear el área de comunicación en Tlachinollan.

Creamos el área de comunicación para dar rostro al trabajo que hacíamos como Centro, a las luchas que acompañábamos, a los dolores, a los movimientos de la gente. Queríamos mostrar a la Montaña no solamente como una región condenada al olvido, sino difundir el rostro luminoso de la resistencia, de la cultura colectiva, de la organización, de las tradiciones, de su otro derecho, de su otra visión, de su otra sabiduría.

Como antropólogo, empecé a entender que la Montaña es ese mundo de la colectividad. Desde las categorías de la colectividad es como debemos entender muchas acciones de su gente. Desde ahí debemos comprender cómo se da el servicio como comisario. Un comisario no es el individuo: es la colectividad. Es la cabeza del cuerpo que tiene que ir al cerro a pedir la bendición de las deidades. El cambio de comisario no es un cambio burocrático, como el que hacen las autoridades mestizas. Es un cambio de bastón, del poder sagrado. Y eso tiene todo un entramado de normas y rituales que hay que entender. El derecho está amarrado a las deidades, a la raíz de la tierra, de la cultura. Son parte del derecho de los pueblos.

Empezamos a documentar en video esos rituales. Fue mágico. Fuimos a los lugares sagrados a grabar y lo transmitimos a los sabios. Ellos lo vieron y dijeron: "Esto es lo mejor. Que nuestros hijos vayan aprendiendo lo que se está perdiendo".

Con esta iniciativa, conseguimos dos objetivos simultáneos. Por un lado, comenzamos a recuperar la imagen como un tema que fortalece y enorgullece a los pueblos. Por el otro lado, proyectamos la realidad de la Montaña. Eso nos ayudó mucho.

Creamos un área nueva, que en un primer momento nombramos internacional y ahora le llamamos de incidencia. Lo hicimos para decir: "Esto no debe quedarse sólo en Guerrero, no debe quedarse sólo en la Ciudad de México. Tiene que trascender

a los organismos internacionales”, con la ONU, la CIDH, las embajadas. La comunicación se volvió un asunto clave.

También fueron importantes las alianzas que entablamos con medios y con amigos y amigas periodistas. Guerrero ha sido un terreno fértil en la formación de periodistas que están en el terreno. Son compañeros y compañeras, tanto indígenas como de la ciudad, prestos a colaborar. Cuando el Ejército irrumpió en las comunidades, formamos con ellos una especie de comunidad de periodistas y defensores.

El trabajo que han hecho estos profesionales de la prensa, como Maribel Gutiérrez, alrededor del tema de la militarización, ha sido clave. Estar en el terreno y documentar las violaciones a los derechos humanos ha sido muy importante. Organizamos misiones de reconocimiento en la región. Fue algo novedoso. Invitábamos no sólo a organizaciones de derechos humanos de la ciudad, sino también a medios de comunicación.

Algunos medios comenzaron a tener la fuente de derechos humanos, de movimientos sociales, de luchas de los pueblos indígenas. Sin pretenderlo, el acompañamiento de los casos mostró que ahí también había noticias que difundir. Los conflictos agrarios, una conciliación comunitaria de pueblos, la Policía Comunitaria, el caso de un maestro torturado que quiere dar su testimonio o los militares que entraron en una comisaría sin autorización de la comunidad, se

convirtieron en nota periodística. Comprendimos que no sólo eran violaciones a los derechos humanos, sino también noticias que debían divulgarse.

Ahora los periodistas son nuestros brazos y nuestros ojos para escribir y para ver. Sin embargo, Tlachi no tiene una estrategia de vinculación con los medios en el trabajo cotidiano, en la labor a ras de tierra, en el acompañamiento.

Necesitamos a los medios. Necesitamos que transmitan imágenes y voces. Si lográramos establecer vínculos estratégicos entre medios y ONG, nuestra labor tendría mucho más impacto. Sabemos que los periodistas difícilmente pueden estar en todos lados y que no hay recursos como para que realicen todo este trabajo. Pero nosotros podemos proporcionarles mucha información.

El cuaderno del dolor

Como parte de nuestro trabajo de comunicación, escribimos pequeñas biografías de los personajes que luchan por los derechos humanos. Son retratos de quienes están en la cárcel o perseguidos. Son apuntes de las esposas que batallan para que sus maridos sean liberados. Es parte de la sensibilidad que vamos obteniendo en el trato con la gente.

Cuanto más se mete uno a la Montaña, más te vas empapando de la escarcha que hay en la región. La Montaña te humedece el cuerpo y lo fortifica. Eso nos ha ayudado mucho. Cuando llegas a la casa no

puedes quedar indiferente a todo ese mundo de injusticias que ves.

Pienso en las últimas personas que visitamos. Eran familias de los ejecutados del CECOP. Los mataron hace un año, en un enfrentamiento. Perteneían a la Policía Comunitaria de La Concepción. Fueron asesinados por la policía del estado junto a otros dos compañeros suyos.

Fuimos a la casa de Ulises, uno de ellos. Es una casa que no es casa. Es un techo caído, con adobes derruidos y dos perros flacos. Ahí estaba una señora mayor, la esposa de Ulises, enferma, con dos niñas, y otro señor mayor, también enfermo.

Llegamos, los saludamos y les dijimos: “Venimos aquí a acompañarlos. Sabemos lo que pasó con Ulises. Venimos a decirles que vamos a acompañarlos jurídicamente, a ayudarles”. La gente se nos quedó viendo como pensando: “Eso no me sirve de nada”. No nos lo decían, pero seguramente creían que, si de verdad los íbamos a apoyar, les debíamos ayudar para los alimentos, porque no habían comido, o para la medicina.

A veces, uno no tiene la sensibilidad suficiente y llega con las víctimas con su discurso de ONG buena onda. No es malo, pero no es el chip adecuado para atender a la persona que está sufriendo. En ocasiones, más que palabras de aliento, lo que esa persona necesita es medicina. Uno va a resolver el problema jurídico, pero no se puede decir que no le

corresponde apoyarlos para que resuelvan necesidades urgentes.

Empezamos a hablar con la familia de Ulises. Con el dolor por delante, su mamá nos contó: “Yo estuve ahí día y medio esperando que me dieran a mi hijo. Alcancé a ver que lo tenían tirado. El sol estaba deshaciendo su cuerpo gelatinoso”. Ésa fue la primera imagen que nos compartió. Luego siguió: “No me permitieron que lo viera. Al final, nada más lo enredaron en una bolsa. Lo sellaron y lo pusieron en la caja. Hasta la fecha estoy triste porque no pude ver a mi hijo. Lo vi, pero lo vi en la peor circunstancia”.

Escuchar esa historia, a lado de sus nietas, se te revela. Eso no te lo puedes guardar. No es que Ulises esté en una caja de muerto. No; es que para su familia está vivo. De allí nace el cómo ayudarlo, cómo resolver en lo inmediato algunas de sus carencias. Pero también, cómo ayudar a escribir eso, como describir esa tragedia, cómo desdoblar esa experiencia, esa impotencia, esa indignación. Hay que escribir esa realidad, porque luego no se entiende. Porque luego gana el discurso gubernamental, gana la postura fría de los funcionarios o simplemente pesa más la indiferencia. Gana el pensar que es muy normal el asesinato de una persona.

Como defensores de derechos humanos, hemos aprendido a narrar. No tenemos ninguna técnica. No tenemos ninguna formación, pero nos vamos formando en el mismo cuaderno del dolor. A lo me-

jor no sabemos la palabra más precisa, pero sabemos lo que queremos decir, lo que estamos viendo y cómo transmitirlo. Lo que hemos podido escribir ha sido para dar testimonio de quién es esa persona. Es Antonio Vivar, es el dirigente estudiantil juvenil, es el héroe de la comunidad, es el defensor criminalizado.

Se trata de escribir una historia de dignidad, de resistencia, de sueños que fueron truncados. Se busca resucitar al personaje a través de una historia. Eso nos libera a nosotros. Escribir sobre ellos es una forma de liberación, de protesta. Es un abrazo a la persona sobre la que se escribe.

De la Montaña para el mundo

En nuestro trabajo fuera de México nos ayudó mucho Amnistía Internacional. Comenzamos a colaborar con ellos desde lo de El Charco. Tuvimos contacto con su oficina de Londres.

Los casos de tortura que documentamos y otros más provocaron que llegara a Guerrero el relator especial de la ONU contra la tortura, Nigel Rodley. Fue más o menos en 1997. Ya estaba David Fernández como director del Prodh. Ellos llevaban varios casos, incluyendo el de los zapatistas. Se logró que el relator viniera a México. Viajó a Chilpancingo. Nos coordinamos con David; nos dijo que iban a tratar con él casos de personas que habían sido torturadas. En Chilpancingo le presentamos al relator 10 casos de tortura. Fue un aprendizaje básico. En aquel entonces no sabíamos qué significaba ser un relator.

El relator contra la tortura nos explicó cómo el caso de Magencio era una muestra de tortura con métodos científicos. Según él, por todos los testimonios que recabó sobre los métodos de tortura, se veía que había una práctica muy sofisticada.

Todos esos casos estaban ligados a luchas sociales. En su mayoría, el Ejército era el responsable de las torturas. Fue la primera vez que tuvimos la experiencia de lo que significaba denunciar casos con un relator de la ONU.

Posteriormente nos encontramos con Asma Jahangir, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones. Le planteamos el caso de El Charco. Nosotros coordinamos su visita en Chilpancingo. Aunque una organización no quería que nosotros presentáramos a las viudas, al final logramos que hablara por lo menos con tres de ellas. Eso nos fue fogueando para tener contacto con los relatores de la ONU sobre tortura y desapariciones.

El caso de Aguas Blancas fue en el que por primera ocasión vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en pleno. Estuvieron en Acapulco. Aunque nosotros apenas estábamos naciendo, participamos en la audiencia. A raíz de ese encuentro, empezamos a conocer que existía la CIDH.

Amnistía Internacional conoció nuestro trabajo, sobre todo en el tema de tortura. Establecimos contacto con el investigador Rupert Knox en su ofici-

na de Londres. Con él aprendimos mucho. Tuvimos mucha cercanía. A él le pareció que los casos que estábamos documentando eran muy importantes.

Sin que nos lo propusiéramos, comenzamos a hablar con los relatores. Nuestro trabajo comenzó a tener impacto internacional. No teníamos idea de que ésa era la materia prima de la defensa de los derechos humanos. En nuestra labor, partíamos desde lo más profundo de la vida de las víctimas. Eso nos fue proyectando. Nos fue dando a conocer.

Establecer vínculos con el Prodh, con la Red, participar en misiones civiles de investigación sobre casos graves, que viniera Amnistía Internacional, que Amnistía declarara preso de conciencia a Felipe Arriaga, nos hizo visibles.

Felipe era un campesino ecologista de la Sierra de Petatlán. A pesar de que su caso no era un litigio en términos internacionales, sino local, Amnistía lo declaró preso de conciencia. Eso generó un impacto grandísimo. Se organizó una campaña muy grande por su liberación. No dimensionamos hasta dónde impactan esas campañas. Con Felipe logramos hermanarnos con Amnistía.

El caso de Felipe fue un salto. Demostramos su inocencia. Probamos que era un campesino ecologista. Fue la primera vez que supimos lo que era defender un preso de conciencia y todas sus implicaciones. Amnistía no adopta a alguien como preso de conciencia si no tiene primero el expediente, si no sabe de qué lo acusan y la trayectoria de la persona.

Todo eso empezamos a elaborarlo nosotros. Comenzamos a hacer un trabajo de documentación más fino. Ahí aprendimos a documentar. Entendimos que lo más importante es el testimonio de la persona levantado con mucho rigor, el contexto en que se da y los patrones delictivos en que el gobierno quiere ubicarla. Nos entrenamos para incursionar en ligas mayores.

Lo hicimos sin tener claridad de que lo estábamos haciendo. Ése es el tema siempre. Vamos abriendo los ojos en la medida en que atravesamos ciertos umbrales de violencia, de violaciones graves. Y, con el apoyo de otros actores (lo mismo Amnistía que el ex relator contra la tortura Juan N. Méndez), vamos viendo escenarios luminosos. Que ellos nos dijeran: “Ustedes están haciendo un trabajo muy importante”, tuvo mucho valor para nosotros.

La cooperación internacional

Hay fundaciones que dan apoyos importantes para el funcionamiento de Tlachinollan. Tienen lineamientos muy claros. Con ellas hay una colaboración estrecha, en la que siempre cuenta el factor confianza.

El que ahora las agencias accedan a recursos públicos para la cooperación internacional de sus gobiernos vuelve más estrictas la supervisión y las directrices. La relación con ellas es más difícil. Ya no se trata solamente de llegar a acuerdos con la fundación, sino de cumplir con los lineamientos que plan-

tean los fondos de cooperación gubernamentales. Hay ciertas directrices que los donatarios debemos cumplir, en términos, sobre todo, de resultados tangibles. Eso es complicado porque la lucha por los derechos humanos consta de procesos de largo aliento, en los que no se perciben avances concretos.

Se nos dan lineamientos sobre la forma en que debemos trabajar, sobre todo acerca del manejo transparente de los recursos, de cumplir con los tiempos establecidos, de los lapsos para realizar las actividades, de dar cumplimiento a los indicadores que tienen. Todas las agencias piden eso.

Nosotros quisiéramos contar con fondos generales (y no sólo destinados a proyectos específicos) para manejar los recursos con mayor flexibilidad. Pero no se puede. Hay que gastar las donaciones en los rubros para los que fueron etiquetadas. Eso nos complica el trabajo. En contrapartida, tenemos agencias que financian 30 por ciento de todo nuestro proyecto. Así que esta relación tiene sus costos y sus beneficios.

Llevamos muchos años trabajando con algunas fundaciones. Con Misereor hemos colaborado casi 24 años. Todo ese tiempo nos ha apoyado. Con la Fundación McArthur hemos cooperado cerca de 20 años. Son fundaciones grandes, que nos han respaldado durante mucho tiempo. Con ellas hay una relación cercana. Conocen el trabajo de Tlachinollan. Saben que hay resultados. Saben que, con mucho es-

fuerzo, hacemos un trabajo muy difícil en contextos muy adversos. Todo nuestro equipo tiene un compromiso probado. Más que un proyecto con una metodología bien armada, les interesan los resultados, el trabajo serio, que tenga incidencia. Y eso es lo que nosotros hacemos.

Las agencias tienen la inquietud de cómo podemos diversificar la recaudación de fondos. Les preocupa que no obtengamos recursos de otras fuentes, sino solamente de ellas. Quieren que diversifiquemos nuestras fuentes de financiamiento en el plano nacional. Buscan que consigamos bienhechores a título personal, buscando otras formas de recaudar fondos, y que accedamos a recursos públicos. Es uno de los desafíos que tenemos por delante.

XIV EL HORIZONTE

Los retos

Uno de los retos centrales de Tlachinollan en la Montaña es la defensa del territorio. En nuestra agenda enfrentamos desafíos muy grandes, pero, para nosotros, el asunto del territorio es fundamental. Ya lo dijo con toda su sabiduría la señora Tauli-Corpuz, relatora de los Pueblos Indígenas, ahora que presentó su informe. Uno de los temas importantes es cómo garantizar a los pueblos el derecho a la consulta, pero sobre todo, el derecho a la libre determinación.

Para nosotros, el tema clave es la libre determinación de los pueblos como el eje rector de los derechos colectivos. Eso implica autonomía, autogobierno, propiedad comunal de los pueblos, respeto a sus decisiones. Es un gran reto, sobre todo en la Montaña. La gente lo ha entendido. Lo enfrenta con diferentes estrategias. Está defendiendo su territorio, buscando protegerse.

Ya lo hizo San Miguel del Progreso. Lo apoyamos con el amparo. Le demostramos a la Secretaría de Economía, en el gobierno de Enrique Peña Nieto,

que no se puede despojar a los pueblos, que hay que consultarlos. Aun así, la Secretaría se atrevió a afirmar que San Miguel no era pueblo indígena y que el derecho al territorio no implicaba que tuviera derecho al subsuelo. Parecía decir indignada: “¡Qué se creen los pueblos!”

Los pueblos no están naciendo ahora. Han sabido defender su territorio históricamente. Nadie les puede quitar el derecho a su territorio ancestral. Está probado que siempre ha sido de ellos, que ahí están sus antepasados.

Se ve difícil, pero es una lucha muy importante. Lo que más nos anima es que, aparte de los recursos jurídicos que todavía existen en la ley –y que esperamos que se sigan consolidando– está la organización de los pueblos.

En la Montaña han formado su Concejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. No habían descubierto el potencial político que tienen los comisariados de bienes comunales. Son un poder importante para conservar su territorio. Como lo son, también, sus consejos de vigilancia. Son como los gobernadores de sus territorios.

Ahora cuentan con una confederación de gobernadores por la tierra, por decirlo de algún modo. Son por lo menos 23 núcleos agrarios. Estamos hablando de los núcleos agrarios de la Montaña Alta, donde nacen los ríos de Guerrero: el Balsas y el Papagayo. Ahí están los comisarios defendiendo sus territorios.

Hay un horizonte muy grande en la defensa del territorio con los pueblos. Ellos son los verdaderos defensores del territorio. Son los que están dispuestos a todo. Nos lo han demostrado tanto los compañeros de la Montaña como los compañeros del CECOP, cuando han defendido el río, cuando han defendido la tierra.

Con el CECOP logramos echar abajo varias resoluciones agrarias. Argumentamos que las asambleas fueron espurias. Mostramos que no se aplicó adecuadamente el derecho a la consulta. Tenemos esa experiencia.

Es un gran reto cómo consolidar esas experiencias alcanzadas frente a los tribunales agrarios, frente a los juzgados federales. También, cómo combinar esa experiencia con la sabiduría milenaria de los pueblos. Es un desafío muy importante.

Nos reconforta ver a los pueblos organizados en la Montaña y en la Costa. Una tarea muy importante que tenemos por delante es cómo consolidar esa organización.

También, poder enviar un mensaje al gobierno federal de que los megaproyectos no van a entrar en la Montaña, a no ser que los pueblos decidan lo contrario. Esperamos que respete y tome muy en cuenta esta reserva, tanto de los bienes naturales como culturales. Es una reserva del México profundo, que hay que cuidar y proteger. Lo mínimo que pedimos es que no se mancille el patrimonio de los pueblos que han sabido resistir en México.

Queremos saber acompañar y fortalecer su proyecto como pueblos, construir con ellos otro modelo de desarrollo. Un proyecto que parta de una relación humanista con la naturaleza, que nada tiene que ver con el extractivismo.

La Guardia Nacional

La formación de la Guardia Nacional es todo un desafío. Comparémosla con el modelo de la Policía Comunitaria, como un modelo de proximidad, como se le ha llamado en otros lugares. Qué mejor prójimo que una policía comunitaria en la Montaña. Ahí se ha articulado una policía comunitaria al cuidado del territorio y de la seguridad de los pueblos. Eso es muy importante.

El problema con la Guardia Nacional es que tiene un componente militar. Históricamente, en Guerrero, el componente militar ha sido devastador. Está probado que el Ejército ha cometido graves violaciones a derechos humanos: tortura, ejecuciones, desapariciones.

Pero, además, hay un problema adicional, que no se está tomando en cuenta. En Guerrero hay una deuda que no está saldada. Quienes han violado los derechos humanos no han sido llamados a juicio. No se ha castigado a los responsables. No ha habido una justicia que repare daños. No hay garantía de que no se vuelvan a cometer esas atrocidades.

Con estos antecedentes, es un error dar carta de naturalización al Ejército sin que antes se haga una

evaluación de qué ha pasado con los 12 años de la guerra contra el narcotráfico que declaró Felipe Calderón. ¿Dónde están los resultados? ¿Cómo explicar que Guerrero lleva 40 años militarizado y sigue siendo el estado más violento del país? ¿Qué pasó con el Ejército aquí? ¿En verdad se dedicó a brindar seguridad o, por el contrario, tejió los negocios de la macrodelincuencia? ¿Qué es lo que realmente se puede decir de los militares que tomaron la seguridad pública en sus manos, impulsados por Acosta Chaparro y Rubén Figueroa en la década de los 70s? Tomaron todas las instituciones de seguridad para brindar seguridad y ahora, ¿cómo estamos?

En Guerrero no ha quedado atrás esa época sombría, siniestra. Mucha gente está buscando a sus hijos desaparecidos. Por ejemplo, Tita Radilla. Ella ha abanderado esta lucha con todas las viudas y familiares de Atoyac y de otras comunidades desde hace 40 años.

Decir que vuelva el Ejército, ahora vestido con una insignia de Guardia Nacional, cuando sabemos que no ha rendido cuentas al pueblo de Guerrero, es un agravio que puede generar problemas. El asunto va más allá del discurso de que se van a respetar los derechos humanos. Hay un hecho histórico: fue un violador de derechos humanos. Este violador de derechos humanos tiene que ser sancionado.

¿Qué va a pasar? Lamentablemente, el componente militar de la Guardia Nacional implica

fuerza, represión, confrontación. Representa enfrentar al enemigo. Hay temor de que se susciten situaciones de violencia, de que se produzcan graves violaciones de derechos humanos, de que se mantenga la impunidad, de que, en lugar de que se apague la violencia, se encienda más.

El asunto de los desaparecidos en Guerrero es un hecho emblemático. Es también uno de los más grandes retos que tenemos como Tlachinollan, junto a otras organizaciones como el Prodh, como Fundar, como Serapaz.

Pasado y futuro

La formación de promotores y de comités de defensa de los derechos humanos ha sido una labor cuesta arriba. Después de un tiempo de trabajar en esta tarea, de tener promotores comunitarios en varios lados, nos preguntamos qué seguía. Nos propusimos que la gente eligiera a sus promotores. Pero fue una ilusión. Los promotores no tenían recursos para hacer su labor. Necesitaban trabajar en la tierra, en el campo. Se requería que estuvieran muy atentos a la documentación de casos, pero no podían hacerlo.

Pero también sucedió que los defensores comunitarios que formamos se metieron a la política. De repente, algunos se volvieron presidentes municipales. Utilizaron el discurso de los derechos humanos e incursionaron en los grupos políticos. Los que lograron tener éxito se fueron a los partidos.

Nos faltó dar más acompañamiento a los que actuaban con una dimensión comunitaria. No pudimos hacer presencia con ellos, ayudarlos a legitimar su papel, su función. Eso provocó que no alcanzaran a desarrollar todo lo que podían o sabían. No teníamos fondos para ayudarles en sus necesidades de acompañamiento, de ir a los lugares donde pasaban los hechos. Algunos se transformaron en agentes de pastoral con la parroquia, en catequistas. Daban pláticas a la gente sobre derechos humanos, pero en la línea religiosa, católica.

Nos dimos cuenta de que la figura del defensor de derechos humanos formado a partir de una lógica individual no pegó. Cada uno agarró un camino diferente. El proyecto no se logró. En cambio, los que se formaron en procesos organizativos cuajaron bien. Ahí siguen.

Así sucedió con promotores de la organización comunitaria que se incorporaron con la Policía Comunitaria. En los hechos, su campo de acción no era el de promotor o defensor de derechos humanos, sino el de promotor de la organización comunitaria. Hay consejeros de la CRAC que vienen de los talleres de Tlachinollan. Despuntaron quienes tenían articulación con algún movimiento local, ya sea en defensa de territorio, de Policía Comunitaria, de radios comunitarias o de procesos colectivos.

Nos dedicamos a formar personas en lo individual, en lugar de promover una formación más

comunitaria. Es algo que no dimensionamos adecuadamente.

Pero hoy las cosas han cambiado. Las víctimas se han transformado en la avanzada de la lucha de los derechos humanos. Los 43 son un ejemplo de ello.

Los 43 son el símbolo que condensa muchas luchas. Son la expresión más clara del México adolorido, el México que busca justicia. Son también un modelo de cómo hay que pelear para que se vaya desmontando la estructura delincencial. La forma de batallar que hemos dado con ellos, tanto a nivel interno como internacional, ha logrado romper el esquema de control de las instituciones por grupos mafiosos. También el enquistamiento de la delincuencia organizada. Con su lucha se ha dado un golpe muy fuerte a este modelo.

Estamos en una etapa de resquebrajamiento de este control. Pero no sabemos si este resquebrajamiento va a provocar que esta estructura delincencial se desmorone o si va a mantener su influencia dentro de instituciones como la Fiscalía. Es un gran desafío.

La asistencia técnica internacional es clave para generar un equilibrio entre la lucha local y la observación internacional. Su participación va a ser importante para seguir monitoreando, acompañando, ayudando a esta lucha, y para fortalecer el trabajo de las organizaciones locales.

Como Tlachinollan, hemos acompañado la lucha de los 43. Ahí está el abogado Vidulfo Rosales.

Aunque su trabajo es básicamente el de un defensor, está siempre con las madres y padres. Los acompaña, no solamente en las reuniones con las autoridades. Los acompaña en su cotidianidad. Ayuda a reconstruir la lucha y a establecer alianzas con otras organizaciones sociales y sindicales.

El movimiento es disruptor. No tiene solamente una demanda social. Es un movimiento de transformación social. Como defensores y defensoras, tenemos que entender que no basta el registro, la documentación, la denuncia y la representación. Hay que ir en las filas del movimiento, estar ahí, apoyar su construcción, aliarse con otras organizaciones; hay que marchar en la primera línea para poder hablar, estar, dar voz y adquirir el acero de la gente.

Los familiares de los 43 son personas que tienen un corazón muy robusto. Los defensores todavía no tenemos ese corazón robusto. Está en juego nuestra seguridad, nuestra vida, nuestra integridad. Pero sabemos que esto no es nada, comparado con lo que los 43 ponen en juego. Si ellos necesitan poner en juego su vida, la ponen en juego.

Los movimientos de víctimas son los que ahora están en la primera línea de fuego. Las organizaciones de defensores nos hemos quedado rezagadas. Estábamos dizque denunciando las graves violaciones, denunciando la situación, pero al final, resulta que la realidad nos desbordó. Ahora la gente que sufre dio el salto. Es esa gente la que está al

frente de la lucha por los derechos humanos. Nuestro reto es cómo colocarnos a su lado.

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

Pertenece a una generación que tras el 68 mexicano se vinculó a movimientos populares alternativos. Actualmente es coordinador de *Opinión* y articulista de *La Jornada*. A mediados de los setenta fue organizador de sindicatos independientes. Fue fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y asesor de organizaciones campesinas y cafetaleras. Participó en los Diálogos de San Andrés y fue secretario técnico de la Comisión de Seguimiento y Verificación para los Acuerdos de Paz en Chiapas.

Ha formado parte de proyectos de prensa crítica como *Información Obrera*, de asociaciones de promoción al desarrollo de base, y de centros de investigación como el Ceccam. Entre sus libros se encuentran: *Chiapas: la guerra y la paz y la paz y Chiapas: la nueva lucha india, Sentido contrario*. Compiló con Carlota Botey y Julio Moguel *Autonomía y nuevos sujetos sociales de desarrollo rural*; con Ramón Vera Herrera, *Acuerdos de San Andrés*; y con Francisco Pérez Arce, *Las luchas magisteriales 1979-1981*.

ABEL BARRERA HERNÁNDEZ

Activista por los derechos humanos y antropólogo mexicano. Es el fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Publicaciones de Para Leer en Libertad AC:

1. **Para Leer en Libertad.** Antología literaria.
2. **El cura Hidalgo,** de Paco Ignacio Taibo II.
3. **Jesús María Rangel y el magonismo armado,** de José C. Valadés.
4. **Se llamaba Emiliano,** de Juan Hernández Luna.
5. **Las Leyes de Reforma,** de Pedro Salmerón.
6. **San Ecatepec de los obreros,** de Jorge Belarmino Fernández.
7. **La educación francesa se disputa en las calles,** de Santiago Flores.
8. **Librado Rivera,** de Paco Ignacio Taibo II.
9. **Zapatismo con vista al mar: El socialismo maya de Yucatán,** de Armando Bartra.
10. **La lucha contra los gringos: 1847,** de Jorge Belarmino Fernández.
11. **Ciudad quebrada,** de Humberto Musacchio.
12. **Testimonios del 68.** Antología literaria.
13. **De los cuates pa' la raza.** Antología literaria.
14. **Pancho Villa en Torreón,** de Paco Ignacio Taibo II y John Reed.
15. **Villa y Zapata,** de Paco Ignacio Taibo II, John Reed y Francisco Pineda.
16. **Sembrar las armas: la vida de Rubén Jaramillo,** de Fritz Glockner.
17. **La oveja negra,** de Armando Bartra.
18. **El principio,** de Francisco Pérez Arce.
19. **Hijos del águila,** de Gerardo de la Torre.

20. **Morelos. El machete de la Nación**, de varios autores.
21. **No hay virtud en el servilismo**, de Juan Hernández Luna.
22. **Con el mar por medio. Antología de poesía del exilio español**, de Paco Ignacio Taibo I.
23. **Con el puño en alto**, de Mario Gill, José Revueltas, Mario Núñez y Paco Ignacio Taibo II.
24. **El viento me pertenece un poco (poemario)**, de Enrique González Rojo.
25. **Cero en conducta. Crónicas de la resistencia magisterial**, de Luis Hernández Navarro.
26. **Las dos muertes de Juan Escudero**, de Paco Ignacio Taibo II.
27. **Y si todo cambiara... Antología de ciencia ficción y fantasía**. Varios autores.
28. **Con el puño en alto 2. Crónicas de movimientos sindicales en México**. Antología literaria.
29. **De los cuates pa' la raza 2**. Antología literaria.
30. **El exilio rojo**. Antología literaria.
31. **Siembra de concreto, cosecha de ira**, de Luis Hernández Navarro.
32. **El Retorno**, de Roberto Rico Ramírez.
33. **Irapuato mi amor**, de Paco Ignacio Taibo II.
34. **López Obrador: los comienzos**, de Paco Ignacio Taibo II.
35. **Tiempo de ladrones: la historia de Chucho el Roto**, de Emilio Carballido.
36. **Carrillo Puerto, Escudero y Proal. Yucatán, Acapulco y Guerrero. Tres grandes luchas de los años 20**, de Mario Gill.
37. **¿Por qué votar por AMLO?**, de Guillermo Zamora.
38. **El desafuero: la gran ignominia**, de Héctor Díaz Polanco.

39. **Las muertes de Aurora**, de Gerardo de la Torre.
40. **Si Villa viviera con López anduviera**, de Paco Ignacio Taibo II.
41. **Emiliano y Pancho**, de Pedro Salmerón.
42. **La chispa**, de Pedro Moctezuma.
43. **Para Leer en Libertad en la Cuauhtémoc**. Antología literaria.
44. **El bardo y el bandolero**, de Jacinto Barrera Bassols.
45. **Historia de una huelga**, de Francisco Pérez Arce.
46. **Antología Literaria I ADO**. Varios autores.
47. **Antología Literaria II ADO**. Varios autores.
48. **Antología Literaria III ADO**. Varios autores.
49. **Antología Literaria IV ADO**. Varios autores.
50. **Todos somos migrantes**. Varios autores.
51. **Guevara historia**, de Carlos Soria Galvarro.
52. **Vagando entre sombras y otras historias**, de Guillermo Fabela.
53. **Hablar en tiempos oscuros**, de Bertold Brecht.
54. **Fraude 2012**. Antología varios autores.
55. **Inquilinos del DF**, de Paco Ignacio Taibo II.
56. **Folleto contra la Reforma Laboral**, de Jorge Fernández Souza.
57. **México indómito**, de Fabrizio Mejía Madrid.
58. **68: Gesta, fiesta y protesta**, de Humberto Musacchio.
59. **Un pulso que golpea las tinieblas. Una antología de poesía para resistentes**. Varios autores.
60. **1968. El mayo de la revolución**, de Armando Bartra.
61. **Tres años leyendo en libertad**. Antología literaria.
62. **El viejo y el horno**, de Eduardo Heras León.
63. **El mundo en los ojos de un ciego**, de Paco Ignacio Taibo II.
64. **Más libros, más libros**, de Huidobro (no descargable).

65. **No habrá recreo, (Contra-reforma constitucional y desobediencia magisterial)**, de Luis Hernández Navarro.
66. **Sin novedad en el frente**, de Erich Maria Remarque.
67. **Azcapotzalco 1821. La última batalla de una independencia fallida**, de Jorge Belarmino Fernández.
68. **Los brazos de Morelos**, de Francisco González.
69. **La revolución de los pintos**, de Jorge Belarmino Fernández.
70. **Memorias de la lucha sandinista Tomo I**, de Mónica Baltodano (no descargable).
71. **Memorias de la lucha sandinista Tomo II**, de Mónica Baltodano (no descargable).
72. **Memorias de la lucha sandinista Tomo III**, de Mónica Baltodano (no descargable).
73. **Memorias de la lucha sandinista Tomo IV**, de Mónica Baltodano (no descargable).
74. **Camilo Cienfuegos: el hombre de mil anécdotas**, de Guillermo Cabrera Álvarez.
75. **En recuerdo de Nezahualcóyotl**, de Marco Antonio Campos.
76. **Piedras rodantes**, de Jorge F. Hernández.
77. **Socialismo libertario mexicano (Siglo XIX)**, de José C. Valadés.
78. **El gran fracaso. Las cifras del desastre neoliberal mexicano**, de Martí Batres.
79. **Rebeliones**, de Enrique Dussel y Fabrizio Mejía Madrid.
80. **Para Leer en Libertad FIL Zócalo 2013**. Antología literaria.
81. **Un transporte de aventuras. El Metro a través de la mirada de los niños**. Antología.

82. **Padrecito Stalin no vuelvas.** Antología.
83. **En un descuido de lo imposible,** de Enrique González Rojo.
84. **Tierra Negra.** Cómic (no descargable).
85. **Memorias Chilenas 1973,** de Marc Cooper.
86. **Ese cáncer que llamamos crimen organizado.** Antología de relatos sobre el narcotráfico. Varios autores.
87. **76. Lázaro Cárdenas: el poder moral,** de José C. Valadés.
88. **Canek,** de Ermilo Abreu.
89. **La línea dura,** de Gerardo de la Torre.
90. **San Isidro futbol,** de Pino Cacucci.
91. **Niña Mar,** de Francisco Haghenbeck y Tony Sandoval.
92. **Otras historias.** Antología.
93. **Tierra de Coyote.** Antología.
94. **El muro y el machete,** de Paco Ignacio Taibo II.
95. **Antología Literaria 2da feria en Neza.** Varios autores.
96. **Cien preguntas sobre la Revolución Mexicana,** de Pedro Salmerón.
97. **Larisa, la mejor periodista roja del Siglo XX,** de Paco Ignacio Taibo II.
98. **Topolobampo,** de José C. Valadés.
99. **De golpe.** Antología.
100. **Sobre la luz. Poesía militante,** de Óscar de Pablo.
101. **Hermanos en armas. La hora de las policías comunitarias y las autodefensas,** de Luis Hernández Navarro.
102. **Teresa Urrea. La Santa de Cabora,** de Mario Gill.
103. **Memorias de Zapatilla,** de Guillermo Prieto.
104. **Práxedes Guerrero y la otra Revolución posible,** de Jesús Vargas Valdés.
105. **La correspondencia entre Benito Juárez y Margarita Maza,** de Patricia Galeana.

106. **Espartaco**, de Howard Fast.
107. **Para Leer de Boleto en el Metro (Segunda temporada 1)**. Antología literaria.
108. **Para Leer de Boleto en el Metro (Segunda temporada 2)**. Antología literaria.
109. **Los hombres de Panfilov**, de Alejandro Bek.
110. **Diez días que conmovieron al mundo**, de John Reed.
111. **Vietnam heroica**. Varios autores.
112. **Operación masacre**, de Rodolfo Walsh (no descargable).
113. **Cananea**, de Arturo Cano.
114. **Guerrero bronco**, de Armando Bartra.
115. **Misterios de seis a doce**, de Rebeca Murga y Lorenzo Lunar.
116. **La descendencia del mayor Julio Novoa**, de Gerardo de la Torre.
117. **Otras miradas**. Varios autores.
118. **Relatos de impunidad**, de Lorena Amkie.
119. **No sabe a mermelada**, de Carlos Ímaz.
120. **Conflicto en cuatro actos, el movimiento médico México 1964-1965**, de Ricardo Pozas Horcasitas.
121. **Ciudad Cenzontle**, de José Alfonso Suárez del Real.
122. **Regalos obscenos, lo que no pudo esconder el pacto contra México**. Varios autores.
123. **Con el corazón en su sitio. La historia de los hermanos Cerezo**, de los Hermanos Cerezo.
124. **El pueblo es inmortal**, de Vassili Grossman.
125. **Dos historias**, de Horacio Altuna (no descargable).
126. **Tierra negra 2**. Cómic (no descargable).
127. **El estilo Holtz**, de Paco Ignacio Taibo II.
128. **Julio César Mondragón**. Varios autores.
129. **Abrapalabra**, de Luis Britto.

130. **Los 43 de Ayotzinapa**, de Federico Mastrogiovanni.
131. **Anticipaciones: una mirada al futuro de Nuestramérica**, de Armando Bartra.
132. **Asesinato en la Cuesta de los millonarios**, de Gisbert Haefs.
133. **Terraza Marlowe**, de Bruno Arpaia.
134. **Juárez. La rebelión interminable**, de Pedro Salmerón.
135. **La gran marcha. Reminiscencias**. Varios autores.
136. **Taxco en lucha**, de Aarón Álvarez.
137. **El capitán sangrefría**, de Óscar de Pablo.
138. **Norman Bethune**, de Eduardo Monteverde.
139. **El poeta cautivo**, de Alfonso Mateo-Sagasta.
140. **El hombre de la leica**, de Fermín Goñi.
141. **La balada de Chicago**, de Hans Magnus Enzensberger.
142. **Defendiendo derechos y libertades de los y las capitalinas**, de José Alfonso Suárez del Real.
143. **Las ratas invaden la escena del cuádruple crimen**, de Javier Sinay.
144. **La marca del Zorro**, de Sergio Ramírez.
145. **¿Qué hay que saber sobre la Reforma Educativa?**
146. **La novena ola magisterial**, de Luis Hernández Navarro.
147. **Banana Gold**, de Carleton Beals.
148. **Libertad es osadía**, de Leonel Manzano.
149. **La jungla**, de Upton Sinclair.
150. **La huelga que vivimos**, de Francisco Pérez Arce.
151. **Un dólar al día**, de Giovanni Porzio.
152. **Queremos todo**, de Nanni Balestrini.
153. **Pinturas de guerra**, de Ángel de la Calle (no descargable).
154. **La cara oculta del Vaticano**, de Sanjuana Martínez (no descargable.)

155. **Milpas de la ira**, de Armando Bartra.
156. **Una latinoamericana forma de morir**. Varios autores (no descargable)
157. **Una antología levemente odiosa**, de Roque Dalton.
158. **Biografía del Che**, de Paco Ignacio Taibo II (no descargable).
159. **Pesadilla de último momento**, de Aarón Álvarez.
160. **CEU**, de Martí Batres.
161. **Un corresponsal de guerra mexicano**, de Guillermo Zamora.
162. **Herón Proal**, de Paco Ignacio Taibo II.
163. **Manifiesto comunista**, de Enrique González Rojo.
164. **Más REVUELTAS. Cinco aproximaciones a la vida de Pepe**. Varios autores.
165. **Lo que no fue**, de Kike Ferrari.
166. **Damas del tiempo**, de Pedro Miguel.
167. **Mis gloriosos hermanos**, de Howard Fast.
168. **Iván**, de Vladimir Bogomolov.
169. **Antología de cuentos**, de Raúl Argemí.
170. **Benita**, de Benita Galeana.
171. **Antología de cuentos**, de Juan M. Aguilera y Luis Britto.
172. **La ciudad, la otra**, de Raúl Bautista González, Súper Barrio.
173. **La otra revolución rusa, populismo y marxismo en las revueltas campesinas de los siglos XIX y XX**, de Lorena Paz Peredes.
174. **El mundo de Yarek**, de Elia Barceló.
175. **1905**, de León Trotsky.
176. **Los once de la tribu**, de Juan Villoro.
177. **¿Qué hacer antes y después del sismo?**
178. **Romper el silencio**, varios autores.

179. **Break the silence**, varios autores.
180. **Caramba y zamba la cosa, el 68 vuelto a contar**, de Francisco Pérez Arce.
181. **Los que deben morir**, de F. Mond.
182. **La muerte tiene permiso y más...**, de Edmundo Valadés.
183. **Para fechas vacías que veremos arder**, de Roberto Fernández Retamar.
184. **Allá en la nopalera**, de Carlos Ímaz.
185. **Historias sorprendentes**. Varios autores.
186. **La revolución magonista. Cronología narrativa**, de Armando Bartra y Jacinto Barrera.
187. **Las bolcheviques**, de Óscar de Pablo.
188. **Cartucho**, de Nellie Campobello.
189. **Cuadernos desde la cárcel**, de Ho Chi Minh.
190. **La frontera**, de Patrick Bard.
191. **La Gran Revolución Francesa (Tomo I)**, de Piotr Kropotkin.
192. **La Gran Revolución Francesa (Tomo 2)**, de Piotr Kropotkin.
193. **No digas que es prieto, di que está mal envuelto**, de Fabrizio Mejía Madrid.
194. **El voto fue unánime: estábamos por la utopía. Memorias del 68**, de Tariq Ali.
195. **Vidas exageradas**, de José Manuel Fajardo.
196. **La desaparición de la nieve**, de Manuel Rivas.
197. **Derrotas que hacen historia. La Comuna de París**, de Armando Bartra.
198. **Los nuevos herederos de Zapata**, de Armando Bartra.
199. **Aquí manda la escoba**, de Óscar de Pablo.
200. **Tony Guiteras**, de Paco Ignacio Taibo II (no descargable).

201. **En la guerra de España**, de André Malraux.
202. **Las nuevas luchas campesinas**, de Armando Bartra.
203. **Su hogar es el mundo entero**, de Óscar de Pablo.
204. **Nuestro Gato Culto**, de Paco Ignacio Taibo I.
205. **Tina Modotti**, de Ángel de la Calle (no descargable).
206. **El principio, los primeros cuatro meses**,
de Armando Bartra.
207. **Una juventud en Alemania**, de Ernst Toller.
208. **Consuelo Uranga. La Roja**, de Jesús Vargas.
209. **Los peligros profesionales del poder**,
de Kristian Rakovsky.
210. **Mujeres zapatistas. La otra cara de la Revolución**,
de Angélica Noemí Juárez Pérez y Miguel Ángel
Ramírez Jahuey.
211. **Fátima**, de Jürgen Alberts.
212. **Entre amigos, antología literaria**. Varios autores.
213. **No hay nada más asombroso que la verdad**.
Varios autores.
214. **La participación de Israel en la militarización
de México**. Varios autores.
215. **Hacia una nueva cartilla ético-política**,
de Enrique Dussel.
216. **Un año ya y la cuarta va**,
de Armando Bartra.
217. **Desde el corazón de la montaña**, de Luis H. Navarro
y Abel Jesús Barrera Hernández.
218. **Vigilia Lula libre**, de Áurea Lopes.
219. **El secreto de mi jardín**, de Fermín Goñi.

Descarga todas nuestras publicaciones en:
www.brigadaparaleerenlibertad.com

Este libro se editó en la Ciudad de México.

Todos los derechos reservados.